



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

///doba, 14 de agosto de 2023.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"LEGAJO DE APELACIÓN de FERNANDEZ, Natalia Vanesa y otros en autos: FERNANDEZ, Natalia Vanesa y otros por ALTERACIÓN DOLOSA DE REGISTROS, ASOCIACIÓN ILÍCITA, EVASIÓN AGRAVADA TRIBUTARIA" (Expte. FCB 1392/2020/87/CA30)**, venidos a conocimiento de la **Sala B** de esta Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba en virtud de los recursos de apelación interpuestos por los señores abogados co-defensores Dres. María Eugenia D'antona y José Miguel D'antona, en representación del imputado Martín José Dus; la señora Defensora Oficial, Dra. María Mercedes Crespi, en representación de la imputada Jessica Yamila Bodes; el señor abogado defensor Dr. Facundo Cortes Olmedo, en representación del imputado Leuterio Carlos Bonetto; el señor abogado defensor Dr. Claudio Martín Juárez Centeno, en representación de los coimputados Diego Alberto Vieyra Ferreyra y Jorge Daniel Cuevas; el señor Fiscal Federal N° 1 de Córdoba, Dr. Enrique Senestrari, la Dra. Cecilia María Minaverry en representación de la querellante AFIP-DGI, con el patrocinio letrado del Dr. Federico Manzino; los Dres. Leandro Ariel Ventura, María Fernanda Cruz y Adolfo Tonin Monzón en representación de la querellante Unidad de Información Financiera; en contra de la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso: **"1.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva de Diego Alberto Vieyra Ferreyra en relación a los delitos de alteración dolosa de registros fiscales (art. 11 de la Ley 27.430); alteración dolosa de registros fiscales agravado por el concurso de dos o más personas (art. 11 inc. "a" y art. 15**

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

inc. "b" de la ley 27.430); asociación ilícita fiscal agravada por el rol de organizador (art. 15 inc. "c", 2ª parte de la Ley 27.430); y lavado de activos (art. 303 inc. 1 del C.P.), todos en carácter de autor (art. 45 del C.P.); y **TRABAR EMBARGO** sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos cinco millones (\$ 5.000.000), o en su defecto inhibirlo de su libre disposición por igual monto (art. 518 C.P.P.N).- **2.- CONCEDER LA EXCARCELACIÓN a Diego Alberto Vieyra Ferreyra**, y en consecuencia ordenar su inmediata **LIBERTAD**, bajo la caución real de pesos doce millones de mil (\$12.000.000) previamente efectivizada, debiéndose labrar por Secretaria el acta que prescribe el citado cuerpo legal filiado en el principal. **3.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO** sin prisión preventiva de **Natalia Soledad Vieyra Ferreyra** en relación al delito de **alteración dolosa de registros fiscales** (art. 11 de la Ley 27.430); **alteración dolosa de registros fiscales agravado por el concurso de dos o más personas** (art. 11 inc. "a" y art. 15 inc. "b" de la ley 27.430); **asociación ilícita fiscal** (art. 15 inc. "c" de la Ley 27.430), todos en carácter de autora (art. 45 del C.P.); y **TRABAR EMBARGO** sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos quinientos mil (\$ 500.000), o en su defecto inhibirla de su libre disposición por igual monto (art. 518 C.P.P.N).- **4.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO** sin prisión preventiva de **Ruth Noemí Díaz** en relación al delito de **asociación ilícita fiscal** (art. 15 inc. "c" de la Ley 27.430), en carácter de autora (art. 45 del C.P.); y **TRABAR EMBARGO** sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos quinientos mil (\$ 500.000), o en su defecto inhibirla de su libre disposición por igual monto (art. 518 C.P.P.N). **5.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO** sin prisión preventiva de **Eduardo**

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

Enrique Mansilla en relación al delito de **asociación ilícita fiscal** (art. 15 inc. "c" de la Ley 27.430), en carácter de autor (art. 45 del C.P.); y **TRABAR EMBARGO** sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos quinientos mil (\$ 500.000), o en su defecto inhibirlo de su libre disposición por igual monto (art. 518 C.P.P.N). **6.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO** sin prisión preventiva de **María Belén Gómez** en relación al delito de **asociación ilícita fiscal** (art. 15 inc. "c" de la Ley 27.430), en carácter de autora (art. 45 del C.P.); y **TRABAR EMBARGO** sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos quinientos mil (\$ 500.000), o en su defecto inhibirla de su libre disposición por igual monto (art. 518 C.P.P.N). **7.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO** sin prisión preventiva de **Damián Gabriel Olivieri Brizuela** en relación al delito de **asociación ilícita fiscal** (art. 15 inc. "c" de la Ley 27.430), en carácter de autor (art. 45 del C.P.); y **TRABAR EMBARGO** sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos quinientos mil (\$ 500.000), o en su defecto inhibirlo de su libre disposición por igual monto (art. 518 C.P.P.N). **8.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO** sin prisión preventiva de **Martín José Dus** en relación al delito de **asociación ilícita fiscal** (art. 15 inc. "c" de la Ley 27.430), en carácter de autor (art. 45 del C.P.); y **TRABAR EMBARGO** sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos quinientos mil (\$ 500.000), o en su defecto inhibirlo de su libre disposición por igual monto (art. 518 C.P.P.N). **9.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO** sin prisión preventiva de **Jorge Daniel Cuevas** en relación al delito de **asociación ilícita fiscal** (art. 15 inc. "c" de la Ley 27.430), en carácter de autor (art. 45 del C.P.); y **TRABAR EMBARGO** sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos quinientos mil (\$

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

500.000), o en su defecto inhibirlo de su libre disposición por igual monto (art. 518 C.P.P.N). **10.- SOBRESEER a Cristian Debarre del delito de asociación ilícita fiscal (art. 15 inc. "c" de la Ley 27.430), en carácter de autor (art. 45 del C.P.) conforme a lo establecido en el art. 336, inc.3 del C.P.P.N. 11.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva de Sebastián Toranzo en relación al delito de asociación ilícita fiscal (art. 15 inc. "c" de la Ley 27.430), en carácter de autor (art. 45 del C.P.); y TRABAR EMBARGO sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos quinientos mil (\$ 500.000), o en su defecto inhibirlo de su libre disposición por igual monto (art. 518 C.P.P.N). 12.- ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL de Sergio Gabriel Sosa, Cristian Debarre y Mario Ernesto Casco (art. 10 de la ley 27.541) en relación al delito de evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas (art. 279 - 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "d" de la ley 27.430 y arts. 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "b" de la ley 24.769) y TRABAR EMBARGO sobre los bienes de Sosa, Debarre y Casco, hasta cubrir la suma de pesos treinta y dos millones (\$32.000.000.-) o en su defecto inhibirlos de su libre disposición por igual monto (art. 518 del C.P.P.N.), para cada uno de ellos. 13.- SOBRESEER a Silvina María Valeria Rincón, (art. 336 inc. 4 del C.P.P.N.) en relación al delito de evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas (art. 279 - 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "d" de la ley 27.430 y arts. 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "b" de la ley 24.769), haciendo expresa mención que la formación de la presente causa no afecta el buen nombre y honor del que**

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

hubiera gozado el nombrado (art. 334 y 336 del C.P.P.N.).

14.- SOBRESEER a Edsel Daniel Destefanis, María José Martínez Pizzichini, Paola Andrea Arévalo, María Cecilia Dolores Ribera Ardiles, Federico Carlos Dellamaggiore y Germán Daniel Destefanis, en relación al delito de evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas (art. 279 - 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "d" de la ley 27.430 y arts. 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "b" de la ley 24.769).

15.- ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL de Mauricio Andrés Pinto, Leandro Paolo Srur y Martín Alejandro Sarmiento (art. 10 de la ley 27.541) en relación al delito de evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas (art. 279 - 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "d" de la ley 27.430 y arts. 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "b" de la ley 24.769) y TRABAR EMBARGO sobre los bienes de Pinto, Srur y Sarmiento, hasta cubrir la suma de cuatro millones quinientos mil (\$4.500.000.-) o en su defecto, inhibirlos de su libre disposición por igual monto (art. 518 del C.P.P.N.), para cada uno de ellos.

16.- ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL de Jonathan Nahuel Suarez Cavalieri (art. 10 de la ley 27.541) en relación al delito de evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas (art. 279 - 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "d" de la ley 27.430 y arts. 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "b" de la ley 24.769) y TRABAR EMBARGO sobre los bienes de Suarez Cavalieri, hasta cubrir la suma dos millones quinientos mil (\$2.500.000.-), o en su defecto, inhibirlos de su libre disposición por igual monto (art. 518 del C.P.P.N.).

17.- ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL de César Eduardo Cappella,

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

Óscar Luque y Fernando Sciarra Villalba (art. 10 de la ley 27.541) en relación al delito de evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas (art. 279 - 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "d" de la ley 27.430 y arts. 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "b" de la ley 24.769) y TRABAR EMBARGO sobre los bienes de Cappella, Luque y Sciarra Villalba, hasta cubrir la suma de pesos cinco millones quinientos mil (\$5.500.000) o en su defecto, inhibirlos de su libre disposición por igual monto (art. 518 del C.P.P.N.), para cada uno de ellos. 18.- ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL de Patricio Rolando González (art. 10 de la ley 27.541) en relación al delito de evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas (art. 279 - 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "d" de la ley 27.430 y arts. 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "b" de la ley 24.769) 3.3.7 y TRABAR EMBARGO sobre los bienes González, hasta cubrir la suma de pesos dos millones (\$2.000.000.-), o en su defecto, inhibirlo de su libre disposición por igual monto (art. 518 del C.P.P.N.). 19.- ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL de Leuterio Carlos Bonetto (art. 10 de la ley 27.541) en relación al delito de evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas (art. 279 - 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "d" de la ley 27.430 y arts. 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "b" de la ley 24.769) y TRABAR EMBARGO sobre los bienes Bonetto, hasta cubrir la suma de pesos dos millones doscientos cincuenta mil (\$2.2500.000.-), o en su defecto, inhibirlo de su libre disposición por igual monto (art. 518 del C.P.P.N.). 20.- SOBRESEER a Mario Eduardo Morselli y Augusto Boero (arts. 335 y 336 inc. 3 del C.P.P.N.), en relación al

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

delito de evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas (art. 279 - 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "d" de la ley 27.430 y arts. 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "b" de la ley 24.769). **21.- ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL** de **Walter Ariel Ghione y Andrés Pollano** (art. 10 de la ley 27.541) en relación al delito de **evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas** (art. 279 - 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "d" de la ley 27.430 y arts. 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "b" de la ley 24.769) y **TRABAR EMBARGO** sobre los bienes González, hasta cubrir la suma de pesos cinco millones quinientos mil (\$5.500.000.-), o en su defecto, inhibirlos de su libre disposición por igual monto (art. 518 del C.P.P.N.), para cada uno de ellos. **22.- DECLARAR PARCIALMENTE LA INCOMPETENCIA MATERIAL** de este Juzgado Federal N° 1, para entender en la presente causa (**conf. art. 33, primer párrafo inc. "e" y "c" y art. 35 del C.P.P.N.**), respecto al delito de **defraudación por administración fraudulenta** (art. 173 inc. 7 del C.P.), hechos 95 y 96 del requerimiento de instrucción de fs. 4418/4420, extraer las copias pertinentes y remitirlas a la Justicia Provincial de esta ciudad de Córdoba. **23.- DECLARAR FALTA DE MÉRITO** a favor de **Martín Alejandro Sarmiento, César Eduardo Cappella, Fernando Sciarra Villalba, Leandro Paolo Srur, Mauricio Andrés Pinto, Patricio Rolando González, Leuterio Carlos Bonetto**, en relación al delito de **lavado de activos** (art. 303 inc. 1 del C.P.), en carácter de autores (art. 45 del C.P.), con la aplicación del art. 309 del C.P.P.N. **24.- SOBRESEER a Mario Eduardo Morselli y Augusto Boero** (arts. 335 y 336 inc. 3 del C.P.P.N.), en relación al delito de **lavado de**

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

activos (art. 303 inc. 1 del C.P.). 25.- **DECLARAR PARCIALMENTE LA INCOMPETENCIA MATERIAL** de este Juzgado Federal N° 1, para entender en la presente causa (**conf. art. 33, primer párrafo inc. "e" y "c" y art. 35 del C.P.P.N**), respecto al delito de lavado de activos (arts. 303 inc. 1 e inc. 3 del C.P.), sobre los hechos 97, 101, 102, 103 y 109 del requerimiento de instrucción de fs. 4630/4642, extraer las copias pertinentes y remitirlas a la Justicia Provincial de esta ciudad de Córdoba. 26.- **SOBRESEER a Jorge Daniel Cuevas** (arts. 335 y 336 inc. 3 del C.P.P.N.), en relación al delito de lavado de activos (art. 303 inc. 1 del C.P.), en carácter de autor (art. 45 del C.P.). 27.- **DECLARAR FALTA DE MÉRITO** a favor de **Sebastián Toranzo**, en relación al delito de lavado de activos (art. 303 inc. 1 del C.P.), en carácter de autor (art. 45 del C.P.), con la aplicación del art. 309 del C.P.P.N. 28.- **CONCEDER LA EXCARCELACIÓN a Mauricio Andrés Pizzi**, la que no se hará efectiva, atento que sigue vigente la prisión domiciliara dictada en la causa "PIZZI, MAURICIO ANDRÉS Y OTROS S/ INF. LEY 24.769" (FCB 8191/2020) y hasta tanto que la Excma. Cámara Federal de Apelaciones no resuelva la situación procesal de los imputados en dichos autos, debiendo mantener la caución real impuesta al momento de otorgarle la prisión domiciliaria al imputado. 29.- **DECLARAR PARCIALMENTE LA INCOMPETENCIA MATERIAL** de este Juzgado Federal N° 1, para entender en la presente causa (**conf. art. 33, primer párrafo inc. "e" y "c" y art. 35 del C.P.P.N**), respecto al delito de defraudación por administración fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública (art. 172, 173 y 174 inc. 5 del C.P.), sobre los hechos 90 y 91 del requerimiento de

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

instrucción de fs. 3059/3102, extraer las copias pertinentes y remitirlas a la Justicia Provincial de esta ciudad de Córdoba”.

Y CONSIDERANDO:

I.- Se presenta ante esta Alzada la cuestión de resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes en contra del auto de mérito dictado con fecha 9 de diciembre de 2021, cuyos fragmentos resolutivos se leen transcritos precedentemente.

En particular, debe decidirse respecto de los recursos de apelación interpuestos ante el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba por los señores abogados co-defensores Dres. María Eugenia D’antona y José Miguel D’antona, en representación del imputado Martín José Dus (fs. 6362/6363); la señora Defensora Oficial, Dra. María Mercedes Crespi, en representación de la imputada Jessica Yamila Bodes (fs. 6364); el señor abogado defensor Dr. Facundo Cortes Olmedo, en representación del imputado Leuterio Carlos Bonetto (fs. 6365/6366); el señor abogado defensor Dr. Claudio Martín Juárez Centeno, en representación de los coimputados Diego Alberto Vieyra Ferreyra y Jorge Daniel Cuevas (fs. 6421/6423 y 6424/6428); el señor Fiscal Federal N° 1 de Córdoba, Dr. Enrique José Senestrari (fs. 6367/6393), la Dra. Cecilia María Minaverry en representación de la querellante AFIP-DGI, con el patrocinio letrado del Dr. Federico Manzino (fs. 6394/6399); los Dres. Leandro Ariel Ventura, María Fernanda Cruz y Adolfo Tonin Monzón en representación de la querellante Unidad de Información Financiera (fs. 6400/6420).

II.- En dicha oportunidad procesal, los recurrentes indicaron los motivos de agravio que sustentan su

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

pretensión impugnativa. En orden cronológico de presentación, las partes señalaron:

1) Apelación de los Dres. María Eugenia D'antona y José Miguel D'antona en representación del imputado Martín José Dus:

Los defensores se agraviaron por la presunta fundamentación insuficiente y defectuosa de la resolución, puesto que no se habría descripto concretamente cuál habría sido el rol del imputado Martín José Dus en la asociación ilícita.

Por otro lado, por la errónea aplicación de la ley sustantiva, en particular, con respecto al cargo de asociación ilícita fiscal. Expresaron que el imputado solo brindó aportes aislados, sin conocer lo que hacía la organización siendo por tanto solo partícipe de los delitos concretos y determinados en los que intervino. Subsidiariamente, solicita el cambio de calificación como partícipe secundario del hecho (art. 46, CP).

Asimismo, cuestionaron la resolución por la errónea valoración de la prueba. En tal sentido, afirma que sólo se acreditó la intervención ocasional del imputado Dus.

2) Apelación de la Dra. María Mercedes Crespi en representación de la imputada Jessica Yamila Bodes:

La señora Defensora Oficial, en favor de la imputada Bodes, planteó la falta de fundamentación de la resolución, en la cual se habría efectuado una errónea valoración de las normas de competencia de orden público, en virtud de la incompetencia material de la justicia federal declarada respecto de los hechos 97, 101, 102, 103 y 109. Formula reserva del caso federal.

3) Apelación del Dr. Facundo Cortés Olmedo en representación del imputado Leuterio Carlos Bonetto:





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

El defensor, en favor del imputado Bonetto, apeló la falta de mérito por cuanto refiere que el vehículo que constituye el objeto del delito de lavado de dinero atribuido fue adquirido dos años antes del momento en que se habría cometido el delito de evasión, motivo por el cual correspondería su sobreseimiento por inexistencia del hecho. En esta línea, sostiene que la imputación seguida en contra de su asistido resultaría infundada e improcedente, toda vez que se acreditó que el hecho imputado no se cometió (conf. art. 336, inc. 2, CPPN). Formula reserva de casación y del caso federal.

4) Apelación del señor Fiscal Federal N° 1 de Córdoba, Dr. Enrique Senestrari:

El representante del Ministerio Público Fiscal apeló las decisiones adoptadas en los puntos resolutivos 1 y 2 en cuanto dispone el mantenimiento de la libertad de Diego Alberto Vieyra Ferreyra; los puntos 3 a 9 y 11 de la resolución en cuanto disponen la traba de embargos por la suma de pesos quinientos mil (\$ 500.000), o en su defecto la inhibición general hasta cubrir dicho monto (art. 519, CPPN); el punto resolutivo 10 por el que se dispuso el sobreseimiento de Cristian Debarre en orden al delito de asociación ilícita fiscal; el punto 13 por el que se dispuso el sobreseimiento de Silvina María Valeria Rincón en orden al delito de evasión fiscal agravada (conf. art. 336, inc. 4, CPPN); el punto 14 mediante el cual se dispuso el sobreseimiento de un número significativo de imputados por el delito de evasión fiscal agravada; los puntos 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 en tanto disponen la suspensión de la acción penal en orden a las previsiones de la ley 27.541; los puntos 22 y 29 por los cuales se declaró la incompetencia material de la justicia

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

federal para conocer y decidir sobre los hechos configurativos de los delitos de defraudación por administración fraudulenta (hechos 95 y 96) y defraudación por administración fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública (hechos 90 y 91); punto 23 en cuanto se dispone la falta de mérito en favor de un número significativo de imputados por el delito de lavado de activos (art. 303, CP); punto 24 mediante el cual se dispuso el sobreseimiento de Morselli y Boero en orden al delito de lavado de activos (art. 303, CP); punto 26 mediante el cual se dispuso el sobreseimiento de Cuevas en orden al delito de lavado de activos (art. 303, CP); punto 28 mediante el cual se concede la excarcelación a Mauricio Andrés Pizzi, la que no se hará efectiva atento sigue vigente la prisión domiciliaria dictada en la causa "Pizzi" (Expte. FCB 8191/2020); y, finalmente, el punto 27 mediante el cual se dispuso la falta de mérito de Sebastián Toranzo con relación al delito de lavado de activos (art. 303, CP).

En primer lugar, manifestó que la decisión de resolver la situación procesal de los imputados ha sido prematura puesto que existen medidas que no han sido analizadas y otras tantas solicitadas tanto por la Fiscalía como por los querellantes, que no han sido ordenadas, o bien están a la espera de que así se proceda.

Entre sus objeciones, sostuvo la falta de análisis de la configuración del delito genérico de asociación ilícita o la participación de algunos miembros en dicha organización criminal.

En los casos de evasión tributaria agravada y lavado de activos, consideró que se llegó a una conclusión errónea, lo cual generaría una cadena de decisiones





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

infundadas que perjudicarían la investigación de la causa. A este respecto, el representante del Ministerio Público alegó que se ha realizado un análisis incompleto de la Ley 27.541, y la aplicación errónea del principio de la ley penal más benigna el Juez termina morigerando la responsabilidad penal de los imputados en los delitos de evasión tributaria.

Asimismo, señaló que de la resolución no surge con claridad los motivos por los cuales se dispuso el sobreseimiento, la falta de mérito y el diferimiento de la resolución de la situación procesal de los imputados por el delito de lavado de activos de origen ilícito. Por lo expuesto, consideró que debe descalificarse este punto como acto jurisdiccional válido por encontrarse insuficientemente fundado (conf. art. 123 a *contrario sensu* del CPPN).

También esgrimió la inconveniencia de la abstención de resolución de la situación procesal de algunos imputados y de la declaración de incompetencia de algunos delitos de defraudación por administración fraudulenta, toda vez que desde el inicio de la investigación se analizaron estos hechos y, entre otras razones, se investiga la participación en los delitos de defraudación por administración fraudulenta de los principales imputados de la asociación ilícita y autores de más de setenta hechos de alteración dolosa de registros, en concreto, Diego y Natalia Vieyra Ferreyra.

Por otra parte, sostuvo que el hecho nominado primero debe ser calificado en la figura de asociación ilícita (art. 210, CP). En este sentido, refiere que en el segundo requerimiento de instrucción se amplió la investigación a delitos no tributarios (21.12.2020).

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

Se agravió, además, por la concesión de la excarcelación al imputado Diego Vieyra Ferreyra. Contrariamente, el apelante consideró que existen elementos objetivos reveladores de riesgo o peligrosidad procesal en concreto. En consecuencia, solicita el dictado de la prisión preventiva al imputado nombrado.

En cuanto al punto 3.2.1, respecto de la situación procesal del imputado Cristian Debarre, el apelante sostuvo que el Juez se apartó de sus propias conclusiones al afirmar que la monetización de las ganancias mediante el "cambio de cheques" pudo ser efectuada por cualquier persona y tal fungibilidad modifica la valoración de la imputación dirigida contra el imputado.

Al respecto, el acusador cuestionó que Debarre no tiene una entidad cambiaria, no está acreditada su autorización para intermediar en la compra y venta de títulos valores y tampoco es empleado de una entidad financiera. Lo que sí tenía Debarre es una posición económica y estratégica, dada por su manejo de la empresa Corphone S.A., que esfuman la idea de fungibilidad esgrimida en la resolución.

Asimismo, afirmó que tampoco una entidad cambiaria podría realizar las acciones que el Juez sugiere como normales y regulares. En este sentido, sostuvo que la resolución desconoce pruebas que demostrarían el concierto delictivo entre Debarre y Vieyra que se manifiestan, por ejemplo, en las visitas periódicas de Diego Vieyra Ferreyra a Debarre, el hallazgo de los sellos de la empresa Corphone S.A. en la casa de Diego Vieyra Ferreyra, así como todas las comunicaciones registradas en el teléfono del principal imputado Diego Vieyra Ferreyra.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

Continúa argumentando que Debarre habría participado de las ganancias de la asociación, a partir de la necesidad de Vieyra Ferreyra -jefe de la organización- de monetizar la actividad mediante un integrante con solvencia económica. En este orden, sostuvo que la documental secuestrada y las comunicaciones de mensajería de Vieyra Ferreyra confirmarían no solo las operatorias de cambio de cheques, sino las consultas sobre cuestiones vinculadas a la disponibilidad de efectivo y la viabilidad de cambiar cheques para la liquidez que permita seguir obteniendo réditos económicos de la venta de facturas apócrifas. En definitiva, el titular de la acción penal sostiene que Debarre era parte habitual y esencial de la asociación ilícita.

Por último, criticó que en el fallo no se hiciera alusión al cuaderno secuestrado entre las pertenencias personales del imputado Debarre. El apelante remarcó la importancia del cuaderno en cuestión, no solo porque contiene anotaciones de lo que se pagaba por ser testaferro de Gabriel Sosa o los pagos no documentados a sindicatos, sino porque habría detalles de la intermediación cambiaria que realizaba diariamente, lo que terminaría por iluminar su rol en la asociación ilícita.

Por lo expuesto, a criterio del Ministerio Público Fiscal, existen elementos de convicción suficientes para disponer el procesamiento de Debarre en orden al delito de asociación ilícita (conf. art. 210 del CP).

En otro orden, señaló como agravante la suspensión de la acción penal tributaria conforme Ley 27.562 (puntos resolutivos 12 a 21) dispuesta por el Instructor en orden a los delitos de evasión de impuestos agravada por la

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas.

En este punto, señaló que no se acreditó el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley 27.541 -mod. por Ley 27.562-. En particular, sostuvo que no se valoró la posible existencia de deuda de impuestos provinciales y municipales.

Por otra parte, refiere que la imputación inicial da cuenta de montos que, a partir de la investigación, van tomando mayor especificidad y precisión. De esta forma, con motivo de los allanamientos se logró el secuestro de una gran cantidad de documentación que está sujeta a análisis de AFIP, del Ministerio Público Fiscal y de las demás partes.

Por ende, consideró que disponer la suspensión de la acción con motivo de que los imputados adhirieron anticipadamente a planes de pago que solo incluyen lo hasta aquí conocido, resulta un absurdo procesal. En este sentido, expresó que el acogimiento debe ser integral y comprensivo de toda la deuda determinada, algo que en este caso no se produjo.

También sostuvo que no se analizaron los pagos realizados en el proceso concursal en el que estuvo inmersa la sociedad, por lo que insiste en que previo a resolver se debió tomarse declaración testimonial a los síndicos para establecer cómo se conformó el pago a la masa de acreedores. Además no fueron incluidos en los planes de pagos las costas y gastos causídicos hasta entonces no determinados.

Por otro lado, indicó como motivo de agravio la decisión de diferir la resolución de la situación procesal de los coimputados Fernando Ricardo Lozano (Urbis Cargo





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

SRL), Luciano Josué Córdoba y Eduardo Gleser (N.E.S.A.T. SRL), con motivo de la inconclusión del procedimiento de determinación tributaria (conf. art. 18 de la Ley 11.683).

En otro punto, apeló el sobreseimiento dispuesto en favor de Silvina María Valeria Rincón. Al respecto, entiende que al haberse detectado documentos que colocan a Rincón como socia de Corphone S.A., es obligación de la Fiscalía promover la acción penal y facilitar la vigencia de la garantía del derecho de defensa.

Sobre la situación procesal de la nombrada, entiende el Ministerio Público Fiscal que, sin perjuicio de los elementos valorados hasta el momento, aun no existe certeza negativa de su participación en los delitos atribuidos y que para despejar cualquier margen de duda deberá requerirse la lista de llamadas y mensajes entrantes y salientes del teléfono de Rincón, con mención de titulares y ubicación de antenas, en el periodo que abarca desde la creación de Corphone S.A. hasta la fecha de los procedimientos que motivaron la apertura de esta causa.

Del mismo modo, reitera el pedido de contar con las actuaciones notariales originales A005938940 y A005938931 para que la Dirección de Grafocrítica de la Policía Judicial de la Provincia de Córdoba pueda realizar un informe detallado del cotejo de documentos y de las firmas allí insertas. Por ello, solicitó que se revoque el sobreseimiento dispuesto y se dicte la falta de mérito en favor de la imputada Silvina María Valeria Rincón.

Respecto del pago por regularización impositiva efectuado por la contribuyente Softkey S.A., el Ministerio Público Fiscal solicitó que se investigue la trazabilidad de los fondos con los cuales se pagó una deuda tributaria

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

de más de setenta y dos millones de pesos, habida cuenta de que el socio oculto de dicha sociedad sería Germán Destefanis, quien posee una imputación por lavado de activos de origen ilícito.

También ponderó que no se cuenta con los informes del Organismo Recaudador respecto de la repatriación de bienes que exige la Ley 27.541, advirtiéndole que se han detectado en el exterior, empresas y bienes a nombre de personas humanas y jurídicas involucradas en autos.

Por otra parte, se agravó por el sobreseimiento por atipicidad dispuesta en favor de los responsables de la contribuyente Mitre S.A. (hecho nominado ochenta y ocho), en virtud de la aplicación retroactiva de la Ley 27.430, al no alcanzarse el monto mínimo de evasión establecido en la nueva ley como condición objetiva de punibilidad. Al respecto, argumenta sobre la inaplicabilidad del fallo "Vidal", a la cual tilda de nula.

En orden a los hechos de lavado de activos que tendrían origen en las evasiones tributarias, para el señor Fiscal Federal resulta incorrecto derivar la falta de mérito o el sobreseimiento (caso de la contribuyente Mitre S.A.) con motivo de la aplicación de la ley de amnistía precitada. En este sentido, advirtió: 1) que la amnistía no eliminaría el carácter antijurídico de la acción, sino solo su reprochabilidad; 2) que en muchos casos ni siquiera fue declarada la extinción de la acción penal, sino solo su suspensión. En cualquier caso, el recurrente entiende que la autonomía del delito de lavado de activos permite un pronunciamiento sobre el mérito reunido, más allá de las circunstancias procesales de los ilícitos precedentes.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

Respecto de la situación procesal de los imputados por los hechos de lavado de activos relacionados a las contribuyentes Softkey SA y Corphone SA, el Fiscal alegó que no solo se atribuye como origen ilícito de los activos los delitos tributarios, sino también el delito de defraudación por administración fraudulenta, motivo por el cual corresponde revocar la resolución apelada, dictar el procesamiento y continuar su investigación en sede federal (hechos 97, 101, 102, 103 y 109 del requerimiento de instrucción).

En tanto, respecto de los imputados Jorge Daniel Cuevas y Sebastián Toranzo consideró improcedente el argumento dado por el Juez de que no puede establecerse si los bienes derivados fueron adquiridos con dinero lícito o ilícito. El Fiscal apelante objeta que tal circunstancia impida el procesamiento del imputado (hecho 99 y 119 del requerimiento de instrucción, respectivamente). En consecuencia, solicita la revocación del fallo apelado y se dicte el procesamiento del imputado por dicho cargo.

En cuanto a la incompetencia de la justicia federal declarada respecto de los hechos de defraudación por administración fraudulenta de Softkey S.A. y Corphone S.A., el recurrente entiende que no corresponde escindir la investigación de los hechos conexos objetiva y subjetivamente, teniendo especialmente presente que el MPF imputó a Diego Vieyra Ferreyra -jefe de la asociación ilícita- como partícipe necesario de las defraudaciones a estas sociedades comerciales.

Por su parte, en orden a la incompetencia federal para entender en las presuntas defraudaciones a la Municipalidad de Saldán y a la Comunidad Regional Colón, el impugnante sostiene que no puede omitirse en la

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

valoración el hecho de que la génesis de la presente investigación ha sido la creación, comercialización y utilización de facturas apócrifas. También, la circunstancia de que Diego Vieyra Ferreyra -jefe de la asociación ilícita- se encuentra imputado como partícipe necesario de las defraudaciones a los entes municipales (hechos 91 y 92 del requerimiento de instrucción).

Al respecto, refiere que en la presente se observa una estrecha vinculación entre los delitos investigados y además habría razones de mejor administración de justicia que aconsejaría que la investigación quede a cargo de un único tribunal.

Por ello, solicita la revocación de la declaración de incompetencia material de la justicia federal para entender en estos hechos. Luego, solicita que se dicte el procesamiento de los imputados por los hechos 91, 92, 95 y 96 del requerimiento de instrucción calificados como defraudación por administración fraudulenta (conf. art. 173, inc. 7, del CP).

Luego, apeló la excarcelación concedida al imputado Mauricio Andrés Pizzi al señalar que la resolución no incluye tratamiento ni fundamentación que valide la libertad otorgada al imputado.

Por último, solicito se dicte el procesamiento de los imputados Pizzi, Zopetto, Barbieri y Tapiero como autores de la asociación ilícita descripta en el hecho nominado primero (art. 210 del CP).

5) Apelación de la Dra. Cecilia María Minaverry (apoderada) en representación de la querellante AFIP, con el patrocinio letrado del Dr. Federico Manzino:

La parte querellante apeló los puntos dispositivos 10 y 14 de la resolución, en cuanto disponen el





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

sobreseimiento de Cristián Debarre por el delito de asociación ilícita y de Edsel Daniel Destefanis, Martínez Pizzichini, Arévalo, Ribera Ardiles, Dellamaggiore y Germán Daniel Destefanis por el delito de evasión tributaria agravada respecto de la contribuyente Softkey S.A. por el Impuesto al Valor Agregado, período fiscal 2018 y 2019.

Con relación al sobreseimiento de Cristian Debarre por el delito de asociación ilícita, la querellante AFIP-DGI se agravia al considerar que la resolución apelada en este punto presenta fundamentación aparente, pues recurre a afirmaciones dogmáticas que no se corresponderían con las constancias de autos.

Entre sus argumentos, esgrimió que resta prueba por incorporar, por encontrarse actualmente en producción, tales como los informes finales con el análisis del material secuestrado en el marco de los allanamientos ordenados en autos.

Más aún, tampoco se ha culminado con el análisis de toda la información contenida en el teléfono celular del principal imputado Diego Vieyra Ferreyra, la cual contendría numerosas comunicaciones con Cristian Debarre reveladoras de un alto nivel de confianza e intimidad que no se observa con ningún otro "cliente" de la organización. Ello también quedaría demostrado con la evidencia sobre las reiteradas visitas de Vieyra Ferreyra a las oficinas de Debarre.

Asimismo, el impugnante remarca que no consta en el expediente que otros sujetos hayan cumplido la función de "cambiar cheques" dentro de la organización criminal. Si bien el Juzgado conceptualizó el descuento de cheques como una actividad comercial en principio lícita, no debe

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

perderse de vista que Debarre declaró a través de su empresa Corphone S.A. más de 40 millones de pesos de crédito fiscal espurio (más que ningún otro imputado) provenientes de esta asociación ilícita, lo que -de mínima- permite inferir que conocía la actividad de dicha organización y de dónde provenían los cheques que recibía de Diego Vieyra Ferreyra.

Desde esta perspectiva, no puede predicarse que su aporte haya sido fungible sino, por el contrario, la prueba incorporada demostraría que Debarre realizó un aporte trascendente a la organización, ajeno al rol de cliente.

Por estos motivos, la querellante solicita se revoque el punto resolutivo 10) que dispuso el sobreseimiento del imputado Cristian Debarre como coautor del delito de asociación ilícita fiscal (conf. art. 15, inc. c, del Régimen Penal Tributario previsto en la Ley 27.430).

Acto seguido, los representantes de la querellante expresaron agravios en contra del sobreseimiento de los imputados Edsel Daniel Destefanis, Martínez Pizzichini, Arévalo, Ribera Ardiles, Dellamaggiore y Germán Daniel Destefanis en relación al delito de evasión tributaria agravada respecto de la contribuyente Softkey SA por el Impuesto al Valor Agregado, ejercicio 2018 y 2019.

Sobre este punto, el apelante entiende que los sobreseimientos dispuestos se vinculan a una incorrecta aplicación de la normativa aplicable al caso, en particular, de la Ley 27.541 (B.O. 23.12.2019), con las modificaciones introducidas por la Ley 27.562 (B.O. 26.08.2020).

La querellante advierte que la resolución ha omitido considerar las exigencias dispuestas por el art. 9 de la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

citada ley, en tanto la contribuyente debe asumir el pago de las costas y gastos causídicos. En consecuencia, previo a declarar extinguida la acción penal, considera que debe comprobarse su pago.

Por lo tanto, solicita se revoquen los sobreseimientos dictados por extinción de la acción penal por amnistía en favor de los imputados anteriormente nombrados. Finalmente, formula reserva del caso federal.

6) Apelación de los Dres. Leandro Ariel Ventura, María Fernanda Cruz y Adolfo Tonin Monzón en representación de la querellante UIF.

A su turno, los representantes de la querellante UIF interpusieron recurso de apelación en contra del sobreseimiento dispuesto en favor de Cristian Debarre en orden al delito de asociación ilícita fiscal; de los sobreseimientos y suspensiones de la acción decididos en aplicación de la Ley 27.541 (B.O. 23.12.2019), con las modificaciones introducidas por la Ley 27.562 (B.O. 26.08.2020); de los sobreseimientos de los imputados por los delitos de lavado de activos bajo el argumento de que no existirían los delitos precedentes atento la extinción de las acciones penales tributarias por amnistía; de la incompetencia de la Justicia Federal para entender en los hechos 95 y 96 (defraudación por administración fraudulenta) y 97, 101, 102, 103 y 109 (lavado de activos de origen ilícito); del sobreseimiento por atipicidad de Jorge Daniel Cuevas en el hecho de lavado de activos nominado 99; de la falta de mérito dispuesta en favor de Sebastián Toranzo sobre el delito de lavado de activos de origen ilícito, por el hecho 119 del requerimiento de instrucción; y, finalmente, del levantamiento de la inhibición general de bienes y la morigeración de las

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

cautelares sobre el patrimonio de los imputados. Por último, formula reserva de casación e introduce la cuestión federal.

7) Apelación del Dr. Claudio Martín Juárez Centeno en representación del imputado Diego Alberto Vieyra Ferreyra:

La defensa técnica apela el procesamiento dictado en contra del imputado Diego Vieyra Ferreyra. Al respecto, señala que la resolución que se impugna es contradictoria y se encuentra construida bajo fundamentación aparente.

El primer agravio lo constituye el procesamiento como autor de lavado de activos de origen ilícito (hecho nonagésimo octavo). En particular, alega que resulta contradictoria la inclusión de algunos bienes y de otros no como objeto del delito en cuestión, sin un criterio claro y razonable.

En síntesis, las argumentaciones introducidas en la resolución diferencian en su tratamiento incriminatorio o desincriminatorio, bienes que conforme una sana crítica debieran tener igual tratamiento de exclusión del concierto ardidoso, sin embargo los diferencia. Además, porque se incluye como objeto del lavado bienes que jurídica y contablemente no pueden ser considerados (por caso, los cheques habidos en los allanamientos), por lo que no deberían considerarse incluidos en la hipótesis delictual.

Por lo expuesto, solicita se revoque el procesamiento dictado y se disponga su sobreseimiento por el delito de lavado de activos.

8) Apelación del Dr. Claudio Martín Juárez Centeno en representación del imputado Jorge Daniel Cuevas.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

El letrado defensor apela el procesamiento dispuesto en contra de su asistido Jorge Daniel Cuevas en relación al delito de asociación ilícita en carácter de autor.

Como primer agravio, el recurrente vincula los hechos nominado primero (asociación ilícita fiscal), con el nominado trigésimo quinto (alteración dolosa de registro agravada), por el que señala que la maniobra ilícita destinada a la generación de crédito fiscal espurio y que ascendería a la suma de \$12.025,21 no puede dar entidad a la incriminación del delito de asociación ilícita fiscal.

Por otro lado, refiere que no puede atribuírsele a su defendido haber integrado la asociación ilícita fiscal, cuando en realidad ha sido consumidor de facturas apócrifas para generar crédito espurio.

Alega que la resolución le otorga valor determinante a la cesión de acciones de TMIV SAS según documentación hallada en el domicilio de Jorge Cuevas al momento del allanamiento. No obstante, se presentaría contradictoria con la aseveración del magistrado de que la sociedad habría sido creada por Diego Vieyra Ferreyra. Agrega que, según la investigación, solo existieron 4 facturas para la generación de crédito espurio por un valor apenas superior a \$12.000 en el periodo de febrero a abril de 2020 a favor del CUIT de su defendido. Indica que las conversaciones mantenidas con Vieyra Ferreyra, vía whatsapp, se relacionan a esas facturas.

Por lo demás, argumenta que no existe ninguna otra prueba que relacione a Cuevas como integrante de la asociación ilícita fiscal, por lo cual la resolución carece de la debida fundamentación.

Por las razones dadas, solicita la revocación del auto de procesamiento dictado en contra del imputado Jorge

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

Alberto Cuevas en orden al delito de asociación ilícita fiscal y se proceda al dictado de sobreseimiento a su favor.

III.- Radicados los autos en esta Alzada, previa integración del Tribunal, se dispuso el emplazamiento de las partes para la presentación de los informes de agravios o mejoramiento de fundamentos por escrito, en los términos previstos en el art. 454 del CPPN y Acuerdo N° 276/2008. De este modo, las partes informaron sobre sus agravios y presentaron las réplicas que estimaron corresponder, en los siguientes términos:

1.- En ocasión de informar ante esta Alzada, el señor Fiscal General Dr. Alberto Lozada, en los términos del recurso de apelación interpuesto por el señor Fiscal Federal N° 1 de Córdoba, Dr. Enrique Senestrari, reprodujo los agravios y amplió los fundamentos expresados en dicha oportunidad, a los que se remite en homenaje a la brevedad.

Entre sus posiciones, el representante del Ministerio Público Fiscal ratificó el pedido de recalificación del hecho nominado primero como asociación ilícita fiscal en concurso ideal con asociación ilícita (art. 210 del C.P., art. 15 inc. "c" del Ley 27.430; art. 54 del CP). Cita en su apoyatura el precedente de esta Cámara Federal de Apelaciones -Sala A- "SALVUCCI, Sebastián y otros p.ss.aa. Infracción Ley 24.769" (FCB 12812/2015), de fecha 3.9.2020.

En definitiva, la Fiscalía General solicita se revoquen los puntos 1, 3 a 9 y 11, y se recalifique las conductas imputadas como asociación ilícita fiscal y asociación ilícita en concurso ideal (art. 210 del C.P., art. 15 inc. "c" del Ley 27.430; art. 54 del C.P.).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

Asimismo, ratifica la pretensión de revocación de la excarcelación concedida a Diego Alberto Vieyra Ferreyra, correspondiendo a su criterio el dictado de prisión preventiva.

Por su parte, respecto de los puntos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, y 11°, expresó que el Juez Federal ha disminuido el monto de los embargos y los ha establecido en la suma de pesos Quinientos mil (\$ 500.000), idéntica cifra para cada uno de los procesados por el delito de alteración dolosa de registros y asociación ilícita fiscal. Sobre este punto, a criterio del apelante la resolución es nula por no explicitar la razón que llevó a determinar ese monto fijo y uniforme para todos los coimputados y por no tratar los fundamentos introducidos por el Ministerio Público Fiscal.

2.- Por su parte, Cecilia María Minaverry, representante legal de la querellante Administración Federal de Ingresos Públicos, con el patrocinio letrado del Dr. Diego Sebastián Pinar, presentó su memorial de agravios (fs. 339/377).

En primer término, la recurrente se refirió a los sobreseimientos dictados en favor de Cristian Debarre por el delito de asociación ilícita fiscal en carácter de autor y de Edsel Daniel Destefanis, María José Martínez Pizzichini, Paola Andrea Arévalo, María Cecilia Dolores Ribera Ardiles, Federico Carlos Dellamaggiore y Germán Daniel Destefanis, con relación al delito de evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas.

Al respecto, señaló que el sobreseimiento de Cristian Debarre como miembro de la asociación ilícita resulta prematuro e improcedente. Indicó que la totalidad de los

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

elementos probatorios revelarían el vínculo existente entre Vieyra y CORPHONE SA, cuyo verdadero dueño y titular era Cristian Debarre.

Agregó que, tal como surge de las conversaciones telefónicas, Debarre conocía perfectamente la actividad desarrollada por Vieyra Ferreyra quien no era sólo un cliente de la asociación. De las intervenciones también se observaría que Vieyra Ferreyra y Debarre se comunicaban con frecuencia y que el primero acudía con regularidad a las oficinas de CORPHONE S.A. para retirar su dinero por la venta de facturas apócrifas y cambiar los cheques que obtenía de su actividad ilícita.

Alegó que Vieyra Ferreyra realizaba las facturas conforme lo solicitado por el personal de Corphone S.A., en particular, por "Alejandra" -quien sería Alejandra Márquez- empleada administrativa de la empresa-, quien respondería a las órdenes de Marcelo Gaido y Cristian Debarre. Advirtió que Vieyra mantenía conversaciones fluidas con Alejandra, quien le indicó en distintas ocasiones cómo confeccionar las facturas apócrifas que la firma luego incluía en sus declaraciones juradas de impuestos.

Tal como se desprende de los chats alojados en el celular de Diego Vieyra Ferreyra, este mismo mensaje fue enviado a Marcelo Gaido, socio de Debarre en CORPHONE S.A. En definitiva, sostuvo que ambos tenían pleno conocimiento de las maniobras que realizaba la organización ilícita de Diego Vieyra Ferreyra.

De las conversaciones también surgiría cómo Vieyra consultaba a Debarre sobre su actividad ilícita y lo informaba constantemente de los cambios en los proveedores





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

apócrifos y los diferentes trámites que realiza ante AFIP-DGI.

Por otro lado, mencionó que hay varias conversaciones donde se observa que Debarre recibe a Vieyra Ferreyra en su domicilio particular en el country "El Bosque" durante los fines de semana o en días de semana fuera del horario de oficina.

Expresó que otra de las características que diferencian a Debarre con los demás titulares de las empresas usuarias de facturación apócrifa que se investigan en la causa, es el descuento de cheques obtenidos por Vieyra Ferreyra como retorno de la facturación apócrifa emitida.

De las conversaciones entre ambos se advierte que Vieyra Ferreyra concurría de forma permanente a las oficinas de Corphone S.A. o al domicilio particular de Debarre con cheques para obtener liquidez y así poder continuar desarrollando su actividad ilícita.

En la resolución, el Juez reconoce que *"...al momento de los allanamientos se encontró **gran cantidad de cheques** de Diego Vieyra en el domicilio sito en calle Molino de Torres, Mza 14, Lote 10, B° Country El Bosque..."* -perteneciente a Debarre-; para luego relativizarlo al expresar *"...quedó demostrado con grado de probabilidad suficiente que el Sr. Cristian Debarre realizaba el descuento de algunos de los cheques adquiridos por Diego Alberto Vieyra Ferreyra..."*.

De los mensajes surgiría que Vieyra consultaba constantemente a Debarre sobre disponibilidad de liquidez y la posibilidad de cambiar cheques aún de otros miembros de la asociación como Ruth Noemí Díaz.

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

De las conversaciones de whatsapp surgiría que el cambio de cheques de manera informal por la venta de facturas apócrifas para conseguir dinero fue una actividad realizada por Debarre con acuerdo previo y habitualidad. Vieyra no tenía capacidad económica para monetizar los valores que recibía por su actividad ilegal y para ello la asociación contó con la colaboración de Debarre, dueño de la firma Corphone S.A. y con una posición económica muy superior al resto de los miembros de la organización.

Las consultas de Vieyra a Debarre por el cambio de cheques son reiteradas y habituales y revelan la necesidad de liquidez de la asociación sin la cual no podría haber seguido obteniendo ganancias por la venta de facturación apócrifa y la creación de sociedad ficticias.

Vemos que en las conversaciones de Whatsapp se menciona a Natalia VIEYRA, a Ruth DÍAZ y a un tal "Mauricio" con el que se intenta organizar una reunión y que tiene que viajar hasta la ciudad de Córdoba porque reside en otra localidad. Esta persona se infiere que es Mauricio Pizzi, imputado en esta misma causa y procesado en la causa FCB N° 8191/2020 caratulada "*PIZZI, MAURICIO ANDRÉS Y OTROS SOBRE INFRACCIÓN LEY 24.769*" y que tiene vínculos estrechos con Diego VIEYRA, ya que ambos desarrollarían la misma actividad ilícita, mantienen conversaciones permanentes y compartirían "clientes".

En conclusión, el acusador privado sostiene que Debarre estaba informado por Diego Vieyra Ferreyra de las maniobras realizadas para crear usinas de facturación falsa y por esta razón mantenían una comunicación fluida, así como reuniones permanentes que Vieyra no tenía con otros "clientes" de la organización.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

Asimismo, Debarre proveía de dinero en efectivo a Vieyra a través del cambio de cheques con un claro origen ilícito, lo cual le permitía continuar con su actividad ilegal.

De tal suerte, la conducta desarrollada por el encartado no consistió en una cooperación aislada y despojada de intencionalidad, sino en la asunción de un rol concreto, con vocación de permanencia y de forma coordinada con las funciones asignadas y asumidas por el resto de los integrantes de la banda.

La asunción de tal rol, cumplido a sabiendas de la existencia de la organización y de las finalidades por ella perseguidas, determina que ese sujeto "forme parte" de la asociación y que su conducta constituya un supuesto de coautoría en calidad de miembro de la asociación ilícita y no un mero partícipe externo que no realiza el verbo típico.

Como segundo agravio, expresó que la resolución apelada, en tanto dispuso el sobreseimiento de Edsel Daniel Destefanis, María José Martínez Pizzichini, Paola Andrea Arévalo, María Cecilia Dolores Ribera Ardiles, Federico Carlos Dellamaggiore y Germán Daniel Destefanis por evasión fiscal agravada, ha omitido considerar que el art. 10 de la Ley 27.541 establece que la acción penal inherente a las obligaciones regularizadas quedará extinta cuando se verifique no sólo su cancelación total de contado, por compensación o mediante plan de facilidades de pago sino cuando además se cumplan todas las condiciones establecidas en dicho régimen legal.

3.- Los Dres. Leandro Ariel Ventura y María Fernanda Cruz, apoderados de la Unidad de Información Financiera, con el patrocinio letrado del Dr. Horacio José Cangueiro,

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

presentaron por escrito el memorial de agravios (fs. 378/405).

Como primer agravio, expresaron que la resolución apelada presenta graves defectos de fundamentación respecto de la valoración de la prueba; extremo que la invalida como acto jurisdiccional e impone su descalificación en virtud de la doctrina de la Corte Suprema en materia de arbitrariedad de sentencias (Fallos 326:2135, entre otros).

Agravia a esta parte los sobreseimientos que califica de prematuros, dictados sin la certeza apodíctica necesaria, así como las suspensiones de la acción sin el debido cumplimiento de los requisitos necesarios, incluso contrariando la opinión del propio organismo recaudador.

Asimismo, la querella se agravia respecto de las suspensiones de la acción penal y sobreseimientos dictados en favor de los imputados en cuanto a los hechos de evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas, conforme los hechos 73, 74, 89, 93, 94, 117 y 118 de los requerimientos de instrucción.

En otro punto, el apelante cuestiona los sobreseimientos de los imputados por los delitos de lavado de activos argumentando que no existirían delitos precedentes, atento la extinción de la acción penal tributaria por el acogimiento al beneficio de la ley 27.541.

Se agravia la querella, además, respecto de la declaración de incompetencia parcial de la Justicia Federal para entender los hechos 95 y 96 y la remisión dispuesta de la investigación y eventual sanción a la justicia ordinaria de la Provincia de Córdoba, en orden a





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

los delitos de defraudación por administración fraudulenta que habría sido llevada a cabo por las autoridades de Corphone S.A. (Cristian Debarre) y Softkey S.A. (German Desfefanis).

Estos últimos habrían emitido un número no determinado con exactitud de facturas falsas a la empresa para documentar supuestas prestaciones de servicios que no se habrían llevado a cabo, con la participación necesaria de otras personas relacionadas con las sociedades, quienes son: Mario Ernesto Casco, Marcelo Gaido, Federico Carlos Dellamaggiore, Paola Andrea Arévalo y Diego Alberto Vieyra Ferreyra.

Asimismo causa gravamen que se haya declarado la incompetencia parcial de la justicia federal para entender en los hechos 97, 101, 102, 103 y 109 con relación a los imputados Paola Andrea Arévalo, Federico Carlos Dellamaggiore Y German Daniel Destefanis (Softkey S.A.), Cristian Debarre Y Mario Ernesto Casco (Corphone S.A.), y María José Marengo -hecho 102- y Jessica Yamila Bodes -hecho 97- en orden a los hechos de lavado de activos de origen ilícito, todos ellos en calidad de autor.

La querella apelante se agravia por cuanto la resolución cuestionada dispuso el sobreseimiento en favor de Jorge Daniel Cuevas por el hecho 99 subsumido en la figura de lavado de activos de origen delictivo (303 inc. 1 del CP y arts. 335 y 336 inc. 3 del CPPN).

En otro orden, se agravia por el dictado de falta de mérito en favor de Sebastián Toranzo por el delito de lavado de activos (art. 303 inc. 1 del CP) en calidad de autor, conforme el hecho 119 de la promoción obrante a fs. 5907/5909.

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

Finalmente, la parte querellante se agravia por la decisión de levantar la inhibición general de bienes que pesaba sobre los imputados y disponer la adecuación de las medidas de garantías patrimoniales, las que solicita se ajusten en proporción directa económica a la imputación realizada por el fiscal. Formula reserva de casación y del caso federal.

4.- El Dr. Facundo Cortes Olmedo en representación de Leuterio Carlos Bonetto, funda su apelación en la circunstancia que califica como objetiva y acreditada de que el hecho de lavado de activos de origen ilícito que se le atribuye a Bonetto, no se cometió.

Al respecto, señala que, conforme los términos y alcances de la imputación de lavado de activos formulada oportunamente por el Fiscal Federal, ésta resulta improcedente porque el hecho constitutivo del delito -adquisición de una camioneta Toyota, modelo 2017, dominio AB891TN-, no se verificó en el marco temporal de la imputación ya que el vehículo en cuestión fue adquirido con recursos obtenidos lícitamente de la actividad agropecuaria que desarrolla el imputado en el año 2017, o sea dos (2) años antes del momento en que se habría cometido el supuesto delito de evasión.

En definitiva, considera que en virtud de esa circunstancia objetiva exculpanete corresponde revocar la falta de mérito y dictar el sobreseimiento del imputado Bonetto, en los términos del art. 334 y 336 inc. 2º del CPPN. Ello así, ante la certeza negativa respecto la existencia del hecho imputado, toda vez que está acreditado que el hecho imputado no se cometió (art. 336, inc. 2, *ibíd.*).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

Por último, a modo de réplica y mejoramiento de fundamentos, la parte contesta los agravios expuestos por las partes querellantes y el Ministerio Público Fiscal, a los que se remite en homenaje a la brevedad. Formula reserva del caso federal.

5.- Los Dres. María Eugenia D'antona y José Miguel D'antona en representación de Martín José Dus, fundan sus agravios en la existencia de una errónea aplicación de la ley sustantiva al menos en dos oportunidades. En primer lugar, dicho error se advierte cuando se le atribuye al imputado el delito de asociación ilícita fiscal (art. 15 inc. "c" de la Ley 27.430).

Los letrados refieren que el órgano judicial considera a Dus como autor del delito de asociación ilícita fiscal. Sin embargo, alegan que ha quedado demostrado, en el tiempo que lleva la instrucción, que Dus no participó como miembro de la asociación ilícita fiscal en ninguna de las operaciones investigadas, sino que sólo le brindó aportes aislados.

En este sentido, sostienen que el imputado Dus habría tenido participación en hechos concretos y determinados, sin conocer que lo hacía a una organización formada a los fines de cometer delitos indeterminados; sino que lo habría hecho con la única intención de obtener ganancias ocasionales, no continuadas ni permanentes.

La defensa agrega que Martín José Dus no sabía que integraba una asociación u organización de tres o más personas destinada a cometer delitos tributarios con habitualidad, y no tuvo la voluntad de hacer aportes a la organización como tal, sino de participar en hechos determinados para obtener algún lucro o beneficio aislado, lo que está demostrado por el hecho de su desvinculación y

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

de su falta de enriquecimiento patrimonial en el período en que desarrolló tareas contables relacionadas a los hechos investigados.

Subsidiariamente, de no compartirse la postura defensiva respecto de la no calidad de miembro de Dus en la asociación ilícita fiscal investigada, lo cierto es que, en todo caso, su participación habría sido en el carácter de partícipe secundario (art. 46 C.P.) y no de autor (art. 45 C.P.), es decir, como un mero ejecutor de órdenes.

En este sentido, señalan que de la resolución en crisis surgiría que el coimputado Diego Alberto Ferreyra Vieyra era quien decidía todo, y los aportes de Dus habrían sido completamente fungibles. En definitiva, sostienen que la actuación de Martín José Dus no configuró un aporte sin el cual la actividad de la asociación no hubiera podido desarrollarse, tal es así que desde su desvinculación hasta el desbaratamiento de aquélla, la asociación continuo funcionando demuestra que su participación no era esencial o imprescindible.

En este orden, su intervención en carácter de contador público independiente -rol que podría haber llevado cualquier otro sujeto con los mismos conocimientos técnicos o aproximados, a punto que muchas de sus tareas también las realizaba el propio Diego Alberto Ferreyra Vieyra u otros coimputados-, sería demostrativa de que sus aportes habrían sido fungibles e intercambiables y por tanto no necesarios.

Por otra parte, alegan que el Juez en su procesamiento ha efectuado una errónea interpretación y mensuración de los distintos elementos probatorios reunidos en la causa. La defensa señala que causa agravio





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

la no evacuación de algunas de las manifestaciones de Martín José Dus en su declaración indagatoria.

Al respecto, expresan que si su defendido hubiese sido parte integrante de la asociación ilícita con algún tipo de poder de decisión, al menos podría haberse enriquecido lo cual ciertamente no ocurrió, pero ello tampoco ha sido investigado por la Justicia.

Finalmente, la parte se agravia por la presunta errónea valoración de las pruebas por lo cual la resolución atacada adolece de fundamentación insuficiente y defectuosa, por violentar principios de la lógica elemental, desde que no se describe concretamente qué rol habría desarrollado Martín J. Dus en la asociación ilícita para tenerlo como miembro y no como partícipe ocasional.

Por lo expuesto, la recurrente solicita que se revoque la resolución apelada y se dicte el sobreseimiento del imputado Martín José Dus. Subsidiariamente, peticionan que se modifique el grado de participación criminal asignado al imputado.

6.- La señora Defensora Oficial, Dra. María Mercedes Crespi, presentó informe del art. 454 del CPPN, en representación de sus asistidas Silvina María Valeria Rincón, María José Martínez Pizzichini y Jéssica Yamila Bodes.

En primer término, respecto de la imputada Rincón presentó memorial de mejoramiento de fundamentos del sobreseimiento dispuesto en su favor con relación a los hechos 73, 74, 89, 93, 94, 117 y 118, los cuales fueron apelados por el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera.

En cuanto a la imputada Martínez Pizzichini, pretende la confirmación del sobreseimiento dispuesto en su favor,

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

en orden a los hechos 75 y 76, los cuales fueron apelados por el Ministerio Público Fiscal, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Unidad de Información Financiera

Finalmente, manifestó que causa agravio la resolución en cuanto declaró la incompetencia parcial de la justicia federal para entender en los hechos, entre los cuales se encuentra el hecho nominado 97 imputado a su asistida Bodes, calificados como lavado de activos de origen delictivo. Este punto también fue apelado por el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera.

Al respecto, solicitó que se rechace la petición del Ministerio Público Fiscal de procesamientos en Instancia, previa revocación de los puntos resolutivos 23 (falta de mérito por el delito de lavado de activos en favor de un grupo de imputados) y 28 (concesión de la excarcelación de Mauricio Andrés Pizzi) del auto apelado.

El magistrado instructor, en el punto 3.5.3 de los Considerandos, dispuso diferir la situación procesal de algunos de los imputados de autos, entre los que se encuentra su defendido Luciano Josué Córdoba. Por otra parte, en el punto resolutivo 28 se dispuso la concesión de la excarcelación del imputado Zoppeto, la cual no se tornó efectiva.

En el punto, cuestionó que el Ministerio Público Fiscal posea aptitud procesal para solicitar el procesamiento de sus asistidos, pues los puntos de la resolución no refieren ni a Córdoba, ni a Zoppeto.

Asimismo, sostuvo que las Cámaras Federales de Apelaciones carecen de facultad para dictar procesamientos, conforme doctrina judicial de la Corte

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

Suprema de Justicia de la Nación en la causa: "DIEZ, Horacio Pedro y otro s/legajo de apelación" (Expte. CFP 1610/2015/3/1/RH1). Por último, formula reserva del caso federal.

7.- A su turno, los Dres. Germán Luis Gianotti y Tomás Bobadilla presentaron réplica de los agravios expresados y mejora de fundamentos del auto interlocutorio apelado dictado con fecha 9.12.2021 mediante el cual se dispuso el sobreseimiento de María Cecilia Dolores Ribera Ardiles con relación al delito de evasión tributaria agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas (art. 279 -arts. 1, inc. 2 d, y 15 inc. d- de la ley 27.430).

La defensa técnica refiere que, conforme resulta del requerimiento de instrucción obrante en la causa, María Cecilia Dolores Ribera Ardiles, fue imputada sólo como partícipe necesaria del delito de evasión de impuestos calificada del Régimen Penal Tributario que se atribuye a la firma a SOFTKEY S.A. (30712381090); en relación a los períodos 2018 y 2019 del Impuesto al Valor Agregado (Hechos Nominados 75° y 76°), por los cuales ha sido indagada.

Expresó que, con fecha 24 de Junio de 2021, a fs. 5870 de autos, la AFIP-DGI, a través del Director Regional Córdoba de dicho organismo, Cr. Fernando Farnochi, contestó el oficio judicial que incluía a algunos de los contribuyentes consultados y, refirió y acompañó información relativa al acogimiento y regularización de la deuda de la contribuyente SOFTKEY S.A. (C.U.I.T. 30-71238109-0).

De la lectura del "Informe de Planes de Pago presentados por SOFTKEY S.A, C.U.I.T. 30712381090"

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

producido por la A.F.I.P.-D.G.I. a instancia de la manda judicial, resulta que el Plan N629873 (Ley 27.562), en el que se había incluido la totalidad de la deuda en el I.V.A., por los períodos que integran los hechos nominados N° 75 y 76, se encuentra cancelado.

Ahora bien, el Ministerio Público Fiscal y la AFIP-DGI en sus apelaciones señalaron que no se habrían satisfecho todos los requisitos establecidos en la norma (en relación al art. 10 de la Ley 27.541); concretamente, aluden a que el Juez *a-quo* habría inobservado lo dispuesto por el art. 9 del mismo texto legal, que obligaría al contribuyente a asumir el pago de costas y gastos causídicos como condición para que se le reconozca el beneficio de extinción de la acción penal en caso de la cancelación total de la pretensión fiscal.

Finalmente, la querella particular a cargo de la U.I.F. también recurrió en apelación lo resuelto en este punto, a pesar que el mismo está referido al Régimen Penal Tributario y a una ley de Moratoria de orden fiscal.

Sin perjuicio de la inadmisibilidad de dicha apelación, siguiendo el criterio rector del art. 444, 82 y cc del C.P.P.N. y de la propia jurisprudencia federal, la defensa considera que el informe de dicho organismo no hace alusión concreta a los hechos 75 y 76 y su solución judicial, ni siquiera tangencialmente explica por qué en este caso concreto impugna el sobreseimiento de los sindicados como autores y partícipes en dichas conductas, por lo que concluye que este punto de la resolución no ha sido apelado de un modo procesalmente eficaz que confiera competencia a la Alzada para su análisis.

A este agravio responden que la cuestión planteada, de puro derecho, debe resolverse negativamente mediante la

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

sujeción estricta a la letra de la ley aplicable y hasta del más puro sentido común, la lógica general y la lógica del proceso ordenada por la ley adjetiva.

La pretensión de ambas acusaciones de exigir la previsión del art. 9 de la Ley 27.541 como **requisito previo** a la concesión del beneficio del art. 10 de la Ley 27.541, chocaría con la letra misma de la ley y con la lógica del proceso.

Ahora bien, luego de haber admitido el acogimiento y percibido la totalidad de la deuda reclamada por los hechos 75 y 76 de autos, el Fisco interviniendo como querellante en este proceso se opone al reconocimiento de los beneficios que dicho acogimiento y cancelación traen aparejados en una dualidad injustificable exigiendo para ello una condición carente de catadura legal y de cumplimiento imposible.

La defensa cita la doctrina judicial de *"Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/infracción Ley 24.769"* de fecha 28 de Octubre de 2021 -fallo de incuestionable pertinencia al campo penal tributario- donde se ha sostenido *"Asimismo, en reiteradas oportunidades se ha dicho que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, que ellas deben entenderse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan. En esa tarea no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 342:2344 "Farina", considerando 10 y sus citas de Fallos: 313:1149; 327:769)"*.

Del mismo modo, señala que una eventual interpretación que entienda que el artículo 9 de la Ley 27.541 es condición de la previsión del art.10 (además de

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

la inconsecuencia sistémica de la propia ley) implicaría una clara violación del principio *pro homine* -citado en el mismo precedente de la Corte y en otros tanto luego de su reconocimiento en "Acosta"- y por la jurisprudencia de la propia Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Sobre esto último, cita el precedente de la Sala A de esta Cámara Federal de Apelaciones, en autos: "Integración Eléctrica Sur Argentina s/ Infracción Ley 24.769", de fecha 7 de Abril de 2022.

Por última, reitera que la apelación de la UIF en relación al punto 14) del decisorio de fecha 09.12.2021 -sobreseimiento respecto de delitos del régimen penal tributario (Ley 27.430)- debe ser declarada inadmisibile, por carecer dicho organismo de legitimación procesal para articularla (conf. art. 444 del CPPN).

En virtud de lo expuesto, la defensa solicita que se rechacen los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal, la AFIP-DGI y la UIF, y se confirme la resolución de fecha 09/12/2021 en cuanto dispuso el sobreseimiento de María Cecilia Dolores Rivera Ardiles por extinción de la acción penal (art. 336 inc. 1 CPPN) con relación al delito de evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas (art. 279 - 1, 2 inc. d y 15 inc. d de la ley 27.430 y arts. 1, 2 inc. d y 15 inc. b de la ley 24.769).

8.- A su turno, los Dres. Ángel Ignacio Carranza y Pablo Adrián Rojas Aubone en ejercicio conjunto de la defensa técnica de los imputados Edsel Daniel Destefanis, Paola Andrea Arévalo y Germán Daniel Destefanis, presentaron escrito de mejoramiento de fundamentos de la resolución que dispuso el sobreseimiento de los nombrados





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

en orden a los delitos evasión tributaria agravada de la contribuyente Softkey S.A.

Fundan su pretensión de rechazo de las apelaciones deducidas por los acusadores, en el entendimiento de que resulta improcedente y arbitrario pretender asignarle a los gastos causídicos carácter impeditivo de la concesión de los beneficios extintivos de la ley de amnistía 27.562.

En este sentido, expresaron que cuando la ley exige que se haga responsable el condenado en costas, no se refiere a otra cosa que los juicios administrativos o judiciales tramitados con anterioridad a la publicación de la ley 27.562 (26.08.2020). Cualquier otra interpretación tornaría inaplicable la obtención de los beneficios que otorga la ley. Por último, formulan reserva de casación y del caso federal.

IV.- Sentadas así y reseñadas en los parágrafos precedentes las posturas de las partes, corresponde introducirse propiamente en el tratamiento de los recursos de apelación deducidos.

Se hace constar que, en virtud de la existencia de votos emitidos no coincidentes, el Tribunal ha sido integrado -previo sorteo- con el señor Juez de Cámara Dr. Julián Faculcci (fs. 630). A tal efecto, se sigue el orden de votación establecido en autos (fs. 649).

El señor Juez de Cámara Dr. Abel G. Sánchez Torres dijo:

Abocado al estudio de las presentes actuaciones, corresponde resolver con base en las constancias de autos y los agravios esgrimidos por el Ministerio Público Fiscal y las partes querellantes AFIP-DGI y Unidad de Información Financiera, como también por los señores abogados defensores de los coimputados Martín José Dus, Silvina María Valeria Rincón, María José Martínez Pizzichini,

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

Jéssica Yamila Bodes, Leuterio Carlos Bonetto, Diego Alberto Vieyra Ferreyra y Jorge Daniel Cuevas, ejercida por los Dres. D'antona, Crespi, Cortés Olmedo y Juárez Centeno, sobre la corrección y suficiencia de la resolución de mérito dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, para verificar si sus conclusiones se presentan o no como una derivación razonada del derecho vigente afincada en las circunstancias comprobadas en autos.

En primer lugar, corresponde efectuar el juicio inicial de admisibilidad formal de los recursos de apelación deducidos integrados por los presupuestos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, y las demás condiciones de interposición de los recursos, de tiempo y de forma (arts. 432, 434 a 438 del CPPN). Asimismo, cabe verificar el cumplimiento del requisito de fundabilidad, para luego analizar la procedencia o improcedencia de los recursos interpuestos.

I.- Con relación al recurso deducido con fecha 14.12.2021 por el Dr. Facundo Cortés Olmedo en representación del imputado Leuterio Carlos Bonetto, en contra de la resolución que dispuso la falta de mérito de su asistido en orden al delito de lavado de activos de origen delictivo que le fuera atribuido -hecho nominado centésimo trigésimo-, debo efectuar algunas consideraciones de orden procesal que hacen a la intervención de esta Alzada y que conducen a concluir que el apelante carece de la legitimación para recurrir una decisión como la dictada a su respecto en los presentes autos.

La habilitación recursiva requiere la existencia de un interés en impugnar por parte del sujeto procesal que





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

intenta atacar la decisión del órgano jurisdiccional. En otras palabras, debe existir "agravio", es decir la resolución atacada debe desmejorar o contradecir la expectativa de la parte frente a aquélla, lo que equivale a afirmar una hipotética afectación al interés que se pretende hacer prevalecer. Se trata, en definitiva, de un perjuicio que se ocasiona al interés de la parte.

De este modo, interés y perjuicio integran el concepto de agravio, en donde el primero de ellos debe ser directo y el segundo objetivo y práctico. Es del caso enfatizar que el art. 432 del CPPN en materia de recursos exige la existencia de interés directo, ya sea en la revocación o bien en la modificación de la resolución atacada. Esta relación, *"presupone una discordancia entre lo resuelto y lo solicitado por el recurrente"* (Palacio, Los recursos en materia penal, p. 14, citado por Guillermo R. Navarro – Roberto R. Daray, Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial, T. III, Ed. Hammurabi, 5ª edición). De esta forma, la viabilidad de la impugnación requiere la verificación de un perjuicio derivado de la resolución que se recurre, que debe permanecer vigente al momento de resolvérsela (CNCP, Sala IV, LL, 2000-F-898, referido por Navarro-Daray, autor y obra citada).

Al respecto, Goldschmidt sostiene que: *"todo recurso supone, como fundamento jurídico la existencia de un gravamen (perjuicio), de la parte, es decir una diferencia injustificada, desfavorable para ella entre su pretensión y la que le haya concedido la resolución que impugna"* (Parise - Dragone, "Teoría general de la impugnación", en Recursos ordinarios y extraordinarios en el régimen



procesal penal de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, Arazí -dir.-, 2005, p. 38).

El Código Procesal Penal de la Nación ha establecido un sistema restringido de impugnación que comienza a vislumbrarse en las reglas generales del artículo 432, el cual establece: *“Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley. **El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente acordado, siempre que tuviere un interés directo. Cuando la ley no distinga entre las diversas partes, todas podrán recurrir**”* (el destacado es propio).

Por su parte, en lo que respecta específicamente a las normas que regulan la decisión cuestionada por la defensa, el artículo 311 del CPPN establece expresamente que: *“Los autos de procesamiento y de falta de mérito, podrán ser revocados y reformados de oficio durante la instrucción. Contra ellos sólo podrá interponerse apelación sin efecto suspensivo; del primero, por el imputado o el ministerio público; del segundo, por este último y el querellante particular”*.

Como puede advertirse la norma procesal precedentemente transcripta distingue entre las diferentes partes con aptitud procesal para recurrir. De este modo, no resulta aplicable al presente caso lo establecido en la última parte del artículo 432 en cuanto norma antes invocada, por cuanto únicamente a ellos puede causar un eventual gravamen que los motive a invocar su modificación.

Por consiguiente, conforme las previsiones expresas del Ritual, la defensa no se encuentra habilitada para interponer recurso de apelación contra la decisión aquí





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

cuestionada que se funda en la ausencia de mérito para procesar o sobreseer y que, a la postre, derivará en el posterior dictado de un sobreseimiento o eventualmente un procesamiento, decisión ésta que sí podrá ser objeto de recurso por parte de la defensa.

Por este motivo debe declararse mal concedido el recurso de apelación deducido por el Dr. Facundo Cortés Olmedo en representación Leuterio Carlos Bonetto, en contra de la resolución que dispuso la falta de mérito de su asistido en orden al delito de lavado de activos de origen delictivo que le fuera imputado.

Ello, sin perjuicio de tener en consideración las manifestaciones formuladas por el defensor en sentido de mejoramiento de fundamentos o replicas a los informes de agravios de la Fiscalía y la querella, respecto de la decisión de suspender la acción penal tributaria que afectaría a su asistido.

II.- Con fecha 15.12.2021, el señor abogado co-defensor Dr. Claudio Martín Juárez Centeno, actuando en representación de los imputados Diego Alberto Vieyra Ferreyra y Jorge Daniel Cuevas, interpuso recursos de apelación en contra de la resolución dictada con fecha 9.12.2021 por el señor Juez Federal N° 1 de Córdoba (fs. 6421/6423 y 6424/6428, respectivamente). Dichos recursos fueron concedidos por el Instructor con fecha 4.02.2022 (fs. 6429).

Elevados los autos a esta Alzada, se dispuso emplazar a las partes apelantes a fin de que en el término perentorio de cinco días hábiles desde su notificación, presenten por escrito y en formato digital el informe de agravios, bajo apercibimiento de tener por desistido el

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

recurso a su respecto (conf. arts. 454 del CPPN y Acuerdo 276/2008 de este Tribunal).

Con fecha 25.04.2022, los señores abogados co-defensores de los imputados Diego Alberto Vieyra Ferreyra y Jorge Daniel Cuevas, Dres. Claudio Martín Juárez Centeno y Julio Cesar Páez, fueron notificados del proveído en cuestión (conf. certificación actuarial obrante a fs. 406 del presente legajo).

Ahora bien, desde la última fecha mencionada -25.04.2022- ha transcurrido en exceso el plazo de 5 (cinco) días hábiles que prescribe el punto 1° de la parte resolutive del Acuerdo N° 276/2008 de este Tribunal, para presentar el informe digital, sin que los abogados defensores hayan presentado el informe en cuestión.

Al respecto, el art. 454 del CPPN, a partir de la reforma introducida mediante la ley 26.374 prescribe textualmente: *"...La audiencia se celebrará con las partes que comparezcan, pero si el recurrente no concurriera, se tendrá por desistido el recurso a su respecto.-..."*.

Con fecha 22 de diciembre de 2008 este Tribunal, en el Acuerdo N° 276/2008, tomo en consideración la situación objetiva de colapso originada por la reforma introducida por la ley 26.374 al art. 454 del CPPN y teniendo presente que la finalidad que inspiró al legislador al momento del dictado de la ley fue dar mayor celeridad al trámite de apelación de las causas penales, a los efectos de evitar demoras en su tramitación, se dispuso reglamentar el trámite de los recursos de apelación en materia penal.

Así, el último párrafo del punto 1° de la parte resolutive del citado Acuerdo dispone textualmente *"En caso de que ninguna de las partes manifieste en forma expresa su intención de optar por el trámite oral previsto*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

por el artículo 454 del C.P.P.N. (ley 26.374), se les notificará que deberán presentar por escrito en el término de cinco (5) días hábiles de notificados el informe respectivo;...". Además, el último párrafo del punto 2° de la parte resolutive del aludido Acuerdo textualmente prescribe "...la no presentación del informe escrito por las partes recurrentes, una vez optado por esta modalidad de trámite, implicará tener por desistido el recurso interpuesto a su respecto;".

De este modo, transcurrido el término de emplazamiento sin haber presentado los informes señalados, corresponde tener por desistido tácitamente los recursos de apelación interpuestos por el señor abogado co-defensor Dr. Claudio Martín Juárez Centeno, en representación de los imputados Diego Alberto Vieyra Ferreyra y Jorge Daniel Cuevas (fs. 6421/6423 y 6424/6428, respectivamente), en contra de la resolución dictada con fecha 9.12.2021 por el señor Juez Federal N° 1 de Córdoba (conf. arts. 454 del CPPN y Acuerdo 276/2008 de este Tribunal). Con costas (conf. art. 443 del CPPN).

III.- Ante esta Alzada, con fecha 13 de abril de 2022, mediante la presentación del escrito continente del informe de agravios previsto en el art. 454 del CPPN, el señor Fiscal General Dr. Alberto Lozada, desistió fundadamente del recurso de apelación interpuesto por el señor Fiscal Federal N° 1 de Córdoba con fecha 14 de diciembre de 2021, en contra del punto resolutive 20) de la resolución dictada 9 de diciembre de 2021 por el señor Juez Federal N° 1 de Córdoba (arts. 443 y 453 del CPPN).

Sobre esta cuestión, he de señalar que los Fiscales Generales ante los Tribunales de segunda instancia tienen el deber de continuar ante ellos la intervención que los

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

representantes del Ministerio Público Fiscal hubieran tenido en las instancias inferiores, sin perjuicio de su facultad para desistir de sus recursos mediante decisión fundada (conf. arts. 443 y 453 del CPPN y art. 37 inciso a) ley 24.946).

Ahora bien, en atención al principio dispositivo que guía la materia recursiva, según el cual la instancia de revisión se habilita siempre que concorra un interés legítimo en mantener la impugnación a lo largo del trámite ante la Alzada, el desistimiento trae en principio aparejada la imposibilidad de analizar, por parte del Tribunal, la apelación oportunamente deducida.

Por ello, habiendo brindado el señor Fiscal General argumentos suficientes en orden a su conformidad con la resolución adoptada -sin perjuicio del criterio jurídico expuesto- y su voluntad de no continuar con el trámite impugnativo, corresponder tener por desistido parcial y fundadamente el recurso de apelación interpuesto por el señor Fiscal Federal N° 1 de Córdoba con fecha 14 de diciembre de 2021, en contra del punto resolutivo 20) de la resolución dictada 9 de diciembre de 2021 por el señor Juez Federal N° 1 de Córdoba (arts. 443 y 453 del CPPN).

Sin perjuicio de lo aquí decidido, considero conveniente efectuar algunas consideraciones sobre la presentación efectuada por el señor Fiscal Federal N° 1 de Córdoba, pues trasunta en implicancias institucionales de trascendencia respecto de la comprensión de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los señores Mario Eduardo Morselli y Augusto Boero resultaron imputados por la presunta comisión del delito de evasión tributaria agravada, conforme al hecho 87 del requerimiento de instrucción de fs. 3059/3102, en virtud

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

de que la contribuyente MITRE S.A. (CUIT N° 30-70819747-1) habría evadido la suma de pesos un millón veintiséis mil ciento cincuenta con cuarenta y cinco centavos (\$1.026.150,45), correspondiente al Impuesto al Valor Agregado -período fiscal 2017-, mediante la presunta utilización de facturas apócrifas provistas por la asociación ilícita aquí investigada.

Puntualmente, el señor Fiscal Federal de primera instancia se agravió por el sobreseimiento por atipicidad dispuesto por el Juez Federal N° 1 de Córdoba en su favor, con motivo de la aplicación retroactiva de la Ley 27.430 -más benigna-, al no alcanzarse el monto mínimo de evasión establecido en la nueva ley como condición objetiva de punibilidad (conf. art. 2 del CP, y arts. 9 del CADH y 15 del PIDCyP en función del art. 75 inc. 22 de la CN).

En particular, el recurrente cuestionó la aplicabilidad al caso de la reciente doctrina judicial emanada del fallo "Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769", de fecha 28 de octubre de 2021, para lo cual expresó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación *"se estaría arrogando facultades legislativas, al dictar un fallo que obliga a todos los jueces inferiores a aplicarlo, siendo que no estaba habilitada -por la propia nulidad- a adentrarse sobre el fondo del caso puesto bajo su análisis. (...) Ello equivale a decir que la Corte ha resuelto un caso sobre el que no tenía competencia, porque la perdió al momento de considerar que el fallo que motivó su intervención es nulo"*. Por este motivo, el señor Fiscal Federal sostiene la presunta nulidad del propio fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, a renglón seguido,

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

indicó que *"no podrá ser declarada por ningún tribunal"* (Sic).

Previo a todo, debo decir que es criterio inveterado del suscripto la procedencia de la aplicación retroactiva de la normativa penal tributaria que resulta más benigna por cuanto desincrimina aquellas conductas que no alcanzan los nuevos montos establecidos como condición objetiva de punibilidad, de conformidad a las razones que fueron también ponderadas por la CSJN en el fallo citado (v. por todos, autos: "AMBROSIUS, Eduardo Miguel s/evasión simple tributaria" Expte. FCB 49468/2016, del 26.11.2021). Sin embargo, desde el pronunciamiento expreso de nuestro Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, la cuestión en trato ha sido definida en todos sus contornos, con lo cual los agravios planteados lucen abiertamente improcedentes.

En términos generales, la Corte Suprema de la Nación ha afirmado el *"... deber que tienen las instancias inferiores de conformar sus decisiones a las sentencias de la Corte dictadas en casos similares, en virtud de su condición de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en consecuencia..."* (Fallos: 307:1094; 319:2061; 320:1660; 321:2294 y 3201; 325:1227, entre otros).

También que: *"... no obstante que las decisiones de la Corte se circunscriben a los procesos concretos que le son sometidos a su conocimiento, no cabe desentenderse de la fuerza moral que emana de su carácter supremo, sin verter argumentaciones que la contradigan, pues dada la autoridad institucional de los fallos del Alto Tribunal en su carácter de supremo intérprete de la Constitución Nacional y las leyes, de ello se deriva el consecuente deber de someterse a sus precedentes"* (Fallos 322:1488, del





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema)

Se presenta manifiestamente improcedente el planteo efectuado no solo por su tenor contradictorio y extraño a nuestro sistema de justicia, sino principalmente por la propia comprensión del asunto que realizó el Procurador General de la Nación, máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal, que se estructura legal y constitucionalmente de manera jerárquica.

En efecto, cabe advertir que el propio Procurador General de la Nación, a propósito del dictado del fallo "Vidal" y conforme a sus facultades legales, ha instruido a los fiscales federales del país en un sentido distinto al propuesto aquí por el apelante.

Ciertamente, el procurador Casal entendió que con el pronunciamiento del máximo tribunal ha llegado la definición final a la controversia interpretativa generada por la clausura periódica de este tipo de procedimientos penales basada en la actualización de los montos mínimos a partir de los cuales infracciones de esa naturaleza se consideran punibles (conf. Resolución PGN 87/21, en virtud de las facultades previstas en los arts. 31, inc. d) de la Ley 24.946 y 12, inc. b) de la Ley 27.148).

Por este motivo, la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal, mediante en la Resolución PGN 87/21, sostuvo que dicha sentencia priva de toda vigencia a la instrucción ordenada en la resolución PGN 18/18. Agregó que el objetivo institucional buscado con ella se ha logrado, aun cuando no fuese en el sentido intentado por dicha Procuración General a partir de las citadas resoluciones PGN5/12 y 1467/14. Con ello, el Procurador General dispuso dejar formalmente sin efecto la

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

instrucción, en la medida en que obligaba a todos los fiscales a impugnar las decisiones de los tribunales que propician una posición contraria a la allí sostenida, como la ahora adoptada expresa y finalmente por la Corte.

Debo aclarar que, no obstante ello, se dejó a criterio de los fiscales federales la evaluación, con arreglo a las circunstancias particulares de cada caso, sobre la correspondencia o no de promover las instancias revisoras, en especial, frente a posibles "clausuras anticipadas o injustificadas" de los procesos penales.

En este sentido, en el considerando 21 del fallo "Vidal", se dijo: *"... es posible identificar una enorme cantidad de casos en los que, aun alcanzados por la solución del sub lite, la decisión sobre la mayor benignidad de la ley 27.430 se adoptó por los jueces de la causa en etapas iniciales del proceso sin que surja -al menos ponderado y explicitado- que se hubiera respetado la necesidad de certeza negativa para sobreseer de modo tal de evitar cancelar indebidamente la investigación"*.

De tal suerte, el único argumento que validaría una revisión de este Tribunal sería el atinente al mérito reunido para definir asertivamente los montos de evasión previstos como condición objetiva de punibilidad, pero no la interpretación propiciada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de los cambios en los montos previstos en la sucesión de leyes penales tributarias y su aplicación retroactiva; lo cual, en el caso de autos, no fue siquiera insinuado por el apelante.

Por caso, el representante del Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado Instructor no presentó nuevos argumentos que se sustente en situaciones fácticas o jurídicas diferenciales, que permita propiciar una





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

interpretación distinta sobre la cuestión ya zanjada por nuestro Tribunal Címero.

Por último, debe ponerse de relieve que, en nuestro diseño institucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación como cabeza del poder judicial está facultada por medio del avocamiento a través del remedio federal, a decidir sobre el fondo de las cuestiones que le son sometidas a revisión, sin perjuicio de la nulidad de las sentencias que pudiera declarar. No obstante, en el fallo "Vidal" en cuestión, la propia Corte Suprema explicitó las razones que justificaban su pronunciamiento directo, sin reenvió, el cual se funda en la necesidad y conveniencia de otorgar seguridad jurídica sobre la problemática interpretativa que ha motivado prolongados desgastes jurisdiccionales.

IV.- Con respecto al recurso de apelación interpuesto por los representantes de la parte querellante Unidad de Información Financiera, en orden a las cuestiones aquí debatidas, considero oportuno traer a colación, en cuanto resulte aplicable, las consideraciones que formulé en ocasión de resolver sobre la carencia de legitimación procesal de la querellante Unidad de Información Financiera para apelar cuestiones no vinculadas con el delito del lavado de activos de origen ilícito, en los autos: "Incidente de Acogimiento al Régimen Previsto por la Ley 27.541 - modificada por Ley 27.562- en autos: Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A y Otros S/ Inf. Ley 24.769" (Expte. 77139/2018/29/CA14), del 8.06.2022.

En dicho precedente, señalé: *"... considero que la ley 25.246 y el decreto reglamentario 2226/2008 determinan en este caso concreto la ausencia de interés que exige el art. 432 del CPPN por parte de la UIF para recurrir la*

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

decisión que es motivo de revisión por esta Alzada pues aquella sólo refiere a delitos tributarios. Repárese en tal sentido que las normas citadas atribuyen al mencionado organismo competencia para el “análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir” el delito de lavado de activos provenientes, entre otros, de los delitos previstos en la ley 24.769; así como también lo autoriza a intervenir como querellante en los procesos en los que se investigue el delito de lavado de activos”.

En efecto, el artículo 1 del Decreto 2226/2008 (B.O. 23/12/2008) establece: *“Autorízase a la titular de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA a intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigue **la comisión de los delitos tipificados por la Ley N° 25.246 y modificatorias**, en aquellos casos que así lo ameriten”.* De este modo, los delitos previstos por la ley de creación de la Unidad de Información Financiera se circunscriben a las figuras incluidas en los artículos 303 y 306 del Código Penal argentino, esto es, lavado de activos de origen ilícito y financiación de actividades terroristas.

En esa línea de pensamiento, admitir las pretensiones impugnativas de la UIF con base en el argumento de que el delito por el cual se le ha atribuido legitimación procesal (lavado de activos, art. 303 del Código Penal) contempla las *“ilicitudes precedentes”*, llevaría al extremo de validar su legitimación activa en todo proceso casi sin restricciones, toda vez que cualquier delito con contenido patrimonial previsto en la legislación penal argentina podría constituirse, por caso, en delito precedente al lavado de activos. Ello implicaría, en la práctica, desnaturalizar la finalidad legal del organismo





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

estatal (prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo), admitiéndolo como acusador en procesos por delitos comunes, concomitante y conjuntamente con la actuación del Ministerio Público Fiscal.

Por otra parte, cabe referir también que para la configuración del delito de lavado de activos de origen delictivo -objeto de interés legítimo de la UIF-, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria son contestes en señalar que no se exige la acreditación judicial del elemento "ilícito precedente", sino tan sólo la verosimilitud de su existencia -incluso por vía indiciaria- como injusto penal, o bien, acción típicamente antijurídica. Por este motivo, la UIF en su rol de querellante no le compete actuar en favor de la persecución de los supuestos ilícitos precedentes para sostener válidamente su acusación por la comisión de los delitos de lavado de activos, lo cuales autorizan su intervención en juicio.

En este sentido, resulta de interés mencionar el interlocutorio dictado por el Juez Federal N° 1 de Córdoba, con fecha 29.04.2021, con motivo de la excepción de falta de acción articulada por los Dres. Rodrigo Álvarez y Marianela Loyeau, en ejercicio de la defensa técnica de Martín José Dus, persiguiendo que se revoque la participación acordada a la UIF como querellante en el presente proceso penal.

En dicho resolutorio, el señor Juez Federal N° 1 de Córdoba sostuvo con acierto que, con motivo de la ampliación de la imputación por la comisión de presuntos de hechos de lavado de activos de origen ilícito, en los términos del art. 303 inc. 1 e inc. 3 (conf. requerimiento fiscal de instrucción de fecha 30.12.2020), "[existe] en

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

la actualidad una investigación por lavado de activos y siguiendo el criterio de los Dres. Rodrigo Álvarez y Marianela Loyeau (i.e. la investigación de los delitos de lavado de activos sí admitiría la intervención de la UIF como querellante en autos (...))”, por lo cual rechazó el planteo defensivo.

Asimismo, no puedo soslayar la existencia en autos de impugnación por las distintas decisiones vinculadas con los delitos tributarios realizada por la querellante AFIP-DGI en virtud de las facultades legales atribuidas en la Ley N° 27.430, como así también por el Ministerio Público Fiscal, en defensa de la legalidad y en representación general de la ciudadanía (conf. art. 120 de la Constitución Nacional y Ley Orgánica N° 27.148).

Dicho ello, debe decirse que los actos procesales, como actos jurídicos, deben adecuarse a las normas que los regulan. La inobservancia de las prescripciones de la ley acarrea como consecuencia un acto irregular o viciado, ante lo cual procede la sanción procesal que tiene por objeto evitar los efectos o, producidos éstos, permitir su supresión.

Por sanción procesal debe entenderse la conminación en abstracto de invalidez o ineficacia que realiza la ley ante una determinada actividad irregular que se cierne sobre actos procesales viciados y que tiende a resguardar su regularidad (CLARIÁ OLMEDO, Jorge A., “Derecho Procesal Penal”, Tomo II, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1998, pág. 111).

Dentro del género de la ineficacia existen dos especies: la inadmisibilidad y la nulidad. Ambas reaccionan ante el vicio, pero la primera es “una calificación aplicable a los actos de parte, careciendo de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

aptitud para producir efectos jurídicos autónomos (una demanda que no reúne los requisitos legales es inadmisibile, no nula). Por otra parte, la nulidad puede configurarse únicamente en relación a los actos procesales susceptibles de producir efectos jurídicos autónomos (actos emanados de un órgano judicial)” (PALACIO, Lino Enrique, “Manual de Derecho Procesal Civil”, T. 2, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1987, t. IV, 30, pág. 30, citado por MAURINO, Alberto Luis, “Nulidades procesales”, 3ª edición actualizada y ampliada, ed. Astrea, Buenos Aires, 2009, pág. 19).

Respecto de los querellantes, el límite del ejercicio de sus derechos se circunscribe a los hechos que legitiman su participación en el proceso. En conclusión, corresponde declarar la inadmisibilidad parcial del recurso de apelación formulado por la Unidad de Información Financiera respecto de aquellos agravios que involucran hechos delictivos que exceden notoriamente el interés legítimo de la parte (en particular, respecto de los delitos tributarios y la declaración de incompetencia de la justicia federal por los delitos de defraudación por administración fraudulenta).

Por consiguiente, solo debe admitirse en esta Instancia, por contar con interés jurídico directo, la apelación formulada por la querellante Unidad de Información Financiera en orden al delito de lavado de activos de origen ilícito (conf. arts. 432, 435 y 444 del CPPN y arts. 303 del Código Penal, en función de la Ley 25.246, modificada por la ley 26.683).

V.- Previo a ingresar al estudio de las apelaciones y los agravios subsistentes, es menester efectuar el control de logicidad y examen de la observancia de las formas

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

esenciales exigidas para el dictado de auto de mérito, a efectos de establecer si la resolución sometida a revisión constituye o no un acto jurisdiccional válido susceptible de producir sus efectos propios o, bien, como sostiene el Ministerio Público Fiscal, la querellante AFIP-DGI y la defensa técnica de los imputados Martín José Dus y Jessica Camila Bodes, se ha dictado en violación al imperativo legal del art. 123 del CPPN, en función de los requisitos establecidos en los arts. 306 y 308 del CPPN, adoleciendo de vicios en su fundamentación en los distintos puntos resolutivos que cada parte cuestiona.

Ello así, toda vez que, por su naturaleza, de prosperar, impedirían analizar la acreditación de la participación penalmente responsable de los imputados en los hechos fijados por la Instrucción. Sobre este punto, al tratarse de un vicio que acarrearía la sanción de nulidad absoluta e insubsanable, en consonancia a la interpretación pacífica que de esta cuestión han hecho los más altos Tribunales del país, procedería su declaración de oficio (conf. arts. 167 inc. 3 y 168 del CPPN).

Entrando a analizar la objeción particular formulada por los apelantes, a la luz de las evidencias glosadas al presente sumario, es preciso efectuar, de manera preliminar, una referencia general a las reglas y principios que, en nuestro sistema jurídico, rigen tan grave sanción procesal.

A modo de anticipo, considero que la resolución dictada por el señor Juez Federal, oportunamente recurrida por las defensas técnicas de los imputados, por los querellantes y por el representante del Ministerio Público Fiscal, satisface las garantías constitucionales y procesales que rigen la correcta administración de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

justicia, con la excepción que se tratará en su punto respectivo con relación a los embargos dispuestos en autos.

La regla general en materia de nulidades en el procedimiento penal se encuentra establecida en el art. 166 del CPPN, en cuanto reza: *"Los actos procesales serán nulos sólo cuando no se hubieran observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de nulidad"*. Este precepto determina que la sanción procesal indicada importa una grave decisión jurisdiccional que elimina un acto del proceso por estar viciado de una irregularidad de tal entidad que su iniquidad acarrea la invalidación.

Dicha norma, entonces, adscribe a los principios de especificidad y legalidad, por cuanto los actos procesales serán nulos sólo cuando se hubiera inobservado las disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de nulidad. En definitiva, podría resumirse esta cuestión en el apotegma *"no hay nulidad sin previsión expresa"*, criterio restrictivo de apreciación de la invalidez conjugado a su vez con el principio interpretativo dispuesto en el art. 2 del CPPN, respecto de las sanciones procesales.

De ello se desprende que, dentro de nuestro sistema legal-procesal, no existen más nulidades que las específicamente decretadas por la ley, o cuando de otra forma se haya afectado un derecho constitucional esencial de modo concreto. Por ello, atendiendo a la evidente gravedad de tal sanción, el régimen del Código Procesal Penal de la Nación en su Libro I, Título 5, Capítulo 7, impone un criterio de interpretación restrictivo. En efecto, dicho cuerpo adopta un sistema legalista en esta

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

materia, de modo tal, que no basta cualquier irregularidad procesal, pues para lograr ello, debe presentarse una seria inobservancia de las formas y de los requisitos sustanciales previstos por la propia ley adjetiva.

Cabe mencionar, en tal sentido, el extremo -señalado copiosamente por la doctrina y jurisprudencia nacionales de que el fiel acatamiento del rito no es sólo garantía de justicia, sino condición ineludible de confianza de los ciudadanos en el sistema de administración de justicia. Ahora bien, es conveniente precisar también que dicha importancia de la sujeción a las formas imperantes no implica la consagración de un principio de ciego formulismo, toda vez que las solemnidades previstas por ley no constituyen un fin en sí mismo, sino que se orientan a la consecución de una finalidad principal en el proceso penal: establecer el modo en que debe desarrollarse la actividad procesal, con la finalidad primera de hacer efectivas las garantías que consagra la Carta Magna, protegiendo los intereses comprometidos en el ejercicio de la función judicial del Estado en el ámbito penal (cfse. Jorge Clariá Olmedo, Cuadernos del Instituto N° 95, 1967).

Ello equivale a decir que las "formas" estipuladas por ley obedecen a diversas "funciones" que deben cumplir en el proceso, lo que conlleva la adopción de una interpretación restrictiva de las nulidades procesales, según la cual la aplicación de la sanción se limita a supuestos en que el acto viciado ocasiona perjuicio y no cumple con la finalidad prevista (BINDER, Alberto "Invalidez de los actos procesales y formas del proceso", RDP. Garantías constitucionales y nulidades procesales, T. I, Ed. Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, 2001, pp. 208 y ss.).

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

En otras palabras, la nulidad requiere la constatación de un perjuicio concreto para alguna de las partes, siendo improcedente su declaración en el solo interés del formal cumplimiento de la ley. Es decir, para que prospere la declaración de nulidad se requiere la existencia de un perjuicio concreto para alguna de las partes, puesto que cuando se adopta en el sólo cumplimiento de la ley importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (CSJN Fallos: 295:961; 298:312; 302:221; 306:149 y 1360; 310:1880; 311:1413 y 2337; 323:929, entre otros).

Este criterio fue abrazado por los más altos Tribunales del país al decir que *"... las nulidades procesales se encaminan hacia un ámbito más restrictivo en el que se persigue, como regla general, la estabilidad de los actos jurisdiccionales en la medida que su mantención incólume no conlleve la violación de normas constitucionales o cuando así se establezca expresamente..."* (CFA de San Martín, Sec. Penal I, en autos: "Coronel, Juan Carlos y otros s/inf. Ley 23.737", Reg. 5587).

Asimismo, no solo los actos procesales en discordancia con la ley ritual dan lugar a su invalidación, sino también aquellos en los cuales se advierte la clara afectación de derechos y garantías fundamentales -reconocidos por la Constitución Nacional y tratados de igual jerarquía- en la obtención de los elementos de juicio inculpativos o bien en la realización de actos procesales de trascendencia para el proceso y los sujetos alcanzados por ella, mereciendo el reproche del Estado y debiendo, en consecuencia, ser excluidos del proceso.

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

En este sentido, resulta dable destacar lo prescripto en el art. 168 segundo párrafo del CPPN, al señalar que *“Solamente deberán ser declaradas de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, las nulidades previstas en el artículo anterior -remisión a la nulidad de orden general que impliquen violación de las normas constitucionales, o cuando así se establezca expresamente”*. Es necesario, cualquiera sea la índole de la nulidad, la concurrencia de interés jurídico en la destitución del acto viciado. Las nulidades procesales han sido establecidas a fin de evitar que el incumplimiento de las formas se traduzca en perjuicio para alguna de aquéllas o las coloque en estado de indefensión. Por ello, deben rechazarse aquellos planteos nulidificantes cuando no se han visto afectadas las formas esenciales del procedimiento ni se han vulnerado garantías constitucionales.

A propósito de ello, es propicio considerar que el artículo 123 del Código de Procedimiento Penal de la Nación prescribe, bajo pena de nulidad, la obligación del juez de expresar una motivación suficiente en sus sentencias, lo cual significa consignar las causas y razones que determinan el decisorio o exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la resolución, esto es, las razones que poseen aptitud para legitimar el dispositivo (Francisco J. D’Albora Código Procesal Penal de la Nación, Tomo I Ed. Lexis Nexis, pág. 257).

La motivación de la sentencia constituye la enunciación de la premisa del silogismo que concluye en los puntos resolutivos, es decir, el itinerario lógico de razón suficiente que el juez ha recorrido para llegar a la conclusión y adoptar una decisión jurisdiccional.

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

Por ende, si la conclusión es equivocada, se puede fácilmente determinar mediante el análisis de la motivación, en qué etapa del camino del razonamiento el juez perdió la orientación correcta. En este sentido, la fundamentación resulta un elemento esencial e insoslayable en un pronunciamiento válido. Ello implica que las decisiones adoptadas deban estar precedidas de un análisis de hecho y de derecho que conduzca, de manera indefectible, a tales conclusiones, sin desviaciones lógicas ni razonamientos arbitrarios o forzados.

En atención a lo anterior, el razonamiento efectuado por el juez para arribar a una determinada decisión debe estar plasmado de forma clara y precisa en la propia resolución, de modo tal que pueda verificarse que su decisión deriva de una valoración realizada por el juzgador a la luz de la razón y no a la libre o íntima convicción, porque no se trata de resolver según la apreciación subjetiva del juzgador.

Al respecto, la doctrina considera que se cumple con esta obligación si el fallo está racional y concordantemente fundado, permitiendo extraer de las valoraciones que realiza el acierto de la conclusión a que llega, siendo indispensable que exista un sustento operante como ligazón racional de la prueba con la aseveración. Jamás puede quedar reservada a la intimidad de la conciencia de quien juzga porque violenta el principio de la sana crítica racional.

En esto consiste la obligación republicana para garantizar una correcta administración de justicia, la cual se cubre si la resolución guarda relación con los antecedentes que le sirven de causa y son congruentes con el punto decidido, suficientes para el conocimiento de las

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

partes y para las eventuales impugnaciones que pudieran receptar (op. cit., pág. 258). Por el contrario, si una decisión no encuentra sustento en el análisis efectuado por el juzgador o se desvía de la línea de razonamiento expuesta por el mismo, la decisión será inmotivada y en consecuencia arbitraria, no pudiendo subsistir como acto jurisdiccional válido.

De tal modo, un pronunciamiento válido debe contener un completo y fundado análisis sobre la base de los elementos de convicción reunidos libremente por el Instructor, sin omitir la constatación de la materialidad de los hechos, la forma de participación de los imputados y su responsabilidad criminal, evitando de este modo incurrir en valoraciones fragmentarias o parciales, atendiendo siempre las reglas de la sana crítica racional.

Efectuadas tales consideraciones teóricas acerca de la obligación legal de fundamentar las sentencias, advierto que la resolución sometida a revisión de esta Alzada satisface válidamente los requisitos de fundamentación expuestos, más allá de la discrepancia con la solución adoptada que pudieran albergar los apelantes.

En este sentido, considero que el cuestionamiento efectuado por los recurrentes deriva del disenso respecto de la decisión adoptada por el Instructor y el mérito contenido en ella.

En efecto, no se advierte que el decisorio se encuentre inmotivado, sino que, por el contrario, el señor Juez ha brindado sólidos argumentos en pos de la justificación de su razonamiento, sin perjuicio que éste no sea compartido por los recurrentes. Para formular un planteo nulificante no basta discrepar con la valoración efectuada por el Tribunal actuante, sino que debe





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

demostrarse que se ha apartado de las reglas impuestas en el Código de Rito, incurriendo en ausencia de fundamentación suficiente o adoptando conclusiones que no resulten derivación razonada del derecho vigente.

En el caso concreto el magistrado ha realizado un análisis de los elementos de convicción incorporados al proceso y ha brindado los argumentos -que podrán compartirse o no- con base en los cuales sostuvo la existencia de un estado intelectual de probabilidad respecto de la existencia de los hechos y la participación culpable de los imputados, cuanto la falta de mérito para procesar o sobreseer a ciertos imputados por su participación en los hechos atribuidos y la presunta existencia de certeza negativa para disponer los sobreseimientos, examinando y valorando el caudal probatorio y el derecho vigente aplicable, lo cual excluye por cierto cualquier tacha de arbitrariedad.

De hecho, no se constata en el silogismo base del razonamiento forense la concurrencia de contradicciones, saltos lógicos o afirmaciones dogmáticas que, al cabo, constituyan fundamento tan solo aparente. En definitiva, sobre la fijación de dichas premisas el magistrado presentó sólidos argumentos; en el caso de la definición de la situación procesal, mediante la valoración de la prueba en función de los principios de la sana crítica racional y, en cuanto al derecho aplicable, propició una interpretación sistémica del derecho sustantivo y procedimental aplicable a la luz de los principios que lo informan, que podrá o no compartirse pero que en modo alguno lesiona el derecho de defensa constitucionalmente consagrado en favor de las partes del proceso.

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

Asimismo y en orden general, respecto de la intervención, control, refutación y alegación de las partes sobre la prueba rendida en el proceso, debo decir que fueron proveídas las peticiones formuladas por todas las partes y brindados los motivos de la aceptación o rechazo tanto de las hipótesis acusatorias como defensivas, según la prueba y su valoración lo indicaba, sin formularse impedimentos de orden formal o material para acceder a ella.

No debe soslayarse la etapa procesal que se atraviesa, encontrándose el proceso en plena investigación judicial y de recolección de prueba para dar sustento a una eventual acusación frente al Plenario o bien a descartar la hipótesis delictiva en todo o en parte. Cabe recordar que, en esta etapa procesal de corte netamente provisorio y revocable, el contradictorio es limitado, habiendo de encontrar su máxima extensión y significación en el juicio oral y público, momento en que la confrontación, refutación y alegación sobre la prueba será plena y absoluta.

Véase, sobre este punto, que el dictado de auto de procesamiento procede inaudita parte, sin necesidad de contar con requerimiento, vista o notificación previa de algún tipo (art. 306, CPPN). Ciertamente, solo exige elementos de convicción suficiente sobre la ocurrencia del delito y la intervención del imputado y no reclama contar con la totalidad de los datos necesarios para dilucidar el hecho, basta con que resulte posible estimar la existencia del delito y la responsabilidad del imputado, aun a través de indicios apreciables prudencialmente.

Al respecto, no debemos olvidar que al inicio de una investigación penal nos encontramos ante un escenario de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

cierta imprecisión o vaguedad que, justamente, la instrucción deberá ir definiendo con mayor especificidad a medida que avanza el proceso.

En este sentido, el procesamiento constituye un juicio incriminatorio provisorio e intermedio que supone un estadio avanzado en la investigación y, de esta forma, una mayor especificidad respecto a los extremos relativos a la determinación del delito, el imputado y sus circunstancias.

Por su parte, debe decirse que la denuncia constituye el anoticiamiento de la comisión de un delito que, precisamente, serán los órganos judiciales encargados de la investigación, previa promoción de la acción penal que habilita en forma amplia la jurisdicción, quienes deberán establecer la relación de los hechos y el derecho aplicable. En efecto, la instrucción es la etapa preparatoria en la cual se procura alcanzar, frente a una hipótesis delictiva dada, la verdad real y a medida que la investigación avanza se van perfeccionando las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los sucesos investigados.

Por otra parte, corresponde reiterar que el procesamiento constituye un auto esencialmente provisorio y revocable, que no causa estado, y que la diligencia y celeridad en el avance de la investigación y la resolución de la situación procesal de los imputados, lejos de erigirse en situación lesiva de sus derechos, se presenta como un resguardo a las garantías del cumplimiento del ideal de justicia y de los estándares internacionales de juzgamiento en plazo razonable.

VI.- Debo ingresar ahora al análisis de las objeciones formuladas respecto de las cuestiones de

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

jurisdicción y competencia, en virtud de la decisión adoptada por el señor Juez Federal N° 1 de Córdoba en los puntos resolutivos 22, 25 y 29 del auto aquí apelado y las correlativas apelaciones interpuestas por la señora Defensora Oficial Dra. María Mercedes Crespi y la querellante Unidad de Información Financiera, en contra de la declaración de incompetencia material de la justicia federal respecto de los delitos de lavado de activos de origen ilícito -hechos 97, 101, 102, 103 y 109- y por el Ministerio Público Fiscal en orden a la incompetencia federal declarada por los delitos de defraudación por administración fraudulenta -hechos 95 y 96- y defraudación por administración fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública -hechos 90 y 91-.

A modo de anticipo diré que disiento parcialmente con la solución brindada por el magistrado instructor, en tanto considero que corresponde hacer lugar a la pretensión impugnativa que propugna la competencia federal para entender en los delitos de lavado de activos de origen ilícito.

Por otro lado, coincido en la declaración de incompetencia material de la justicia federal sobre los hechos presuntamente configurativos de defraudación por administración fraudulenta y defraudación por administración fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública, por las razones que a continuación expondré.

A los fines de dilucidar la cuestión, cabe destacar que la competencia federal es de carácter excepcional, estricto y limitativo o restrictivo, reservado para los delitos que expresamente le sean atribuidos, ello a fin de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

salvaguardar la forma federal de gobierno establecida expresamente en la Constitución Nacional.

La asignación de competencia a los tribunales federales es, por su naturaleza, restrictiva, de excepción y con atribuciones limitadas a los casos que mencionan los art. 116 y 117 de la CN y sus leyes complementarias (Fallos, 324:286), en razón del respeto a las autonomías provinciales (Fallos, 286:8, 306:1217 y 1615, entre otros).

Dentro de estos conceptos, la competencia federal estará determinada entonces por los delitos que afectan a personas, lugares o materias que por sus especiales características pongan en juego un interés concreto del Estado Federal (ALMEYRA, Miguel Ángel – BÁEZ, Julio César, Código Procesal Penal de la Nación Comentado y Anotado, Tomo I, La Ley, año 2007, Bs. As., pág. 405).

Asimismo, la justicia federal debe entender en las causas originadas por delitos que, aun cuando se cometan en territorio provincial, por una u otra causa afectan la entidad de la Nación como poder central, porque atacan los intereses del Estado soberano, sus rentas, su propiedad, sus autoridades o la representación extranjera ante su gobierno, o violen la misma Constitución Nacional o las leyes especiales del Congreso, etc. (OLMEDO, Jorge Clariá, "Tratado de Derecho Procesal Penal", Tomo II, Sujetos Procesales Penales, pág. 137).

Con respecto a la incompetencia del fuero federal para la investigación y juzgamiento de las presuntas defraudaciones por administración fraudulenta o infiel que habrían sido cometidas en perjuicio del patrimonio de sociedades comerciales (Corphone S.A. y Softkey S.A.) y de entes estatales del territorio de la provincia de Córdoba

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

(Municipalidad de Saldán y Comunidad Regional Colón)
-hechos nominados 90, 91 y 95 y 96, respectivamente-,
considero ajustada a derecho tal decisión.

En efecto, con dicha declaración de incompetencia federal se respeta y resguarda la autonomía provincial, reconociendo la competencia de la Justicia Ordinaria para conocer y decidir respecto de conflictos penales que involucren a sujetos de derecho privado, tales como las sociedades comerciales, y a sujetos de derecho público estatal de orden local, como la municipalidad y ente regional, todo en observancia del sistema federal de gobierno constitucionalmente instituido (conf. arts. 1 y 5 de la Constitución Nacional).

Asimismo, cabe advertir que la posible infracción a los artículos 173 y 174 del Código Penal (defraudación por administración fraudulenta y defraudación por administración fraudulenta agravada) se presenta en este caso escindible de los demás ilícitos objeto de investigación (delitos tributarios y lavado de activos de origen ilícito), diferenciándose éstos en sus elementos objetivos y subjetivos, exigencias típicas de autoría, consumación o tentativa y bienes jurídicos tutelados con protección separada en la sistemática de nuestro Código Penal y en las leyes especiales.

En esta línea, el argumento esgrimido por el señor Fiscal Federal respecto a que la génesis de las presuntas defraudaciones agravadas sería la utilización de las facturas apócrifas creadas por la asociación ilícita fiscal, y que se encuentra imputado como partícipe necesario de las defraudaciones en cuestión Diego Vieyra Ferreyra -quien sería organizador de la asociación ilícita fiscal-, no modifica el temperamento adoptado, en tanto se

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

trata aquí de un delito común sobre el que debe conocer la justicia provincial; ello, sin que importe a este respecto quienes resultaren involucrados como responsables penalmente, siempre que no configure una causal de competencia federal en orden a las personas.

Por el contrario, en cuanto a los involucrados, los presuntos sujetos pasivos del delito en cuestión serían entes jurídicos sobre los que no existen intereses comprometidos de orden patrimonial de la Nación, menos aún razones de soberanía nacional, como tampoco competencia federal con motivo de las personas involucradas.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que cuando se investiga una pluralidad de delitos corresponde separar el juzgamiento de aquéllos de naturaleza federal de los que son de índole común, aunque mediar entre ellos una relación de conexidad (Fallos: 318:2675; 321:2451; 323:772; 324:2086 y 325:261, entre otros). Ello, con la excepción de los casos de concurso ideal en los cuales se verifique una unidad de acción, lo cual entiendo no ocurre en este caso, no obstante se señale en ambas imputaciones el empleo de la misma modalidad comisiva, esto es, mediante la utilización de facturas apócrifas.

Corresponde reiterar, entonces, que nuestro Máximo Tribunal definió que la presunta conexidad que pudiera existir entre unas y otras infracciones no basta para acordar la intervención de la Justicia Federal respecto de los delitos que, por la materia o por las personas, son ajenos a su competencia específica (Fallos: 248:438; 308:2522 y Competencia n° 606, L.XXXVIII en autos: Palacios, Eduardo Jorge y otros s/infr. art. 292,

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

encubrimiento y art. 210 del C.P.", resuelta el 16 de octubre de 2002).

En tales condiciones, corresponde ratificar la incompetencia de la Justicia Federal para continuar investigando y juzgando los delitos de defraudación por administración fraudulenta y defraudación por administración fraudulenta agravada, de carácter común.

Finalmente, estimo oportuno señalar que esta Sala B de la Cámara Federal se pronunció en el mismo sentido, en los autos: **"Municipalidad de la Calera y otros s/infracción Ley 24.769"** (Expte. FLP 48016/2019/CA1), resuelta con fecha 15 de diciembre de 2020. En dicha oportunidad, este Tribunal dispuso la confirmación de la resolución que había declarado la incompetencia de la Justicia Federal, en razón de la materia, para intervenir en la investigación de las supuestas facturas apócrifas utilizadas en la contabilidad de la Municipalidad de La Calera y la fraudulenta administración de fondos públicos de naturaleza municipal, por tratarse en definitiva de fondos públicos que no pertenecen al Estado nacional.

En conclusión, por las normas citadas y las razones expuestas, corresponde confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto declaró la incompetencia material de la justicia federal para entender en la investigación y juzgamiento de los presuntos delitos de defraudación por administración fraudulenta -hechos nominados 95 y 96 del requerimiento de instrucción de fs. 4418/4420- y defraudación por administración fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública -hechos nominados 90 y 91 del requerimiento de instrucción de fs. 3059/3102-, debiendo el Juez Federal actuante remitir los antecedentes

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

pertinentes de la causa a la Justicia Ordinaria, para la continuación del trámite que por ley corresponda (conf. art. 172, 173 inc. 7 y 174 inc. 5, del CP y art. 33, primer párrafo inc. "e" y "c" y art. 35 del CPPN).

VII.- Por otra parte, la defensa técnica de la imputada Jessica Yamila Bodes ejercida por la Dra. María Mercedes Crespi así como los representantes de la Unidad de Información Financiera, cuestionan la resolución en cuanto declaró la incompetencia material de la justicia federal para entender sobre los delitos de lavado de activos de origen ilícito -hechos 97, 101, 102, 103 y 109-; pretensión que ha de recibir acogida favorable por resultar ajustada a derecho, correspondiendo revocar la incompetencia federal declarada y avocarse el Juzgado Instructor nuevamente a su conocimiento.

En este sentido, debe considerarse que *"luego de la sanción de la ley 26.683 es competente la justicia federal para conocer en los casos en que se investigue la posible comisión del delito de lavado de dinero previsto en el art. 303 del Código Penal..."* (CFCP, "Recurso de Queja N° 1 - Imputado: Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada, Trelew S/ Infracción Art. 303 e Infracción Art. 304", FCR 013024/2015/1/1/RH002, 13.11.2018; el destacado me pertenece).

En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ratificado recientemente la competencia del fuero federal en los casos de lavado de activos (conf. Ley 26.683), con base en que *"en virtud del decreto 825/11 del que surge que la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una preocupación prioritaria del Estado Nacional -que se ha comprometido internacionalmente con ella-, toda vez que dichas*

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

conductas delictivas constituyen un serio riesgo, no sólo para la estabilidad de los sistemas democráticos y el desarrollo de sus economías, sino, fundamentalmente, para la libertad de los ciudadanos. En síntesis, estamos frente a un delito que trasgrede las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofenden la soberanía y la seguridad de la Nación o tiendan a la defraudación de sus rentas u obstruyan y corrompan el buen servicio de sus empleados” - art. 33 inc. c del Código Procesal Penal de la Nación-, por lo que es la justicia federal la que debe continuar con su investigación” (CSJN 3441/2015/CS1, Olivetto, José Luis y otro S/infracción art. 303 inc. 2 A”, rta. 10.05.2016, ratificada recientemente en autos: “Brulc, Adrián F. y otros s/incidente de incompetencia FLP 64049/2017/T01/44/CS1, resuelta el 7.06.2022; el destacado me pertenece).

En conclusión, corresponde revocar el auto apelado en cuanto dispuso la incompetencia material de la justicia federal sobre los hechos nominados 97, 101, 102, 103 y 109 presuntamente configurativos del delito de lavado de activos de origen ilícito, debiendo continuar la causa según su estado (conf. art. 303, inc. 1 e) inc. 3, del CP y art. 33, primer párrafo, inc. e) y c) y art. 35 del CPPN).

VIII.- Sentada la validez formal del auto de mérito recurrido y la competencia material de los tribunales federales, corresponde examinar, en los límites de las pretensiones impugnativas, las razones que la sustentan y otorgan suficiencia, conforme la inferencia inductiva de las pruebas reunidas mediante el sistema de valoración de la sana crítica racional, en orden a establecer la existencia o no del hecho atribuido y la intervención de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

los imputados, así como la correcta interpretación del derecho aplicable al caso que condujo al dictado del auto de procesamiento en cuestión.

En este orden, debo ponderar el material convictivo incorporado a los fines de sopesar el compromiso procesal de los encausados en orden a la imputación que pesa en su contra, a la luz de las reglas de la sana crítica racional, esto es, el convencimiento del juez, en uno u otro sentido, bajo la exigencia de que sus conclusiones *"sean el fruto racional de las pruebas, limitadas por las normas que gobiernan la corrección del pensamiento, de la psicología y de la experiencia común"* (CNCP, in re *"WAISMAN, Carlos A."*).

A tal fin, entiendo oportuno efectuar algunas consideraciones acerca del estadio por el que transita la presente causa, particularmente, sobre el alcance que, en el ordenamiento procesal vigente, corresponde asignarle al auto de procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento tal como está previsto en los artículos 306, 309 y 336 del Código Procesal Penal de la Nación.

Debo decir que el procesamiento constituye una decisión jurisdiccional de carácter provisional -puede ser revocada o modificada durante el curso de la instrucción y cuando la aparición de nuevos elementos así lo justifiquen (artículo 311 del CPPN)-, mediante la cual el juez, sobre la base de la prueba colectada, valorada conforme las reglas de la sana crítica racional, arriba a la convicción, sin necesidad de que exista certeza plena, respecto de la comisión de un hecho delictuoso y que el imputado es culpable como partícipe en él (arts. 45 y 46 del Código Penal).

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

Procede, entonces, en la medida que exista *probabilidad*, es decir, cuando -teniendo en cuenta el fin inmediato del proceso penal, cual es la búsqueda de la verdad real- los elementos de cargo existentes generen convicción suficiente respecto de la existencia del hecho ilícito y la responsabilidad penal del imputado.

En suma *"... se trata de la valoración de elementos probatorios suficientes para producir probabilidad, aun no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir hacia la base del juicio. ...el procesamiento debe ser conceptualizado como un juicio provisional acerca de la posible culpabilidad o merecimiento de pena por parte del imputado, con respecto a un hecho penalmente relevante verificado en concreto, y apoyado en un conocimiento probable ante la existencia de elementos suficientes de convicción para dar paso a una acusación"* (Jorge A. Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, Tomo II, actualizado por Carlos Alberto Chiara Díaz, Ed. Rubinza- Culzoni, pág. 500/507).

Si existiese duda, la que se verifica a partir del equilibrio existente entre los elementos que inducen a afirmar la existencia y participación del imputado en el hecho y aquellos que inducen a negarla, corresponderá dictar un auto de falta de mérito (artículo 309 del CPPN) (Cafferata Nores, "La Prueba en el Proceso Penal", Ed. Depalma, Bs. As. 1994).

Ahora bien, si al momento de resolver la situación procesal del imputado, el juez hubiere adquirido certeza negativa, corresponderá ordenar el sobreseimiento cuando sea evidente que la pretensión represiva se ha extinguido, o que carece de fundamento, cuando el hecho no fue cometido, o no lo fue por el imputado, o no encuadra en





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

una figura penal, o media alguna causa de justificación, inculpabilidad, inimputabilidad o excusa absolutoria (art. 336 del CPPN).

Por último, las consideraciones aquí efectuadas deben compatibilizarse con la etapa procesal que se atraviesa, encontrándose la causa en plena investigación judicial y recolección de prueba para dar sustento a una eventual acusación frente al Plenario. Cabe recordar que, en esta etapa procesal de corte netamente provisorio y revocable, el contradictorio es limitado, habiendo de encontrar su máxima extensión y significación en el juicio oral y público, momento en que la confrontación, refutación y alegación sobre la prueba será plena y absoluta.

En función de ello, siendo que el auto de procesamiento no requiere de certidumbre concluyente acerca de la comisión de un ilícito ni tampoco de la participación de los acusados en su producción para su procedencia, basta un juicio de probabilidad sobre los extremos fácticos y jurídicos de la imputación delictiva y verificar que los elementos de cargo resulten de mayor entidad que los exculpatorios.

El auto de procesamiento constituye así un juicio lógico, de carácter provisional, que no reposa en la certeza necesaria para condenar sino en una probabilidad de culpabilidad que justifica la prosecución de la causa y que obliga a revisar y relacionar los elementos de juicio reunidos por la instrucción, para determinar si los mismos alcanzan para afirmar, con dicho grado de probabilidad, la existencia material de los sucesos y la responsabilidad penal atribuida a los encartados.

a) Asociación ilícita fiscal -hecho primero-.

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

Dicho ello, en orden al delito de asociación ilícita fiscal previsto en el artículo 15 inc. c) del Régimen Penal Tributaria conf. Ley 27.430, estimo oportuno reiterar los conceptos vertidos por el suscripto en anteriores pronunciamientos que, en definitiva, trasuntan la caracterización del tipo penal en cuestión; ello, en cuanto interesa a esta instancia revisora en virtud de los recursos de apelación deducidos.

El tipo penal en trato sanciona: *“el que a sabiendas: c) Formare parte de una organización o asociación compuesta por tres o más personas que habitualmente esté destinada a cometer, colaborar o coadyuvar cualquiera de los ilícitos tipificados en esta ley, será reprimido con prisión de tres (3) años y seis (6) meses a diez (10) años. Si resultare ser jefe u organizador, la pena mínima se elevará a cinco (5) años de prisión”*.

Esta figura, en su recepción en la nueva Ley 27.430 y su actual redacción, no difiere sustancialmente con aquella que había sido incorporada al régimen previsto por la Ley 24.769, también en el art. 15 inc. c), mediante la reforma introducida por la Ley 25.874 (B.O. 22.01.2004) (en el mismo sentido: *“Delitos Tributarios y contra la seguridad social”*, Borinsky - Turano - Rodríguez - Schurjin Almenar, 1ª ed. Revisada, Santa Fe, Ed. Rubinzal Culzoni, 2020, pág. 449).

En efecto, la nueva redacción del texto legal mantuvo el núcleo de prohibición de su antecesora, con idéntica acción típica y características, pero su estructura *“se adecua a una mejor técnica legislativa precisándolo con el agregado de las finalidades de ‘colaborar’ o ‘coadyuvar’*. En este sentido, la voluntad del legislador siempre estuvo clara (...) la idea era criminalizar las organizaciones que





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

prestaran algún 'servicio' que permitiera a los obligados realizar los delitos tipificados por la ley. Así parece haberlo concluido la jurisprudencia al calificar esas agrupaciones como artículo 210 del Código Penal o 15, inciso c, según sea la ley aplicable al momento de su formación o permanencia, y al considerar al segundo como supuesto especial del primero (CFCP, Sala IV, "Santiago, Oscar Lucas y otros s/recurso de casación", reg. 641/17.4, 5.06.2017)" (ob. cit., pág. 453).

Con estas modificaciones, se aprecia que la voluntad del legislador ha sido dar por tierra la antigua discusión acerca del carácter, desde el punto de vista de la autoría, de delito especial de la figura en su anterior redacción por la única finalidad que preveía de "cometer" delitos tributarios, tratándose -en los nuevos términos- de un delito común.

Ello así, toda vez que, con el agregado de los términos "colaborar" o "coadyuvar" en cualquiera de los delitos del régimen penal tributario -como finalidades de la asociación-, no cabe más que entender que la comisión del delito no requiere de cualificación en el autor, pudiendo serlo cualquier persona que realice el tipo penal, con dominio del hecho, con independencia de que este reúna o no la condición de obligado tributario. Por lo demás, resulta plenamente aplicable todo lo expresado respecto de la figura de asociación ilícita fiscal en su anterior redacción.

En este sentido, conforme al texto legal citado, la figura penal en juego exige para su configuración: 1) un pacto o acuerdo de voluntades para conformar una agrupación criminal; 2) la intervención de tres o más personas; 3) habitualidad en las actividades de la

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

organización; 4) pluralidad de fines delictivos, de naturaleza tributaria.

En cuanto a la existencia del acuerdo criminoso, la conformación de la organización delictiva en trato exige en los sujetos activos conductas exteriorizadas que permitan presumir, sin duda alguna, que esas actividades fueron realizadas con pertenencia a la asociación. Por ello, el núcleo del tipo penal reprime la acción de "formar parte" de una organización criminal, que debe estar compuesta por tres o más personas, destinada a cometer, colaborar o coadyuvar ilícitos tributarios.

Asimismo, se trata de un delito donde la pluralidad de intervinientes es otro de los fundamentos de su punición, igual que la figura de asociación ilícita del art. 210 del CP. En efecto, no sólo tiene por objeto la protección de los mismos bienes jurídicos que tutela el régimen penal tributario, sino también, del orden público, pues se trata de un delito pluriofensivo. En este punto, considero que el delito de asociación ilícita fiscal se comporta como una figura especial del art. 210 del C. Penal, ya que tiene por finalidad específica la comisión indeterminada de ilícitos de naturaleza fiscal.

Sobre el particular, comparto lo expuesto por la doctrina cuando sostiene que el bien jurídico tutelado por el delito de asociación ilícita fiscal presenta una configuración compleja donde confluye la protección del orden público del tipo penal básico del art. 210 del C. Penal y el objeto de protección de los delitos del régimen penal tributario (RIQUERT, Marcelo. "Régimen penal tributario y previsional. Ley 27.430. Comentada. Anotada", Ed. Hammurabi, Buenos Aires, año 2018, Pág. 270).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

En cuanto al elemento habitualidad, considero que además de ser entendido como un sinónimo de permanencia de la organización criminal, también debe referirse a la reiteración de aquellos actos delictivos tenidos como propósito final.

Finalmente, debo decir respecto del último requisito típico de la figura penal en trato, que el fin delictivo de la asociación debe ser su propósito preponderante sin que ello implique exigir siquiera el comienzo de ejecución de aquellos delitos que son objeto de ella, en función de su carácter autónomo.

Por su parte, por sus caracteres comunes respecto de la figura de "asociación ilícita" (art. 210, CP) la doctrina argentina coincide en señalar los siguientes elementos del delito: a) tomar parte en una asociación; b) número mínimo de partícipes; c) propósito colectivo de delinquir. La acción prevista en el tipo consiste en tomar parte en una asociación o banda. Para la punibilidad de la conducta es suficiente con el mero "asociarse", de tal modo que, fuera de la existencia del pacto, no sería necesaria ninguna actividad exterior.

La existencia del grupo tiene por base un acuerdo entre sus miembros o "pacto", que no requiere formalidad alguna y que puede, asimismo, ser tácito, espontáneo. Es suficiente con que de la conducta total del autor se derive que él sujeta su voluntad a la del grupo, y de ese modo, se inserta en la organización.

El carácter de miembro, por lo tanto, puede derivar de la propia realización de actividades en común. No se requiere una declaración de ingreso formal a la asociación, siendo necesario que haya existido, al menos, alguna exteriorización de la conducta de sus integrantes

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

que permita a todos ellos reconocerse entre sí como pertenecientes a un conjunto que comparte objetivos comunes, esto es, que la asociación se forma para cometer, colaborar o coadyuvar en delitos, si bien no hace falta que exista trato personal entre los miembros.

Desde el punto de vista del tipo subjetivo, el delito de asociación ilícita no presenta particularidades especiales. El conocimiento de los elementos del tipo objetivo supone que el autor conoce que su conducta realiza un aporte a un grupo formado por al menos dos miembros más, cuyo objetivo es la comisión o colaboración en delitos como objetivo principal de la asociación. La sola conciencia de que el logro del fin que la agrupación se propone exigirá la comisión o colaboración ocasional o eventual de algunos delitos no basta. No es necesario que conozca la identidad de los otros integrantes, sino sólo su existencia y la naturaleza del pacto que los vincula.

Tampoco debe conocer concretamente los delitos planteados o cometidos por otros miembros. El error de prohibición sobre la punibilidad de los fines de la asociación o bien, el desconocimiento de la actividad de la asociación excluye el dolo, si bien es suficiente el dolo eventual (Patricia S. Ziffer, "El delito de asociación ilícita", Ed. Ad. Hoc, págs. 67/82).

Bajo tales parámetros, ha de examinarse el mérito reunido en orden a la presunta intervención dolosa de los prevenidos Martín José Dus y Cristian Debarre en el delito atribuido. Así, conforme surge de los requerimientos de instrucción presentados por el Ministerio Público Fiscal a fs. 3059/3102, 3368, 3627/3631, 4418/4420, 4630/4642, 4746/4747 y 5907/5909, se reprocha que: *"En fecha no determinada con exactitud, pero presumiblemente desde*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

enero de 2018 al día de la fecha, **DIEGO ALBERTO VIEYRA FERREYRA, NATALIA SOLEDAD VIEYRA FERREYRA, MARIA BELEN GOMEZ, DAMIAN GABRIEL OLIVIERI BRIZUELA, JORGE DANIEL CUEVAS, RUTH NOEMI DIAZ, EDUARDO ENRIQUE MANSILLA, MAURICIO ANDRES PIZZI, PABLO DARIO BARBIERI, RODOLFO LUIS TAPIERO, LUCAS FERNANDO ZOPETTO** y otras personas aún no identificadas, habrían conformado y organizado, una asociación destinada a cometer, colaborar y coadyuvar en la comisión de un número indeterminado de ilícitos tributarios. Primero, a través de la emisión y venta de facturas manuales o electrónicas apócrifas a su nombre, a nombre de otras personas físicas - con o sin su consentimiento -, o de personas jurídicas integradas por cualquiera de todos ellos, utilizando sus claves fiscales y sin tener la capacidad económica en general para proveer servicios y/o productos - en adelante "usinas" - o en particular los servicios y/o productos facturados - en adelante "usinas mixtas" -. Segundo, a través de la copia de facturas verdaderas de contribuyentes con capacidad económica a las cuales se les cambiarían los datos del cliente y los valores de la operación, en realidad inexistente. Todo ello con la finalidad de generar crédito fiscal espurio y/o gastos ficticios, en parte para disminuir la base imponible de los clientes de la organización con relación al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a las Ganancias, y en parte para disimular la falta de capacidad económica de las propias "usinas" y "usinas mixtas" utilizadas para emitir facturas apócrifas, con excepción de los Municipios y Comunas - exentos de dichos impuestos - que aparecen entre los destinatarios de tales facturas. En relación a estos el uso de las facturas apócrifas tendría por objeto ocultar y/o disimular el

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

verdadero destino dado a las sumas de dinero consignadas en dichos documentos.

En la estructura de esta organización, **DIEGO ALBERTO VIEYRA FERREYRA** sería su organizador, a partir de sus conocimientos informáticos, contables y fiscales se encargaría de obtener por sí o por interpósitas personas el CUIT y la clave fiscal de las “usinas” y “usinas mixtas”, emitir facturas electrónicas apócrifas desde el domicilio de calle Veracruz 1908, B° Residencial América de esta ciudad, coordinar su emisión desde otros domicilios y venderlas, directamente o a través de intermediarios, a los clientes de la organización (en adelante usuarios de facturas). Asimismo, acordaría y fijaría las comisiones a recibir de los clientes de las facturas por parte de los intermediarios - de haberlos - y de los prestanombres para generar “usinas” -en caso que hubieran consentido al uso de su CUIT y clave fiscal-, los plazos de cobranzas, la reposición de los cheques recibidos y rechazados, y las gestiones ante la AFIP DGI para demorar las fiscalizaciones y continuar con el uso de las “usinas” - cambio de domicilios fiscales, cambio de puntos de venta, presentaciones sistémicas, etc. - o para asegurar su mejor provecho por parte de sus clientes - “usuarios” - como en los casos de MASTER RED S.A. (33-70800083-9) y DAVERLEY S.A. (30-70044540-9), entre otros.

Hasta el momento se han detectado entre 1/2018 y 4/2020 un total de 80 “usinas” y “usinas mixtas” vinculadas a la organización tratándose de: 1) SUCESION DE OLIVIERI CARLOS ALBERTO (20-14127196- 3), 2) AIME RAUL GERARDO (20-14354323-5), 3) CUEVAS JORGE DANIEL (20-18222742-1), 4) ALONSO MARCELO FERNANDO (20-18773765-7), 5) MOYANO LEONARDO GUSTAVO (20-21394708-8), 6) MATAR

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

WALTER RICARDO (20-21805933-4), 7) TORANZO SEBASTIAN (20-24991395-3), 8) COMBINA DIEGO ALEJANDRO (20-25217204-2), 9) JIMENEZ NICOLAS DAVID (20-26477466-8), 10) ARAOZ RUBEN ESTEBAN (20-28480994-8), 11) CRIADO CRISTIAN ADRIAN (20-29030442-4), 12) VIEYRA FERREYRA DIEGO ALBERTO (20-29964171-7), 13) FLORIANI CRISTIAN NICOLAS (20-33730934-9), 14) TOBARES CRISTIAN RUBEN (20-36792941-4), 15) TABARI RICARDO EMANUEL (20-37491084-2), 16) CARNERO TORRES FEDERICO DAVID (20-39070168-4), 17) PELOC FEDERICO AXEL (20-39303194-9), 18) FLORIANI ENZO FERNANDO (20-39368955-3), 19) ALUM WALTER DANIEL (20-39497805-2), 20) ROMANÍUK JOEL ALEJANDRO (20-40183575-0), 21) ALMARAZ DIAZ FRANCO EXEQUIEL (20-40662583-5), 22) ORTIZ LEANDRO SEBASTIAN (20-40970279-2), 23) MAMONDEZ NAHUEL EZEQUIEL (20-41680556-4), 24) OLIVIERI BRIZUELA DAMIAN GABRIEL (20-42022092-9), 25) TEVES AGUSTIN OMAR (20-42255714-9), 26) RODRIGUEZ NAZARENO EZEQUIEL (20-45265363-0), 27) NAZETTA ELIZABETH VALERIA (23-25268563-4), 28) GARRO ANA ROMINA DEL VALLE (23-31310452-4), 29) DIAZ RUTH NOEMI (23-31558507-4), 30) CARRERAS RITA CARINA (23-32979626-4), 31) GOMEZ MARIA BELEN (23-39303151-4), 32) PONCE EMILSE GABRIELA (23-40333267-4), 33) MORENO BRESCIANI TOMAS AGUSTIN (24-41809973-5), 34) FERREYRA SILVIA IRENE (27-13962297-4), 35) MONTENEGRO RAQUEL ALEJANDRA (27-23577900-0), 36) CRUZ ANDREA EUGENIA (27-25363015-4), 37) CRUZ PATRICIA EUGENIA (27-25363016-2), 38) ZAPATA SILVIA LAURA (27-26313296-9), 39) GOMEZ ROSANA ANDREA (27-26482677-8), 40) MAHFOUD ADRIANA IVONNE (27-26921380-4), 41) PUCHETA MARINA SOLEDAD (27-30121002-2), 42) GRAMAJO NATALIA NOEMI (27-30168064-9), 43) VALDEZ ROMINA ALEJANDRA (27-31221245-0), 44) BORRINI CELESTE AGUEDA BEATRIZ (27-32876337-6), 45) GIMENEZ YOHANA ANDREA (27-33001751-7), 46) RIVAROLA

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

BARBARA CECILIA (27-33371647-5), 47) VIEYRA FERREYRA NATALIA (27-33414394-0), 48) RODRIGUEZ FLAVIA LISETTE (27-34246516-7), 49) BORDON LORENA ELISABET (27-34602738-5), 50) CORTEZ EUGENIA MARILINA (27-35099932- 4), 51) GARRO SANCHEZ CAMILA EUGENIA (27-36220006-2), 52) CONGUI INGRID MELANIA (27-37094463-1), 53) ORTIZ DAIANA SOLEDAD (27-37435036-1), 54) GRAMAJO ROMINA VANESA (27-37574252-2), 55) QUINTERO CLAUDIA ADRIANA (27-39022297-7), 56) LOPEZ GALLARDO CAMILA GISEL (27-39620569-1), 57) LUJAN TAMARA BELEN (27-40504799- 9), 58) MARTINEZ VERONICA LOURDES (27-40684794-8), 59) LERDA LUCIA (27-40905754-9), 60) TMIV S.R.L. (30-71155386-6), 61) KONAFE S.A. (30- 71213220-1), 62) NADIA DE LOS ANGELES TABORDA Y CARLOS GASTON TABORDA SH (30-71217626-8), 63) ADONAICE S.R.L. (30-71546668-2), 64) METALURGICA EL AGUILA S.R.L. (30-71602996-0), 65) CORRALON Y FERRETERA INDUSTRIAL EL CORDOBES S.A.S (30-71604097-2), 66) ALUMIN S.A.S (30-71606114-7), 67) FORESTAL MEDITERRANEA S.A.S. (30- 71623166-2), 68) VLD S.A.S. (30-71625563-4), 69) NICAL S.A.S. (30-71641890- 8), 70) FROSAN S.A.S. (30-71642596-3), 71) BRACIE S.A.S. (30-71642650-1), 72) GENERACION S.A.S. (30-71649970-3), 73) ATENEA LOGISTICA S.A.S. (30-71650943-1), 74) SERVICIOS ESENCIALES S.A.S. (30-71654547-0), 75) GTM SUR S.A.S. (30-71654586-1), 76) CONSTRU MAX S.A.S. (30-71658489-1), 77) WUELAS S.A.S. (30-71659834-5), 78) CIVILCOM S.A.S. (30-71662817-1), 79) GRUPO TMIV S.A.S. (30-71672575-4) y 80) ROINAG S.A.S. (30-71681905- 8).

Para la creación de las “usinas” o el uso de las “usinas mixtas”, DIEGO ALBERTO VIEYRA FERREYRA, en algunos casos, se contactaría directamente con las personas utilizadas para emitir facturación apócrifa obteniendo su CUIT y clave fiscal mediante engaños (como LEONARDO





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

GUSTAVO MOYANO) o promesas de recibir algún tipo de retribución dineraria.

En otros casos, la información de las personas físicas utilizadas para la emisión de facturas apócrifas sería obtenida a través de intermediarios como RUTH NOEMI DIAZ (quien habría aportado el CUIT y la clave fiscal de ANA ROMINA DEL VALLE GARRO, ROMINA ALEJANDRA VALDEZ y MATIAS EMANUEL CHILESKI, entre otros), MARIA BELEN GOMEZ o DAMIAN GABRIEL OLIVIERI BRIZUELA (quienes habrían aportado el CUIT y la clave fiscal de JOHANA GIMENEZ, RUBEN ESTEBAN ARAOZ, GUSTAVO ALEJANDRO RIVAROLA, AGUSTIN OMAR TEVEZ, TOMAS AGUSTIN MORENO BRESCIANI, FEDERICO DAVID CARNERO TORRES y NAHUEL EZEQUIEL MAMONDEZ, entre otros).

De la misma manera, utilizando dicha información habrían creado o utilizado personas jurídicas ya existentes, sin capacidad económica, para la emisión de facturación apócrifa. A tales fines, y sin perjuicio de que con posterioridad se detecten otras sociedades utilizadas de la misma manera, habrían operado con WUELAS S.A.S., GRUPO TMIV S.A.S., GENERACION S.A.S., SUCESION DE OLIVIERI CARLOS ALBERTO, NADIA DE LOS ANGELES TABORDA Y CARLOS GASTON TABORDA SH, CIVILCOM S.A.S., CONSTRU MAX S.A.S., GENERACION S.A.S., GTM SUR S.A.S. En tal sentido, WUELAS S.A.S. – creada el 4 de septiembre de 2019 – habría sido adquirida por RUTH NOEMI DIAZ (no obstante ser su Administrador MATIAS EMANUEL CHILESKI y Administrador Suplente FRANCO RAFAEL ZAPATA) y luego utilizada por DIEGO ALBERTO VIEYRA FERREYRA (representante de clave fiscal de la sociedad) y NATALIA SOLEDAD VIEYRA FERREYRA para emitir facturas electrónicas apócrifas. GRUPO TMIV S.A.S habría sido creada el 12 de diciembre de 2019 por DIEGO ALBERTO VIEYRA FERREYRA (representante de clave fiscal del

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

Administrador de la sociedad) de común acuerdo con JORGE DANIEL CUEVAS (Firmante de cheques de la sociedad - apoderado y también representante de clave fiscal del Administrador de la sociedad) para la emisión de facturas apócrifas, poniendo como Administrador a RUBEN ESTEBAN ARAOZ (20-28480994-8) y Administrador Suplente a GUSTAVO ALEJANDRO RIVAROLA (20-30941163-4) (cuyos datos habrían sido obtenidos y aportados por MARIA BELEN GOMEZ). GENERACION S.A.S. integrada por AGUSTIN OMAR TEVEZ - Administrador - y DAMIAN GABRIEL OLIVIERI BRIZUELA - Administrador Suplente - tendría como representante de clave fiscal a DIEGO ALBERTO VIEYRA FERREYRA. SUCESION DE OLIVIERI CARLOS ALBERTO de la cual serían representantes de clave fiscal tanto DAMIAN GABRIEL OLIVIERI BRIZUELA como DIEGO ALBERTO VIEYRA FERREYRA. NADIA DE LOS ANGELES TABORDA Y CARLOS GASTON TABORDA SH cuyos datos habrían sido obtenidos de NADIA DE LOS ANGELES TABORDA y aportados por RUTH NOEMI DIAZ para que DIEGO ALBERTO VIEYRA FERREYRA - representante de clave fiscal - y NATALIA SOLEDAD VIEYRA FERREYRA emitieran facturas electrónicas apócrifas a nombre de la sociedad. CIVILCOM S.A.S. cuyas autoridades serían CELESTE AGUEDA BEATRIZ BORRINI - Administradora - y FEDERICO DAVID CARNERO TORRES - Administrador Suplente -, ambos identificados como contribuyentes sin capacidad económica para emitir la facturación detectada a su nombre y a nombre de la sociedad, la que en definitiva habría sido producida por DIEGO ALBERTO VIEYRA FERREYRA y NATALIA SOLEDAD VIEYRA FERREYRA - representantes de clave fiscal de la sociedad -. CONSTRU MAX S.A.S. cuyas autoridades serían MARCELO FERNANDO ALONSO - Administrador - y ROMINA VANESA GRAMAJO - Administrador Suplente -, ambos identificados como contribuyentes sin capacidad económica

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

para emitir la facturación detectada a su nombre y a nombre de la sociedad, la que en definitiva habría sido producida por DIEGO ALBERTO VIEYRA FERREYRA - representante de clave fiscal de la sociedad - y NATALIA SOLEDAD VIEYRA FERREYRA. GTM SUR S.A.S. cuyas autoridades serían DIEGO ALEJANDRO COMBINA - Administrador Suplente - y RAQUEL ALEJANDRA MONTENEGRO - Administradora -, ambos identificados como contribuyentes sin capacidad económica para emitir la facturación detectada a su nombre y a nombre de la sociedad, la que en definitiva habría sido producida por DIEGO ALBERTO VIEYRA FERREYRA - representante de clave fiscal de la sociedad - y NATALIA SOLEDAD VIEYRA FERREYRA.

Por otro lado, DIEGO ALBERTO VIEYRA FERREYRA, NATALIA SOLEDAD VIEYRA FERREYRA, RUTH NOEMI DIAZ, MARIA BELEN GOMEZ y DAMIAN GABRIEL OLIVIERI BRIZUELA habrían utilizado o prestado también sus propios números de CUIT y claves fiscales para emitir facturas apócrifas a su nombre o a nombre de sociedades que integrarían creadas a tal fin, como ROINAG S.A.S., CORRALON Y FERRETERA INDUSTRIAL EL CORDOBES S.A.S., FORESTAL MEDITERRANEA S.A.S., FROSAN S.A.S., BRACIE S.A.S. y ATENEA LOGISTICA S.A.S.

De entre dichas personas jurídicas, ROINAG S.A.S. habría sido creada el 4 de marzo de 2020 e integrada por RUTH NOEMI DIAZ - como Administradora Suplente - y por ROMINA ALEJANDRA VALDEZ - como Administradora -, siendo DIEGO ALBERTO VIEYRA FERREYRA el representante de clave fiscal de la sociedad. CORRALON Y FERRETERA INDUSTRIAL EL CORDOBES S.A.S. habría sido creada el 23 de mayo de 2018 e integrada por CLAUDIO JAVIER PRIMO - como Administrador - y por MAURICIO ANDRES PIZZI - como Administrador Suplente -; habría sido utilizada para emitir facturas electrónicas

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

apócrifas por parte de LUCAS FERNANDO ZOPETTO, desde el domicilio de Bv. Roque Sáenz Peña 2425 de la ciudad de San Francisco de esta provincia, donde funciona el Estudio Contable "AUSTRAL". FORESTAL MEDITERRANEA S.A.S. habría sido creada el 4 de octubre de 2018 e integrada por RODOLFO LUIS TAPIERO. FROSAN S.A.S. habría sido creada el 11 de abril de 2019 e integrada por RODOLFO LUIS TAPIERO. BRACIE S.A.S. habría sido creada también el 11 de abril de 2019 e integrada por RODOLFO LUIS TAPIERO siendo DIEGO ALBERTO VIEYRA FERREYRA el representante de clave fiscal de la sociedad. ATENEA LOGISTICA S.A.S. habría sido creada el 1 de julio de 2019 e integrada por DIEGO ALEJANDRO COMBINA - como Administrador - y RODOLFO LUIS TAPIERO - como Administrador Suplente -, siendo DIEGO ALBERTO VIEYRA FERREYRA el representante de clave fiscal de la sociedad.

Asimismo, la organización se habría valido de otras sociedades integradas por socios ajenos a la organización o que no se encontrarían aún identificados como partícipes, "usinas" o "usinas mixtas" pero que guardan relación con los imputados. En estas condiciones se encontrarían: TMIV S.R.L., la que habría sido creada el 16 de septiembre de 2008, su socio gerente sería JORGE ADRIAN GUZMAN, no obstante, DIEGO ALBERTO VIEYRA FERREYRA - representante de clave fiscal de la sociedad - y NATALIA SOLEDAD VIEYRA FERREYRA la habrían utilizado para emitir facturas apócrifas. KONAFE S.A., la que habría sido creada el 23 de noviembre de 2011, y siendo DIEGO ALBERTO VIEYRA FERREYRA representante de clave fiscal de la sociedad la habría utilizado para emitir facturas electrónicas apócrifas. ADONAICE S.R.L., la que habría sido creada el 15 de septiembre de 2016 e integrada por ARIELA ANALIA AGUIRRE y VANESA SILVANA AGUIRRE, no obstante, siendo

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

DIEGO ALBERTO VIEYRA FERREYRA su representante de clave fiscal la habría utilizado para emitir facturas electrónicas apócrifas a nombre de la sociedad. VLD S.A.S., creada el 26 de octubre de 2018 e integrada por MARTIN ARIEL VERCELLI (Administrador) y LUCAS DAVID VILLAREAL (Administrador Suplente), siendo DIEGO ALBERTO VIEYRA FERREYRA representante de clave fiscal, la habría utilizado para emitir facturas electrónicas apócrifas a nombre de la sociedad. METALURGICA EL AGUILA S.R.L., creada el 12 de diciembre de 2017 e integrada por JORGE ADRIAN GUZMAN - socio gerente - y JORGE ANTONIO LUCERO, siendo DIEGO ALBERTO VIEYRA FERREYRA representante de clave fiscal, la habría utilizado para emitir facturas electrónicas apócrifas a nombre de la sociedad. ALUMIN S.A.S., creada el 6 de junio de 2018 e integrada por ALONSO CUBRIA (Administrador) y ALEJANDRO JUAN CUBRIA (Administrador Suplente), LUCAS FERNANDO ZOPETTO habría utilizado el CUIT y clave fiscal de ALONSO CUBRIA para emitir facturas electrónicas apócrifas a nombre de la sociedad. NICAL S.A.S., creada el 9 de abril de 2019 e integrada por NICOLAS ALEJANDRO CUBRIA (Administrador) y ALONSO CUBRIA (Administrador Suplente), LUCAS FERNANDO ZOPETTO habría utilizado el CUIT y clave fiscal de NICOLAS ALEJANDRO CUBRIA para emitir facturas electrónicas apócrifas a nombre de la sociedad. SERVICIOS ESENCIALES S.A.S, creada el 17 de julio de 2019 e integrada por DAIANA SOLEDAD ORTIZ (Administradora) y CRISTIAN NICOLAS FLORIANI (Administrador Suplente), siendo DIEGO ALBERTO VIEYRA FERREYRA representante de clave fiscal, habría utilizado la sociedad para emitir facturas electrónicas apócrifas.

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

A partir de todas las usinas individualizadas, entre 1/2018 y 4/2020, se habrían emitido 14.555 facturas electrónicas apócrifas por un total de \$1.712.004.532 generando un crédito fiscal espurio de \$251.764.051,1.

Dicha facturación habría sido emitida desde varios domicilios entre los que se habría identificado hasta el momento, el sito en calle Veracruz 1908, B° Residencial América de esta ciudad desde el cual DIEGO ALBERTO VIEYRA FERREYRA habría emitido por lo menos 4288 facturas apócrifas (IPs 181.228.105.181, 152.168.81.172, 181.171.122.34, 152.168.81.143, 181.171.97.149 y 181.171.128.244); el ubicado en calle 12 de octubre 1449, dpto. 4 de B° Providencia de esta ciudad desde el cual NATALIA SOLEDAD VIEYRA FERREYRA - siguiendo instrucciones de DIEGO ALBERTO VIEYRA FERREYRA - habría emitido por lo menos 4.472 facturas apócrifas (IPs 186.138.202.98, 186.138.179.186, 186.138.32.143, 186.138.41.185, 186.138.83.8, 190.245.91.201, 186.138.82.158, 186.138.227.127 y 186.138.25.134); el de calle Marcelo T. de Alvear 243 de la localidad de Devoto domicilio de MAURICIO ANDRES PIZZI habría emitido 227 facturas apócrifas (IP 181.93.64.4); y el de Bv. Roque Sáenz Peña 2425 de la ciudad de San Francisco de esta provincia, donde funciona el Estudio Contable "AUSTRAL" desde el cual LUCAS FERNANDO ZOPETTO habría emitido por lo menos 90 facturas apócrifas (IP 186.137.102.18) - teniendo clientes "usuarios" en común con las "usinas" y "usinas mixtas" utilizadas por DIEGO ALBERTO VIEYRA FERREYRA y NATALIA SOLEDAD VIEYRA FERREYRA para emitir facturas (v.gr. JUAN PEDRO MARANZANA - 20106488577 -, MARCELO ALFONSO MENSA - 20202482733 -, ELSA MARIA TORANZO - 27161735901 - y VACA

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

NILDO FABIAN Y VACA LUIS ALBERTO PAULO SH - 30710625928 -).

Luego las facturas apócrifas emitidas habrían sido vendidas a los clientes de la organización (también individualizados como usuarios de facturas), en algunos casos, directamente por DIEGO ALBERTO VIEYRA FERREYRA, y en otros a través de intermediarios, de entre los cuales se pudo identificar hasta el momento a EDUARDO ENRIQUE MANSILLA para la ciudad de Córdoba y alrededores, y a MAURICIO ANDRES PIZZI, PABLO DARIO BARBIERI y RODOLFO LUIS TAPIERO para las zonas de San Francisco, Morteros, La Para, Santa Fe, Rafaela y Rosario. En todos los casos, a cambio de dichas facturas los imputados habrían percibido de los usuarios una comisión de entre el 10% y el 30% del valor correspondiente al Impuesto al Valor Agregado del monto facturado, o tratándose de facturas tipo "C" - destinadas a crear gastos ficticios para incluir en las DDJJ de Ganancias de los usuarios - un 10% del 35% del monto facturado, dependiendo de la cantidad de intermediarios en la operación, sumas que se cobrarían en efectivo o cheques.

De los más de 600 "usuarios" detectados al día de la fecha - entre los que se cuentan "clientes" de la organización y "usinas mixtas" - los 50 principales son: CORPHONE S.A. (30-1126633-6) con 193 facturas por un total de \$132.264.869, HC3 GLOBAL RESEARCH GROUP S.A. (30-71441104-3) con 172 facturas por un total de \$57.757.970, SOFTKEY S.A. (30-71238109-0) con 42 facturas por un total de \$50.256.383, CORDOBA LUCIANO JOSUE CHUBUT (20-41288868-6) con 12 facturas por un total de \$ 47.645.392, GHIONE MONTAJE INDUSTRIAL S.R.L. (30-71569768-4) con 158 por un total de \$35.502.086, DAVERLEY S.A. (30-70044540-9) con

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

222 facturas por un total de \$34.418.861, N.E.S.A.T. S.R.L. (30-70745723-2) con 71 facturas por un total de \$28.082.852, COREBI S.A. (30-70975945-7) con 374 por un total de \$ 26.424.320, AMX ARGENTINA S.A. (30-66328849-7) con 119 facturas por un total de \$21.255.377, CUEVAS JORGE DANIEL (20-18222742-1) con 269 facturas por un total de \$17.248.173, BORNIX S.A. (30-71610994-8) con 19 facturas por un total de \$ 16.259.947, GONZALEZ PATRICIO (20-26724212-8) con 109 facturas por un total de \$16.077.317, CIRUGIA Y ORTOPEDIA IMNOVA S.A. (30-71463677-0) con 25 facturas por un total de \$15.526.317, BONETTO LEUTERIO (20-16468953-1) con 121 facturas por un total de \$15.385.696, URBIS CARGO S.R.L. (30-71155991-0) con 138 facturas por un total de \$15.383.192, AL00 S.A. (30-71581308-0) con 20 facturas por un total de \$12.602.411, MITRE S.A. (30-70819747-1) con 175 facturas por un total de \$11.126.738, GAZZONI PEDRO LAURENTINO (20-14527160-7) con 26 facturas por un total de \$10.901.648, CESCO S.A. (30-62097211-4) con 135 facturas por un total de \$10.897.470, PROJECT SELLERS S.R.L. (30-71227579-7) con 69 facturas por un total de \$10.448.399, MASTER RED S.A. (33-70800083-9) con 48 facturas por un total de \$9.873.925, FERGUEI (30-71630947-5) con 2 facturas por un total de \$9.776.195, PALMIERI ALFREDO GUSTAVO (23- 22407468-9) con 23 facturas por un total de \$9.699.782, MUNICIPALIDAD DE SALDAN (30-99901233-3) con 34 facturas por un total de \$9.591.196, COMUNIDAD REGIONAL COLON (30-70967536-9), con 10 facturas por un total de \$9.272.802, INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR S.A.S. (30-71616133-8) con 134 facturas por un total de \$9.174.950, GATTI S.A. (30-66922034-7) con 76 facturas por un total de \$9.125.341, GRUPO ILHSA S.A. (30-65438619-2) con 44 facturas por un total de

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

\$8.724.537, GAMECOR S.R.L. (30-71194554-3) con 65 facturas por un total de \$8.421.192, FAUSTO S.R.L. (30-56173460-3) con 9 facturas por un total de \$7.879.448, R F P CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.R.L. (30-61149722-5) con 96 facturas por un total de \$7.737.422, AMERICA GIS S.R.L. (30-71211964-7) con 90 facturas por un total de \$7.561.318, TRANSPORTE DON ERNESTO S.R.L. (30-71043959-8) con 91 facturas por un total de \$7.502.160, VANZIN ALDO (20-21816061-2) con 18 facturas por un total de \$7.500.433, TECNOLOGIA EN PLASTICOS S.A. (30-71569784-6) con 20 facturas por un total de \$7.416.393, MEALS SOJA S.A. (33-71122286-9) con 9 facturas por un total de \$7.087.272, PROYECTO 9 S.R.L. (30-71466476-6) con 55 facturas por un total de \$7.014.410, VIOTTI VICTOR MARTIN (23-13422724-9) con 42 facturas por un total de \$6.908.215, PUCHETA MARINA SOLEDAD (27-30121002-2) con 1 factura por un total de \$6.816.987, ROINAG S.A.S. (30-71681905-8) con 20 facturas por un total de \$6.809.656, FRAIRE CELESTINO (20-06408538-8) con 26 facturas por un total de \$6.742.945, PREMESUD S.A. (30-71163165-4) con 14 facturas por un total de \$6.606.963, CERMINATO DANIEL ALBERTO (20-27003796-9) con 33 facturas por un total de \$6.603.135, VERDINI MARIANA SOLEDAD (23- 28271524-4) con 10 facturas por un total de \$6.530.173, MALLIA JULIO CESAR (20-14991665-3) con 12 facturas por un total de \$6.368.748, ACTION SERVICES S.A. (30-71501046-8) con 18 facturas por un total de \$6.366.890, ALTO COMAHUE S.R.L. (30-71472279-0) con 19 facturas por un total de \$6.338.099, CIVILCOM S.A.S. (30-71662817-1) con 11 facturas por un total de \$6.184.383, VICTOR JOSE Y JUAN MANUEL ARMANDO (30-71649694-1) con 30 facturas por un total de \$6.184.239, y SERVICIOS INTEGRALES CINFRAL S.R.L.

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

(33- 71237437-9) con 29 facturas por un total de \$6.136.151 (fs. 1342/1343 del Expte. COIRON 25504/2019 agregado por cuerda).

En definitiva, la asociación habría sido creada para cometer diversos delitos de tinte económico-financiero, dedicándose a la obtención de claves fiscales de diversos contribuyentes para la emisión de facturas falsas a su nombre, a la posterior alteración dolosa de los registros fiscales generados para ello y finalmente a la colaboración en la evasión de impuestos y/o generación de gastos ficticios por parte de los usuarios - clientes de la organización.

Así, de su actividad se habría derivado en principio, un doble perjuicio, por un lado para el fisco como consecuencia de la evasión de impuestos presuntamente cometida por sus "clientes", y por otro para algunas "víctimas" de la organización que habrían perdido el control de sus claves fiscales, visto alterados sus registros ante la AFIP DGI y en muchos casos sujetos a fiscalizaciones y sanciones administrativas con consecuencias económicas y operativas para el contribuyente - incorporación a la base APOC del fisco, suspensión o bloqueo del CUIT".

Luego, el Ministerio Público Fiscal formuló una nueva promoción de acción penal mediante la ampliación del requerimiento de instrucción a fs. 4418/4420, por el cual al hecho arriba descripto se agrega: "En virtud del resultado de los allanamientos ordenados; de la información vertida en las declaraciones indagatorias registradas en esta causa y de los últimos informes aportados por el personal comisionado de la AFIP DGI, cabe incluir como coautor del hecho descripto como Primero, a

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

Cristian Debarre. El nombrado habría sido el encargado de solicitar la confección de la facturación falsa emitida por la asociación ilícita, fijando los montos y descripciones que debían ser incluidos en la misma, y además de ello, se encargaba de descontar los cheques obtenidos como retorno de la facturación así emitida. Así, según surge de los manuscritos secuestrados en el allanamiento, Cristian Debarre habría sido la persona encargada de determinar cómo se repartiría el provecho del IVA facturado por erogaciones de Corphone SA. Además, de dicha prueba surge que él era la fuente originaria de mensualidades dinerarias que habría pagado a otro director -que nunca trabajó en Corphone-".

Finalmente, el titular de la acción penal amplió la imputación incluyendo a Sebastián Toranzo como presunto responsable del hecho nominado primero. Así, destacó que: "en virtud del resultado de los allanamientos ordenados; de la información vertida en las declaraciones indagatorias registradas en esta causa y de los últimos informes aportados por el personal comisionado de la AFIP DGI, cabe incluir como coautor del hecho descripto como Primero en el requerimiento de instrucción de fecha 23 de agosto de 2020 a **Sebastián Toranzo**. El nombrado habría sido el encargado de solicitar la confección de la facturación falsa emitida por la asociación ilícita, fijando los montos y descripciones, rubro y en ocasiones nombre de los proveedores a utilizar que debían ser incluidos en la misma, y además de ello, se encargaba de entregar y vender la facturación apócrifa a las firmas Urbis Cargo SRL, Softkey SA, HC3 Global Research Group SA, Bornix SA, entre otras. **Toranzo** en virtud de su relación con Diego Vieyra Ferreyra, se habría encargado de receptar

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

facturación y repartirla por Whatsapp y mediante el mail sebastiantoranzo@hotmail.com. Además, se habría comunicado con intermediarios y vendedores de facturación apócrifa en Buenos Aires y Neuquén, y encargado de que ciertos proveedores de facturación apócrifa firmen contratos de prestación de servicios ante escribana pública."

a.1. Situación procesal de Martín José Dus respecto de la asociación ilícita fiscal:

En lo atinente a la responsabilidad penal del imputado Martín José Dus cuya defensa técnica ha apelado su procesamiento como miembro de la asociación ilícita en cuestión, debo señalar que adhiero, en términos generales, al criterio y fundamentos expuestos por el Instructor para decidir en favor del procesamiento dispuesto, argumentos a los que me remito y doy aquí por reproducidos (conf. art. 455 CPPN, texto según Ley 26.374 -a contrario sensu-).

En efecto, la apreciación prudencial de las circunstancias expuestas en autos por el Instructor conduce al rechazo de los agravios deducidos por la defensa y a la confirmación, en este punto, del auto de procesamiento apelado.

Los extremos que surgen de los elementos de convicción arrimados al proceso, particularmente la prueba informativa, documental, pericial y testimonial, como el contexto general de los sucesos, aspectos todos estos debidamente plasmados en el auto bajo examen, permiten tener por acreditado, con el grado de probabilidad exigido en la instancia, la existencia del accionar ilícito enrostrado al imputado y su participación responsable, conforme las calificaciones jurídicas endilgadas.

Valoro que los argumentos defensivos expuestos tanto en los respectivos actos de defensa material como en el





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

recurso deducido, sólo se presentan como meros intentos de colocar al encartado en mejor posición frente al proceso y, a la luz de los demás elementos probatorios existentes, no logran desmerecer los actos procesales cumplidos ni conmover el mérito convictivo existente y que habilita a sostener la responsabilidad penal del imputado Dus por su participación dolosa en el accionar objeto de imputación.

En este sentido, respecto de la errónea valoración de la prueba, esto es, la inobservancia de las reglas de la sana crítica racional para sostener el estado intelectual respecto de la imputación, debo decir que el Juez Instructor ha analizado las evidencias de manera tal que sus conclusiones se presentan como una derivación razonada del derecho vigente. No obstante, realizaré algunas consideraciones sobre la presunta intervención y responsabilidad penal del imputado Marín José Dus como miembro de la asociación ilícita fiscal investigada.

Recapitulando, la defensa técnica sostuvo en su embate impugnativo que su asistido no tuvo la intención de hacer aportes a la organización criminal, sino sólo de participar en hechos específicos y determinados para obtener algún lucro o rédito aislado. A su criterio, ello estaría demostrado por el hecho de que, pese a su desvinculación posterior, la asociación habría continuado operando y, por otro lado, por su falta de enriquecimiento patrimonial durante el período en el cual desarrolló tareas contables relacionadas a los hechos investigados.

Subsidiariamente, la defensa consideró que su intervención en el hecho debe reputarse en calidad de partícipe secundario, al haber actuado como un mero ejecutor de órdenes, motivo por el cual solicita el cambio de calificación legal (conf. art. 46 C.P.).

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

Ahora bien, cabe recordar que la acción prevista en el tipo penal en cuestión consiste en tomar parte en una asociación o banda. Según la opinión que se refleja en parte de la doctrina y jurisprudencia argentina, para la punibilidad de la conducta es suficiente con el mero "asociarse", de tal modo que, fuera de la existencia del pacto, no sería necesaria ninguna actividad exterior.

La existencia del grupo tiene por base un acuerdo entre sus miembros o "pacto", que no requiere formalidad alguna y que puede, asimismo, ser tácito, espontáneo. Es suficiente con que de la conducta total del autor se derive que él sujeta su voluntad a la del grupo, y de ese modo, se inserta en la organización. El carácter de miembro, por lo tanto, puede derivar de la propia realización de actividades en común.

Asimismo, no se requiere de una declaración de ingreso formal a la asociación, siendo necesario que haya existido, al menos, alguna exteriorización de la conducta de sus integrantes que permita reconocerse entre sí como pertenecientes a un conjunto que comparte objetivos comunes, esto es, que la asociación se forma para cometer delitos, si bien no hace falta que exista trato personal entre los miembros.

A diferencia de lo sugerido por el apelante, para calificar la conducta como la de miembro de la asociación no es necesario que su ingreso se produzca desde el primer momento de la conformación, ni que se verifique su permanencia hasta la disolución; pues lo que revela tal carácter es la manifestación de la conducta de afiliación, cohesión y ejecución del plan común con ánimo asociativo.

Del mismo modo, el enriquecimiento o no de sus miembros tampoco resulta un parámetro determinante para





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

juzgar los términos de su intervención personal en el hecho, sin perjuicio de que tal extremo pueda evaluarse como móvil interno, sin descartar la existencia de otros diversos.

Cabe señalar también, por experiencia fenomenológica y conocimiento general, que no todos los miembros de una organización criminal reciben la totalidad de las ganancias o bien en la misma proporción. Además, debe aclararse que esta circunstancia se encuentra por fuera de los márgenes de punición de esta figura en particular, la cual castiga la reunión de personas para cometer delitos, como especial modalidad de actos preparatorios, por su peligrosidad, excediendo a este análisis el logro o no de las finalidades delictivas propuestas y el rédito económico que ellas pudieran representar.

Por otra parte, desde el punto de vista del tipo subjetivo, el conocimiento de los elementos del tipo objetivo supone que el autor conoce que su conducta realiza un aporte a un grupo formado por al menos dos miembros más, cuyo objetivo es la comisión de delitos como objetivo principal.

Como se dijo párrafos atrás, no es necesario que se conozca la identidad de los otros integrantes, sino sólo su existencia y la naturaleza del pacto que los vincula. Tampoco deben conocerse concretamente los delitos planteados o cometidos por otros miembros. El error de prohibición sobre la punibilidad de los fines de la asociación o bien, el desconocimiento de la actividad de la asociación excluye el dolo, si bien es suficiente el dolo eventual (ZIFFER, Patricia S., "El delito de asociación ilícita", Ed. Ad. Hoc, págs. 67/82).

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

En definitiva, en caso de acreditarse la intervención personal del imputado en el hecho, deberá establecerse qué carácter puede atribuirse a su conducta. En este sentido, resulta menester señalar que, desde lo conceptual y en abstracto, considero admisible en la asociación ilícita la participación o complicidad, tanto secundaria como necesaria.

Así lo he sostenido en los autos "SERI", al señalar que *"... resulta factible, a mi juicio, la punibilidad de un tercero que sin formar parte de la organización o asociación compuesta por tres o más personas, colabora a título de partícipe en los términos de los arts. 45 y 46 del Cód. Penal. En efecto, Fabián Giles y Vanesa Romina Moyano, respecto de su intervención en las maniobras delictivas detalladas y prueba acumulada, entiendo en igual sentido que su complicidad ha respondido a una ayuda o auxilio por actos materiales, sin la cual el delito no habría podido cometerse, de la manera que se cometió, de acuerdo al plan delictivo que habrían tenido en miras los integrantes de la asociación ilícita que se investiga"* (v. voto del suscripto en "AVERIGUACION EVASION IMPOSITIVA", Expte. N° 273/2008 del registro de este Tribunal, L° 296 F° 90, rta. el 24 de septiembre de 2008).

Para dar razón de ello, considero apropiado citar un fragmento del fallo "Amengual" dictado por la Sala I de la CNCP -criterio que en lo pertinente hago propio-, en cuanto se sostuvo que: *"... toda persona que integre la organización en calidad de miembro será alcanzado por este tipo penal, pero para ser considerado "miembro" de la asociación, es requisito indispensable comprobar su ánimo corporativo, cohesivo y excluyente de integrar una asociación. Repárese en que, de lo contrario, se dejaría*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

*sin efecto el artículo 210 bis, el cual castiga a aquellos que, sin tomar parte, cooperen o ayuden a la formación o mantenimiento de la asociación, pero sin integrarla. Aunque la figura no requiera formalidades para ser miembro de una asociación (ni actos escritos ni manifestaciones expresas al respecto), es evidente que se debe tratar de una verdadera afiliación. **De ahí que el sujeto extraño a la asociación o a la banda que tan sólo apoye o asista a ella**, ya sea facilitando un lugar de reunión disimulando, fabricando por encargo elementos necesario para el delito, concediendo el uso de una cuenta corriente bancaria o proveyendo documentos de identidad falsos, etcétera, **no será punible a título de asociado sino como partícipe del delito de asociación ilícita (...)** Ser miembro de la asociación implica el conocimiento de ello, porque la exigencia de tomar parte (art. 210, Cód. Penal) se asienta en el ánimo corporativo (dolo específico-animus socii)...'* el delito de asociación ilícita queda consumado a partir del momento en que todos los integrantes han manifestado de alguna forma su voluntad de formar esa asociación y de llevar a cabo el objetivo principal de brindarse la cooperación necesaria para cometer delitos (...). De la misma manera en que cualquier auxiliador de dos sujetos asociados para cometer delitos, que no sabe del pacto existente entre sus auxiliados, no es punible como asociado por faltar su voluntad en este sentido, y como consecuencia, ninguno de ese grupo de tres cometió el delito del art 210... (ver Vera Barros, Oscar Tomás, Asociación ilícita (art. 210, Cód. Penal) Algunas consideraciones', en Nuevas formulaciones en las ciencias penales, Lerner, Córdoba 2001, ps. 593 a 618). En síntesis, entendemos que 'tomar parte', ser miembro o

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

constituir una asociación destinada a cometer delitos, exige como presupuesto un acuerdo previo entre sus miembros para constituir la o, si ya estuviere formada, la voluntad de asociarse a ella para prestarse mutuamente colaboración en la empresa delictiva. El delito requiere voluntades comunes hacia una empresa común de cierta duración, de cierta continuidad en el quehacer delictivo, indispensable para cumplir con los objetivos que sus integrantes se impusieron” (del voto del juez Riggi en autos: “AMENGUAL, Miguel Ángel y otros s/recurso de casación”, Causa N° 4827 Sala III de la CNCP, rta. el 16.06.2004; el destacado me pertenece).

Del mismo modo, se ha sostenido la comprensión de que “(...) el umbral mínimo de contribución participativa penalmente relevante es reconocible en la manifestación de empeño con la que el individuo pone sus energías a disposición de la organización criminal, ampliando su potencialidad operativa...” (ver sentencia del 23/10/99 de la Sección 4 -Sección Penal- del Tribunal Superior de Justicia de Palermo, Italia, en el caso “Giulio Andreotti”, en www.ansa.it; www.radioradicawle.it)” (extracto citado por Fernando Díaz Cantón en “Jurisprudencia de Casación Penal” -participación necesaria por fuera de la asociación ilícita-, Dir. Patricia S. Ziffer, 1ª ed., Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 2011, V. 4, págs. 32 y 33).

De este modo, quien presta un aporte a la asociación ilícita “desde fuera” no es un miembro sino un partícipe, y si ese aporte es necesario no cabe sino considerarlo como tal. En efecto, “la referencia que se hace en el art. 210 bis a quien tomare parte, cooperare o ayuda distinguiendo de ese modo el hecho de tomar parte del de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

cooperar, no puede ser inaplicable a la figura básica del art. 210, ya que se trata de una distinción conceptual enteramente válida para ambas figuras". En este sentido, acuerdo con que "es posible la participación necesaria en el delito de asociación ilícita dado que la única diferencia estaría en el grado de importancia del aporte (en aquel caso no esencial, en este, esencial), pero esta diferencia de grados no tiene por qué borrar las fronteras entre los miembros de la asociación (coautores) y los que no lo son, por cuanto el carácter de miembro viene definido no por la esencialidad del aporte sino por su naturaleza revelador de una vocación de permanencia y affectio societatis. Es, pues, una cuestión cualitativa y no cuantitativa. De hecho, el componente subjetivo necesario de la coautoría misma como categoría dogmática es la resolución delictiva común (...). Esto es, precisamente, lo que distingue, en la asociación ilícita, a los coautores de los partícipes del delito" (Fernando Díaz Cantón, op. cit., pág. 36 y 37).

Habiendo explicitado los requerimientos típicos del delito en cuestión y delineado el hecho objeto del proceso, cabe ponderar los elementos de convicción reunidos para determinar el conocimiento que habría tenido el imputado Dus respecto de las circunstancias fácticas penalmente relevantes de la imputación.

Tradicionalmente se ha entendido que, para la prueba de los hechos psíquicos, el medio principal lo constituye la prueba de indicios "...es decir, la aplicación por parte del juez de determinadas máximas de experiencia a hechos de naturaleza objetiva previamente probados".

En el caso de la "prueba del conocimiento", la elección de un criterio teórico que permita determinar la

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

solución correcta exige analizar el contenido de las denominadas "reglas de experiencia" y, de forma más precisa, de aquéllas que pueden denominarse "reglas de experiencia sobre el conocimiento ajeno", que sirven para determinar, a partir de la concurrencia de ciertos datos externos, qué es lo que se representó una persona al momento de llevar a cabo una determinada conducta.

Sólo cuando el juez encuentre en dicha interacción una regla de experiencia de vigencia indiscutible según la cual, presupuestos ciertos datos objetivos, una persona por fuerza ha sido conocedora de determinados hechos, podrá atribuir correctamente dichos conocimientos al concreto acusado. (...) de tal modo que, cuando la conducta realizada por el sujeto se considere como forzosamente consciente desde el punto de vista de la interacción social, ésta deberá ser también la conclusión del juez (en este sentido, Ramón Ragués i Vallès, "Consideraciones sobre la prueba del dolo", Revista de Estudios de la Justicia - Nº 4 - Año 2004).

A mi criterio, reitero, los elementos de convicción colectados hasta el momento son reveladores -bajo el estándar de probabilidad requerido- de su intervención culpable como miembro de la asociación ilícita fiscal, con manifiesta voluntad asociativa y aportes concretos para su mantenimiento en el reparto organizacional y jerárquico de funciones.

Para así decidir, tengo especialmente en consideración las probanzas reunidas en la extensa y profusa investigación seguida en la causa. Entre ellas, los indicios contundentes, dirimientes y concordantes tomados por el Juez Federal instructor para acreditar el efectivo rol que revestía cada uno de los imputados de

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

autos y la actuación coordinada, con convergencia intencional para su ejecución.

En la presente investigación ha quedado demostrado, al menos con la suficiencia requerida en esta etapa procesal, que el comportamiento de Martín José Dus no se ha circunscripto a una mera conducta amparada por las reglas del ejercicio profesional, sino que ha puesto sus conocimientos técnicos al servicio del mantenimiento y finalidades de la asociación ilícita que habría integrado como miembro.

Al respecto, es cierto que la asociación ilícita *"reclama la voluntad de saberse realmente perteneciente al grupo y ser aceptado por todos los restantes"* y, de este modo, *"la actuación del profesional debe estar necesariamente encaminada a la realización de los planes criminales, en donde el dolo de su obrar no puede quedar acreditado con el conocimiento probable de que los actos ejecutados al amparo de las normas profesionales vigentes sean luego utilizados para 'completar' actos ilícitos"* (Ruetti, Germán J., "La asociación ilícita del Código Penal, los delitos tributarios y la nueva tipificación especial en la ley penal tributaria, LL, ejemplar del 15.03.04, pág. 6; citado por Marcelo A. Riquert en "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Dirección David Baigún - Eugenio Raúl Zaffaroni, pág. 518).

Asimismo, verificada la intervención del profesional en su presunta actuación dentro la organización, cabe responder si este tipo de conductas debe ser considerada como acción inocua, intercambiable o de carácter neutral y, por tanto, de ninguna relevancia jurídico penal o, por el contrario, resulta susceptible de reproche penal (sobre

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

este aspecto, v. Rusconi, Maximiliano; “Derechos fundamentales y sistema de imputación penal”; Ed. Ad Hoc, Buenos Aires 2011, pág. 77-91).

En esta categoría ingresan aquellos supuestos donde lo que se lleva a cabo es una conducta profesional adecuada al ordenamiento legal que rige su actuación y los límites de ese ejercicio profesional. Es decir, acciones que encuentran una explicación propia dentro del ámbito de regulación específico en el cual se producen (ley general de sociedades, convenio colectivo de trabajo, estatutos societarios, marcos regulatorios de las profesiones liberales, etcétera).

Planteada de esta forma la cuestión, resulta adecuado utilizar ciertas herramientas conceptuales a los fines de determinar, desde el punto de vista objetivo, qué conductas han de ser consideradas como neutrales y, en su caso, cuáles de estas han de tener relevancia desde el punto de vista jurídico penal, teniendo siempre en cuenta el ámbito de protección de la norma penal en cuestión.

Solo cabe asignar responsabilidad penal a aquellos profesionales en ciencias económicas que en el ejercicio de su actividad, en el desenvolviendo de sus distintos roles, verifiquen su participación dolosa en el hecho delictivo. En otros términos: *“... si el profesional se mantiene dentro de sus incumbencias profesionales difícilmente va a verse imputado como partícipe del delito fiscal de su cliente. Sin embargo, para eso, independientemente de que tuviera conocimiento de los planes delictivos del asesorado, es necesario que no haya adaptado su comportamiento al plan ilícito de su cliente, que no se haya solidarizado con éste haciéndolo propio, que le haya prestado el asesoramiento estándar que*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

habitualmente presta a todos sus clientes sin distinciones" (ROBIGLIO, Carolina "Participación criminal, responsabilidad profesional y ley penal tributaria", Asociación Argentina de Estudios Fiscales para las II Jornadas de Derecho penal Tributario, Bs. As., agosto de 2007).

Ahora bien, adquiere relevancia penal la conducta del profesional contable que, apartándose de la línea de neutralidad de su actuación conforme a su profesión, realice una labor diferencial. En efecto, para sostener la responsabilidad penal *"la actuación del profesional debe estar necesariamente encaminada a la realización de los planes criminales, en donde el dolo de su obrar no puede quedar acreditado con el conocimiento probable de que los actos ejecutados al amparo de las normas profesionales vigentes sean luego utilizados para "completar" actos ilícitos"* (RUETTI, Germán J., "La asociación ilícita del Código Penal, los delitos tributarios y la nueva tipificación especial en la ley penal tributaria, LL, ejemplar del 15.03.04, pág. 6; citado por Marcelo A. Riquert en "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Dirección David Baigún - Eugenio Raúl Zaffaroni, pág. 518).

Conforme el recorte de hechos atribuido al imputado y los soportes probatorios existentes, Martín José Dus habría empleado sus conocimientos profesionales en favor de la consecución de los designios criminales, en connivencia con los miembros de la organización criminal, calificándose su conducta como miembro de la asociación ilícita fiscal -hecho primero-.

Cabe aclarar que no es sólo un elemento en forma aislada lo que me persuade de su actuación dolosa

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

antijurídica, sino una serie de elementos concatenados que permiten afirmar su intervención en los hechos. En este sentido, surge de la prueba incorporada y valorada por el Instructor que el imputado, de profesión contador público, habría intervenido directamente en el reclutamiento y manipulación de contribuyentes sin capacidad económica (generado altas, bajas y/o modificaciones de sus datos registrales y presentaciones de DDJJ), para facilitar la emisión de facturas apócrifas, extremos fácticos que no fueron controvertidos o rebatidos suficientemente por el apelante.

Asimismo, en cuanto al pacto y las vinculaciones existentes, cabe resaltar que la imputada Natalia Soledad Vieyra Ferreyra (hermana del presunto "Organizador" de la asociación ilícita Diego Vieyra Ferreyra, quien habría sido la encargada de emitir la facturación apócrifa), habría consignado ante AFIP-DGI el correo electrónico de Martín José Dus, y el alta fue solicitada desde la IP 190.17.121.222 que habría utilizado Dus para emitir facturación apócrifa (conf. informe acompañado por AFIP, fs. 1374/1375). También varias de las usinas investigadas en la causa tienen establecido como correo electrónico: "cr.martindus33@gmail.com" y/o "mjdus33@gmail.com", ambos pertenecientes al imputado Dus.

En este esquema, se verificó desde el IP 190.17.121.222 antes mencionada, la realización de altas, bajas y modificaciones a condiciones fiscales de contribuyentes calificados como apócrifos. Los contribuyentes en cuestión habrían sido: Romañiuk Joel Alejandro, Zapata Silvia Laura, Congui Ingrid Melania, Villaverde Vanesa Sabrina, Criado Cristian, López Gallardo





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

Ludmila, López Gallardo Camila, López Claudio Fabián y Mayorga Daniel Exequiel.

Además, para determinarse su autoría en el hecho asociativo, se valoró que figura como contador público en las presentaciones de las DDJJ del Impuesto a las Ganancias de distintas sociedades desde las cuales se emitía facturación apócrifa y que, por cierto, lo tienen a Diego Alberto Vieyra Ferreyra -presunto organizador de la asociación ilícita fiscal- como representante de clave fiscal; a saber: Grupo TMIV S.A.S., Forestal Mediterránea S.A.S., Metalúrgica El Águila S.R.L. y Adonaice S.R.L.

Por otra parte, cabe señalar que Dus habría emitido facturación apócrifa por prestación de servicios profesionales a contribuyentes que figuran en base A-poc, entre ellos: López Gallardo Ludmila, Romañiuk Joel Alejandro y Konafe S.A.

Por último, debe mencionar que, entre los allanamientos practicados, se halló en su domicilio (calle Ingeniero López N° 1578, Córdoba), documentación vinculada con las usinas desde las cuales la asociación ilícita habría emitido la facturación apócrifa, tales como: constancias de AFIP y ART de Konafe S.A. y constancias de clave de AFIP de Natalia Soledad Vieyra Ferreyra.

Ahora bien, sin perjuicio del loable esfuerzo defensivo, la abultada prueba incriminatoria da cuenta de la probable pertenencia de Martín José Dus a la asociación ilícita fiscal, con carácter de permanencia, si se repara que desde sus IPs se habría emitido facturación apócrifa y realizado presentaciones ante AFIP-DGI, relacionadas a las usinas utilizadas por la asociación para la emisión de facturas apócrifas.

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

Dichas circunstancias son demostrativas del probable actuar doloso de Martín Dus quien habría formado parte de la asociación ilícita y aportado sus conocimientos técnicos para la consecución de las maniobras orquestadas, para lo cual actuó durante un lapso considerable, con contacto estrecho y directo con los miembros y organizadores, lo cual descarta la insinuación defensiva del supuesto desconocimiento de los designios del grupo criminal que habría integrado, como así también de que sus aportes fueran ocasionales y desde "fuera" de la asociación ilícita en cuestión.

En definitiva, desde el escenario probatorio existente puede predicarse la intervención penalmente relevante del imputado Dus, constituyendo una conducta deliberada en orden a posibilitar la concreción de la finalidad delictiva del grupo, excediendo así el riesgo que le era jurídicamente permitido como mero asesor contable.

En efecto, por las razones dadas, puede afirmarse en este estadio procesal la plena intervención de Martín José Dus, con dominio conjunto del hecho y coordinación del accionar desplegado desde el seno de asociación ilícita, con la finalidad de generar los rendimientos espurios sin ser detectados por las autoridades de control.

Por lo expuesto, corresponde confirmar la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 en cuanto dispuso el procesamiento de Martín José Dus como probable miembro de la asociación ilícita fiscal -hecho nominado primero- (conf. art. 45 del CP, art. 15, inc. c) del Régimen Penal Tributario, Ley 27.430 y art. 306 del CPPN).

a.2. Situación procesal de Cristian Debarre respecto de la asociación ilícita fiscal:

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

De conformidad a las apelaciones interpuestas por el Ministerio Público Fiscal y la querellante AFIP-DGI, debo ahora ingresar al análisis de la situación procesal del imputado Cristián Debarre en el hecho nominado primero subsumido legalmente en la figura de asociación ilícita fiscal, atribuido en carácter de autor y del cual resultase sobreseído por atipicidad (conf. art. 45 del CP, art. 15, inc. c) del Régimen Penal Tributario, Ley 27.430 y art. 336, inc. 3, del CPPN). En efecto, los apelantes discrepan con el sobreseimiento dispuesto en favor del imputado Debarre, por lo cual solicitan su revocamiento y el dictado de procesamiento en su contra.

Antes de ingresar al tratamiento de los agravios de los acusadores, considero necesario aclarar que esta Cámara Federal de Apelaciones posee suficientes aptitudes constitucionales y procesales para disponer en la Instancia el procesamiento de los imputados, lo cual fuera objetado por la señora Defensora Oficial, Dra. María Mercedes Crespi, en su informe de agravios en favor de sus asistidos, quien considera que esta Alzada carece de facultad para dictar procesamientos, conforme doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa: "DIEZ, Horacio Pedro y otro S/legajo de apelación" (Expte. CFP 1610/2015/3/1/RH1)".

Sobre esta cuestión, me expedí recientemente, más específicamente el 3 de febrero de 2022, en autos: "HERRERA" (FCB 39955/2019/CA5). Allí señalé que *"tal como he sostenido en anteriores pronunciamientos (del 28.08.2015 en autos "CAPDEVILA, Horacio..." - Expte. 45760/2014- y del 3.04.2019 en autos "JL S.A. ..." -Expte 53040004/2013/CA2-), que sin desconocer el voto mayoritario de una de las Salas del Tribunal casatorio*

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

-más precisamente de los doctores Slokar y Ledesma, Sala II-, no puede soslayarse en esta cuestión la amplia práctica de los tribunales nacionales de apelación del país en el ejercicio de la denominada “competencia positiva”, que supone el dictado de autos de procesamiento, a la luz de la valoración concreta de los casos sometidos a su revisión, sin afectación de las consabidas garantías procesales.

Frente a esta cuestión, es preciso acotar que, en consonancia con las pautas sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Casal” (causa n° 1681, 20.09.2005), la Cámara Federal de Casación Penal no ha anulado fallos de esta instancia en los que se ha procesado como consecuencia de la apelación presentada contra un sobreseimiento o falta de mérito, sino que ha considerado que la vía casatoria configura, en cambio, el cauce procesal más acorde para garantizar al imputado el derecho a recurrir ante un tribunal superior. De tal forma, dicho Tribunal ha equiparado tales autos interlocutorios a las decisiones que -según los tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional- deben ser alcanzadas por la garantía de doble instancia judicial (art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículos 8.2.h. de la Convención Americana de Derechos Humanos). La doctrina procesalista coincide en aceptar que la Cámara de Apelaciones pueda disponer por sí misma el procesamiento de un imputado, al revocar un auto de sobreseimiento o de falta de mérito. Así lo ha precisado con claridad Lino Palacio, afirmando que “siendo la finalidad de todo recurso la sustitución de la resolución impugnada por otra que satisfaga el interés de la parte que lo dedujo, no se advierte en modo alguno la

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

necesidad de norma expresa que, durante el período instructorio del proceso penal, habilite a la Cámara de Apelaciones, como tribunal superior en el orden jerárquico, para sustituir el auto de falta de mérito por el de procesamiento” (PALACIO, Lino, El auto de procesamiento dictado por la Cámara de Apelaciones y la garantía constitucional de la defensa en juicio, LA LEY, 1995-B, 599). En relación con la posibilidad de revocar un sobreseimiento y procesar al imputado, el autor ha expresado por su parte que “el dictado del auto de procesamiento por la cámara cuando media, naturalmente, recurso fiscal, no transgrede los límites de la competencia funcional de aquélla ni afecta la garantía constitucional de la defensa en juicio adecuadamente preservada por la intervención del imputado en primera instancia e incluso en el trámite del recurso” (PALACIO, Lino. Nuevamente sobre el auto de procesamiento y la garantía de doble instancia. LA LEY, 1998-C, 832).

En concordancia, Vélez Mariconde había postulado que “el auto de procesamiento puede ser dictado por la Cámara en lo Criminal...cuando revoca un auto de falta de mérito. El recurso del Ministerio Público le atribuye al tribunal de grado esa competencia, haciendo necesaria, lógicamente, una declaración opuesta a la revocada.... Queda dicho que es incorrecto el sistema (inventado por alguna cámara) de limitarse a revocar el auto de falta de mérito y devolver el expediente al juez de instrucción para que este magistrado dicte el procesamiento” (VÉLEZ MARICONDE, Derecho Procesal Penal, Tomo II, Ed. Astrea, Bs. As. p. 448).

De manera similar, Clariá Olmedo ha señalado - también en referencia al auto de falta de mérito- que “los

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

códigos modernos expresamente lo declaran apelable por el Ministerio Fiscal, con lo cual el órgano acusador puede provocar el procesamiento a dictarse por el tribunal de alzada” (CLARIÁ OLMEDO, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo IV, Buenos Aires, Ed. Rubinzal Culzoni, 2008, p. 370).

Por su parte, la jurisprudencia mayoritaria -lo que incluye la opinión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- ha aceptado la posibilidad de que el procesamiento sea dictado por la Cámara de Apelaciones, al conocer de la apelación interpuesta por la parte acusadora contra el auto de falta de mérito o de sobreseimiento (Fallos, 324:4039, “Abraham Jonte Ronaldo”, 07.12.2001, con opinión favorable del Procurador General). En efecto, el Máximo Tribunal tuvo ocasión de convalidar el criterio de la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, que había afirmado la legitimidad del dictado de un procesamiento por parte del Tribunal de Apelaciones, revocando un auto de falta de mérito que había sido recurrido por la querella. En sentido similar, con posterioridad la Corte ha referido que el recurso de apelación habilita a la Cámara de Apelaciones a reemplazar la decisión apelada por la resolución correcta, autorizándose a subsanar ella misma el defecto advertido (Fallos, 330:4454, “Cabezas Daniel”, 17.10.2007, en este caso la Cámara de Apelaciones había dispuesto la nulidad del procesamiento resuelto por el Juez y había dictado una nueva resolución de procesamiento modificando el encuadre jurídico y la valoración de los hechos).

No cabe pues considerar que ello suponga un quebrantamiento de la garantía constitucional de la defensa, ni que el auto de procesamiento dictado por el





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

órgano superior al juez de instrucción carezca de fundamento legal, en especial si se recuerda el principio general -aplicable a todos los procesos- de que la competencia de los tribunales de alzada sólo se halla limitada por las cuestiones sometidas a examen en primera instancia e incluidas en la impugnación, y no por los temas específicamente resueltos por el juez inferior.

No debe perderse de vista tampoco la importancia de que los actos procesales se cumplan en los términos y secuencias determinados por el legislador para asegurar el avance del proceso hacia el cumplimiento progresivo de su objetivo (realización del derecho de fondo), evitando la repetición y superposición de etapas y actos cumplidos (principio de preclusión). Una concepción opuesta a la habilitación de la Cámara para expedirse sobre el fondo del asunto, dictando ella misma el procesamiento del imputado atentaría precisamente contra ello, al condenar al proceso a una marcha atrás e incluso a un círculo vicioso, frente a la posibilidad de la articulación de un nuevo recurso de apelación por las partes”.

Cabe referir, además, que el criterio del suscripto resultó confirmado con fecha 4 y 6 de octubre por las Sala III y II -por mayoría- de la Cámara Federal de Casación Penal, en las causas N° FCB 71028/2018/CFC1 “CORREAS, Ana Belén s/recurso de casación” y N° FCB 8585/2020/2/CFC1 “PRESTOFELIPPO, Eduardo Miguel CFC1 s/ recurso de casación”, respectivamente.

Al respecto, en los autos “PRESTOFELIPPO”, el Dr. Carlos A. Mahiques expresó: “... cabe tener en consideración que luego de ese particular precedente, con fecha 7 de abril del año en curso, la Corte Federal dispuso desestimar la presentación formulada en el marco del

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

“Recurso de hecho deducido por la defensa en causa Delgado, Gabriel s/ infracción ley 23.737”, en un supuesto similar al de autos en el que se pretendía la revisión de un auto de procesamiento dispuesto por la Cámara de Apelaciones. Allí la Corte retomó la senda de sus anteriores precedentes en lo relativo a las decisiones cuya única consecuencia sea continuar siendo sometido a proceso criminal (Fallos: 310:195; 316:2063; 330:2631) afirmando que correspondía rechazar la queja presentada, ante la denegación de recurso extraordinario, puesto que la impugnada no era una sentencia definitiva o equiparable a tal”.

Por su parte, en los autos “CORREAS”, la Dra. Crespi reiteró ante la Casación Federal que la Cámara Federal de Córdoba sólo se encontraba habilitada para revocar el pronunciamiento del juez de primera instancia, pero no para dictar el procesamiento. Al respecto, el Tribunal casatorio sentenció: *“cabe hacer especial hincapié que sobre la competencia de la cámara de apelaciones para dictar un procesamiento cuando su inferior en grado había dispuesto un sobreseimiento o la falta de mérito para procesar o sobreseer al imputado de que se trate, es la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación quién, en el precedente “Diez” -citado con anterioridad- tácitamente terminó avalando ese proceder del ad quem. En efecto, si en el precedente citado el Alto Tribunal resolvió que esta C.F.C.P., para satisfacer la garantía del “doble conforme judicial”, necesariamente debía revisar la decisión de mérito venida en recurso, es claro que habilitó a las cámaras de apelaciones a mutar un auto de sobreseimiento o de falta por uno en el que se dispone el procesamiento, en la medida en que el tribunal de casación sería entonces el*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

llamado a garantizar una revisión judicial eficaz reclamada por la legislación y la jurisprudencia convencional" (voto del Dr. Juan Carlos Gemignani; el destacado es propio).

Zanjada dicha cuestión, estimo que la resolución de primera instancia analizó fragmentariamente, y no de manera global, los elementos probatorios agregados al expediente, lo cual conllevó a incurrir en la incorrección del dictado de sobreseimiento en su favor.

En efecto, si se repara en la conducta reprochada al imputado Cristian Debarre en el hecho intimado, conforme a la prueba reunida, se desprende a mi criterio el probable reproche como cómplice primario de la organización criminal, por su carácter necesario para el mantenimiento y funcionamiento de la asociación ilícita destinada a cometer delitos de tinte económico, mediante su financiamiento a través del descuento de cheques, empleando a tal fin su estructura y solvencia económico-financiera.

A tal convicción se arriba al valorar las pruebas conforme las reglas de la sana critica racional, de las que puede inferirse en forma semiplena que Cristian Debarre realizó aportes significativos a la organización criminal, por lo cual su conducta debe calificarse en el delito de asociación ilícita fiscal -hecho nominado primero-, en carácter de partícipe necesario (conf. art. 45 del CP).

Sobre el mérito reunido, señala el señor Fiscal General, con quien acuerdo en este punto, que el imputado Debarre mantenía trato fluido con el líder de la banda, Diego Vieyra Ferreyra, según se desprende de las comunicaciones telefónicas interceptadas.

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

Además, no solo habría sido uno de los principales clientes de las facturas apócrifas emitidas por la organización para pagar menos impuestos, sino que además habría cooperado con la asociación ilícita a partir de la estrecha relación y vínculo con su presunto organizador Diego Vieyra Ferreyra. En efecto, la empresa cuyo dominio efectivo detentaba Cristian Debarre, CORPHONE S.A., declaró más de 40 millones pesos de crédito fiscal espurio proveniente de la asociación ilícita, lo cual se condice con la comunicación fluida y permanente que mantenía con el imputado Vieyra Ferreyra.

Pero lo más importante y que el señor Juez Federal expresa en su resolución es que *"al momento de los allanamientos se encontró gran cantidad de cheques de Diego Vieyra en el domicilio sito en calle Molino de Torres, Mza 14, Lote 10, B° Country El Bosque (...) quedó demostrado con grado de probabilidad suficiente que el Sr. Cristian Debarre realizaba el descuento de algunos de los cheques adquiridos por Diego Alberto Vieyra Ferreyra, conforme la prueba documental obrante a fs. 4223 y los cheques secuestrados en el domicilio de Debarre"*.

Estas circunstancias tan elocuentes, tales como las visitas periódicas que habría realizado Vieyra Ferreyra a Debarre, los sellos de la firma Corphone S.A. hallados en poder de Vieyra Ferreyra, los cheques de Vieyra Ferreyra secuestrados en el domicilio de Debarre, el descuento de cheques presuntamente originados en las ganancias obtenidas por la asociación ilícita por la comercialización de facturas apócrifas y las distintas intercepciones de comunicaciones telefónicas obrantes en autos cuyo contenido da cuenta del trato directo,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

cotidiano y cercano, me persuaden en sentido contrario al sobreseimiento decretado.

Si bien es cierto que la confección de la facturación apócrifa, con los montos y descripción de conceptos para el empleo en la contabilidad y liquidación impositiva de la contribuyente puede considerarse parte de la propia ejecución del ardid evasor de cualquier "cliente" de la asociación ilícita fiscal, también es cierto que el presunto descuento de cheques como retorno o maniobra de monetización de las ganancias de dicha organización excede notoriamente la configuración del delito de evasión fiscal de dicha contribuyente (en este caso, Corphone S.A.), constituyendo un aporte esencial al mantenimiento y continuidad de la asociación ilícita presuntamente liderada por Diego Vieyra Ferreyra.

En efecto, el magistrado instructor señaló que la doctrina ha entendido que para formar parte de una asociación ilícita fiscal, se requiere que el individuo realice un aporte positivo a la vida de la organización, y que además, su participación haya sido tal que, si no existiera, el delito no habría podido cometerse, no obstante entendió que *"el aporte del Sr. Debarre es 'fungible', en el sentido que el Sr. Vieyra podría haber realizado el descuento de los cheques con cualquier otro prestador de dicho servicio"* (destacado en el original).

Finaliza el señor Juez de grado señalando que ***"...las conductas desplegadas por Cristian Debarre no se relacionan con la actividad desplegada por un miembro de una asociación ilícita fiscal, y no obstante el imputado pueda haber cooperado de alguna manera con la organización, su aporte no es suficiente para tenerlo por***

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

parte de dicho grupo delictivo..." (el destacado me pertenece).

Debo señalar que dicha afirmación no se corresponde con la solución procesal dada, pues si se acepta al menos como posible la cooperación del imputado con la asociación ilícita, no cabe dictar su sobreseimiento -que exige certeza en la causal en que se funde, al cerrar definitiva e irrevocablemente el proceso- sino examinar su compromiso procesal como participe primario o secundario.

Sin perjuicio de la licitud de la que pudiera gozar el aporte realizado mediante la operación de descuento de cheques con fondos propios, debe valorarse ese aporte en el contexto delictivo conocido por el imputado y su impacto en el delito en cuestión. Al respecto, no puede soslayarse que Debarre -conociendo el origen ilícito de esos fondos y la trascendencia de su aporte a la financiación de la asociación ilícita- habría proveído de liquidez y permitido la continuidad y funcionamiento de la asociación ilícita organizada por Diego Vieyra Ferreyra.

De este modo, la conducta de quien paga con cheque contra descuento por efectivo una factura apócrifa para compensar débito fiscal no puede ser considerada lícita, puesto que no solo infringe la normativa anti-lavado y las previsiones tributarias, sino en este caso se presenta como un notorio e importante aporte al sostenimiento de la asociación ilícita fiscal. En tal sentido, no cabe valorar genérica y aisladamente su comportamiento, sino en forma sistémica y global para determinar la existencia y carácter de la cooperación o contribución brindada a los miembros de la organización.

Las consultas de Diego Vieyra Ferreyra a Cristian Debarre por el cambio de cheques son reiteradas y

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

habituales, lo cual revela la necesidad de liquidez de la asociación sin la cual no podría haber seguido obteniendo ganancias por la venta de facturación apócrifa y la creación de sociedad ficticias.

En conclusión, si bien Corphone SA, mediante la intervención personal de Debarre, habría sido "cliente" de la asociación ilícita, éste último a título personal habría sido financista de la asociación ilícita, permitiendo con su aporte la continuidad de la ejecución del plan asociativo de generación de facturación apócrifa para provisión de distintos contribuyentes.

Por otro lado, respecto de la solicitud de cambio de calificación formulado por el Ministerio Público Fiscal, quien sostiene la existencia de concurso ideal entre las figuras de "asociación ilícita" prevista en el art. 210 del CP y "asociación ilícita fiscal" prevista en el art. 15, inc. c) del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430), corresponde en este caso confirmar el rechazo de la pretensión.

Al respecto, el señor Juez Federal N° 1 de Córdoba, al efectuar el juicio de subsunción legal, rechazó la posibilidad de concurso formal entre las figuras, citando el precedente de la causa "SERI" de la Sala B de esta Cámara Federal de Apelaciones.

En rigor, en aquel precedente señalé que: "... corresponde expedirme respecto a la relación jurídica que se presenta entre las figuras de asociación ilícita tributaria (art. 15, inc. c) de la ley 24.769) y la asociación ilícita del artículo 210 del Código Penal, luego de sancionada la ley 25.874 (B.O.22/01/2004). Ello así, pues conforme ha quedado fijado el hecho, podría encuadrarse el accionar investigado en ambas figuras

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

penales, al **coexistir dos tipos penales** durante el tiempo en el cual se habrían cometido los hechos. **Que dadas las características particulares de las conductas que han sido establecidas en la presente causa**, entiendo que corresponde aplicar en el caso sólo uno de los tipos legales, esto es, la asociación ilícita tributaria, figura que desplaza por **especialidad** a la asociación contenida en el ordenamiento común. En efecto, la figura prevista en la ley penal tributaria contiene todos los elementos de la asociación ilícita común, incluyendo en su descripción algunos que son específicos de la actividad vinculada con la evasión de tributos. De esta manera, la asociación ilícita común se comporta como el tipo básico o genérico que contiene ciertos requisitos que son compartidos con el tipo especial previsto en la ley penal tributaria (acuerdo de voluntades para conformar una asociación) y número mínimo de personas intervinientes (compuesta por tres o más). Siguiendo este orden, la figura de asociación ilícita tributaria se construye sobre la base de la misma conducta típica de aquel delito, agregando otros requisitos adicionales y específicos. Concretamente estas exigencias se refieren a ciertos elementos subjetivos del tipo objetivo, es decir el propósito que debe regir el emprendimiento delictivo, es decir que la asociación esté “destinada a cometer cualquiera de los delitos tipificados en la presente ley”. Conforme quedó establecido hasta el presente, con las particularidades que se analizarán en cada caso (punto 4), el designio que guió el acuerdo de voluntades fue la comisión de delitos tipificados en la ley penal tributaria n° 24.769”. De esta forma, la figura penal prevista en el artículo 15, inc. c) de la ley 24.769, absorbe por **especialidad** la figura de asociación

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

ilícita del artículo 210 del Código Penal, por contener mayor cantidad de elementos típicos y describir la conducta de manera más detallada, correspondiendo en consecuencia mantener el encuadramiento jurídico dado por el Juez de Instrucción (voto del suscripto en "SERI, Miguel Angel; GASPARINI, Diego Nazareno y otros p.ss.aa. infracc. art. 15 inc. "c" Ley 24.769", Expte. N° 106/2011, dictado el 13 de octubre de 2011).

Ahora bien, tal y como se advierte en dicho pronunciamiento no se descartó la posibilidad de concurrencia formal entre las figuras, sino que la subsunción legal de aquel hecho atendía, por cierto, a las especiales circunstancias fácticas de dicho caso, en donde se estableció que *"el designio que guió el acuerdo de voluntades fue la comisión de delitos tipificados en la ley penal tributaria n° 24.769"*.

En el caso de autos, conforme la descripción del hecho contenida en el requerimiento fiscal de instrucción inicial y sus ampliaciones, la presunta asociación ilícita habría tenido por finalidad la comisión de delitos tributarios. De hecho, el señor Fiscal de Instrucción al promover acción penal definió la plataforma fáctica en los siguientes términos: *"En fecha no determinada con exactitud, pero presumiblemente desde enero de 2018 al día de la fecha, Diego Alberto Vieyra Ferreyra, Natalia Soledad Vieyra Ferreyra, Maria Belen Gomez, Damian Gabriel Olivieri Brizuela, Jorge Daniel Cuevas, Ruth Noemi Diaz, Eduardo Enrique Mansilla, Mauricio Andres Pizzi, Pablo Dario Barbieri, Rodolfo Luis Tapiero, Lucas Fernando Zopetto y otras personas aún no identificadas, **habrían conformado y organizado, una asociación destinada a cometer, colaborar y coadyuvar en la comisión de un número***

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

indeterminado de ilícitos tributarios (...) En definitiva, la asociación habría sido creada para cometer diversos delitos de tinte económico-financiero, dedicándose a la obtención de claves fiscales de diversos contribuyentes para la emisión de facturas falsas a su nombre, a la posterior alteración dolosa de los registros fiscales generados para ello y finalmente a la colaboración en la evasión de impuestos y/o generación de gastos ficticios por parte de los usuarios - clientes de la organización (el destacado me pertenece).

En consecuencia, la pretensión de cambio de calificación del Ministerio Público Fiscal debe ser rechazada, pues no se presenta plausible desde que la finalidad que habría guiado el acuerdo de voluntades de la asociación ilícita habría sido -conforme la acusación- "cometer, colaborar y coadyuvar en la comisión de un número indeterminado de ilícitos tributarios"; por ende, se advierte la concurrencia tan solo aparente de normas debiendo aplicarse por especialidad la figura de asociación ilícita fiscal prevista en el Régimen Penal Tributario que desplaza la figura penal establecida en el art. 210 del Código Penal.

Sin embargo, si durante la investigación se modificasen los contornos fácticos de la imputación conforme a la prueba y se intimasen a los encartados otras finalidades delictivas presuntamente perseguidas por la asociación ilícita investigada, resguardando el derecho de defensa, el Ministerio Público Fiscal y las demás partes podrán proponer el encuadramiento jurídico de las conductas que estimasen corresponder, sobre las que finalmente resolverá el Juez competente.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

Finalmente, es del caso resaltar que, en los casos como el *sub examine* en los cuales la eventual modificación de la calificación legal de los hechos establecida en un auto de procesamiento no tiene incidencia concreta en otros aspectos de la situación de los imputados, el interés de su examen por medio del recurso de apelación resulta relativo, pues lo fundamental es la existencia de verosimilitud sobre la ocurrencia de ilicitud pero no la certeza sobre su calificación legal, es decir, solo que la conducta sea penalmente antijurídica (conf. art. 306 del CPPN); recuérdese que el encuadramiento jurídico recaído en este tipo de pronunciamientos no causa estado, ni condiciona un eventual cambio de calificación en oportunidad de requerir la elevación de la causa a juicio, de así corresponder.

Por todo lo expuesto, encontrándose acreditado con el grado de probabilidad exigido a esta altura del proceso los extremos objetivos y subjetivos de la imputación, corresponde **revocar el punto resolutivo 10) y dictar el procesamiento del imputado Cristian Debarre por el delito de asociación ilícita fiscal -hecho nominado primero- en carácter de partícipe necesario**, debiendo el señor Juez Instructor pronunciarse sobre la procedencia o no de medidas de coerción y demás medidas cautelares que estime por derecho corresponder, con el objeto de no vulnerar el derecho al recurso y la doble instancia judicial (conf. art. 15, inc. c) del Régimen Penal Tributario de la Ley 27.430, art. 45 del CP y art. 306 del CPPN).

b) Evasiones tributarias agravadas:

b.1. Sobreseimientos por extinción de la acción penal en aplicación de la Ley N° 27.541, modificada por Ley 27.562.

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

En primer término, debo expedirme respecto del sobreseimiento dispuesto en el punto dispositivo 14) de la resolución respecto de los coimputados Edsel Daniel Destefanis, María José Martínez Pizzichini, Paola Andrea Arévalo, María Cecilia Dolores Ribera Ardiles, Federico Carlos Dellamaggiore y Germán Daniel Destefanis, en relación al delito de evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas en relación a la contribuyente SOFTKEY S.A (30712381090) -hechos nominados 75 y 76 del requerimiento de instrucción- (art. 279 - 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "d" de la ley 27.430).

La decisión contenida en este punto fue apelada tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la querellante particular AFIP-DGI, en tanto las defensas técnicas de los imputados presentaron sus réplicas en la oportunidad prevista en el art. 454 del CPPN.

En resumen, los apelantes señalaron que causa agravio la resolución por cuanto se habría omitido considerar las exigencias previstas en el art. 10 de la Ley N° 27.541 que establece que la acción penal inherente a las obligaciones regularizadas quedará extinguida cuando se verifique su cancelación total y, además, se cumplan las demás condiciones prescriptas en dicho régimen. Dentro de dichas previsiones se encuentra, asumir "el pago de las costas y gastos causídicos" (conf. art. 9 *in fine* de la Ley 27.541).

Previo a todo, debo señalar que, con fecha 21.12.2019, se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública N° 27.541 (B.O. del 23.12.2019). Posteriormente, con fecha 26.8.2020 se sancionó la ley 27.562, la cual





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

modificó el régimen de moratoria previsto por aquella y amplió el universo de contribuyentes que podrían adherirse, permitiéndoles gozar de la extinción de la acción penal y la suspensión de las acciones penales en curso, en los casos que allí se establecen.

Ahora bien, sobre la cuestión aquí controvertida por el Ministerio Público Fiscal y la AFIP-DGI, tuve oportunidad de expedirme recientemente en autos: **"INCIDENTE DE ACOGIMIENTO AL REGIMEN PREVISTO A LA LEY 27.541 DE HERRERA CRISTIAN EDUARDO Y OTRO"** (Expte. FCB 39955/2019/12), dictado con fecha 10 de mayo de 2022.

En dicha oportunidad, sostuve que *"... la ley 27.541, modificada por la ley 27.562, dispone mediante el art. 8: "Los contribuyentes y las contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen en el presente capítulo....**Para la adhesión al presente régimen no podrán establecerse condiciones adicionales a las explícitamente estipuladas en la presente ley.** Se podrá incluir en este régimen la refinanciación de planes de pago vigentes y las deudas emergentes de planes caducos"* (el resaltado es propio).

Por su parte el art. 9 de esa normativa establece: *"Quedan incluidas en lo dispuesto en el artículo anterior las obligaciones allí previstas que se encuentren en curso*

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la presente ley modificatoria. En esos casos, el acogimiento al presente régimen tendrá como efecto el allanamiento incondicional por las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, asumiendo el responsable el pago de las costas y gastos causídicos. Asimismo, el acogimiento al régimen importará el desistimiento de todo derecho, acción o reclamo, incluso el de repetición, respecto de las obligaciones regularizadas. El allanamiento y/o, en su caso, desistimiento, podrá ser total o parcial y procederá en cualquier etapa o instancia administrativa o judicial, según corresponda. **Quedan también incluidas en el artículo anterior aquellas obligaciones** respecto de las cuales hubieran prescripto las facultades de la Administración Federal de Ingresos Públicos para determinarlas y exigir las, y **sobre las que se hubiere formulado denuncia penal tributaria o, en su caso, penal económica**, contra los contribuyentes o responsables, siempre que el requerimiento lo efectúe el deudor" (el resaltado me pertenece).

Por último, cabe mencionar lo regulado por el art. 10 del régimen citado, el cual establece: "El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y penales aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción penal respecto de los autores o las autoras, los coautores o las coautoras y los partícipes o las partícipes del presunto delito vinculado a las obligaciones respectivas, aun cuando no se hubiere efectuado la denuncia penal hasta ese momento o cualquiera

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

*sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando esta no tuviere sentencia firme. **La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen, por compensación, de contado o mediante plan de facilidades de pago producirá la extinción de la acción penal tributaria o penal aduanera, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación...***" (el resaltado es propio).

Entonces, de acuerdo con el texto de la nueva normativa, en caso de verificarse el pago total de la deuda, se extingue la acción penal. Así entonces, conforme fue resuelto por el a quo, al haberse acreditado el pago total de lo adeudado, es procedente la extinción de la acción penal seguida en su contra.

*Si bien el Ministerio Público Fiscal solicita que por analogía, por coherencia y para respetar el principio de igualdad, se aplique al caso de autos lo dispuesto en el primer párrafo del art. 9 de la ley 27.541 modificada por ley 27.562, debe señalarse que cuando esa norma prevé que para el acogimiento al régimen el responsable deberá asumir el pago de las costas y gastos causídicos, está reglando la situación de quienes regularicen obligaciones en curso de discusión administrativa o que sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial. En cambio, al tratar las condiciones de regularización de las obligaciones sobre las que se hubiere formulado denuncia penal tributaria, **sólo exige que el requerimiento lo efectúe el deudor.***

No corresponde efectuar una aplicación analógica de un requisito exigido para quienes tienen obligaciones en discusión administrativa o judicial, a aquellas obligaciones objeto de una causa penal tributaria, menos

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

aun cuando la analogía pretendida es en perjuicio de la imputada.

A más de ello, la misma ley establece que para la adhesión al régimen allí previsto no podrán establecerse condiciones adicionales a las explícitamente estipuladas. Y toda vez que la exigencia de asumir el pago de las costas y gastos causídicos no está prevista para los casos de causas penales tributarias, no corresponde su aplicación al caso de autos.

A mayor abundamiento, debo señalar que el objeto del presente proceso - en relación al hecho segundo del requerimiento de instrucción obrante en los autos principales-, es determinar la responsabilidad penal de (...) en el delito de evasión tributaria agravada que se le atribuye. **El cobro de las obligaciones supuestamente evadidas no es el objeto de esta causa y el fin último del proceso penal no es el recupero de ese dinero, sino el juzgamiento de las conductas ilícitas investigadas.**

Dicho ello, entiendo que **no puede exigirse como requisito previo para obtener el beneficio de la extinción de la acción penal el previo pago de costas y gastos que no han sido regulados en autos, sino que de manera unilateral han sido calculados e informados por AFIP.**

Además, tal como lo informó AFIP a fs. 76, el plan de facilidades de pago establecido por la ley 27.562 no incluye a los gastos causídicos dentro de los conceptos que pueden ser regularizados a través del mismo. Por otra parte, advierto que no surge del texto del art. 9 de la ley 27.562, ni de la Resolución General 4816/2020 de AFIP, que el pago de costas y gastos sea **requisito previo** (o sine qua non, como sostiene el Fiscal de Cámara) para extinguir la acción penal, sino que en caso de existir,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

deberán ser asumidos por el responsable de la obligación regularizada y deberán ser reclamados por la vía pertinente.

Por ello, si el organismo fiscal considera que existen costas y gastos pendientes de pago, deberá acudir por la vía correspondiente para su cobro. En tal sentido, en relación al cobro de honorarios y costas, el art. 18 de la Resolución General 4816/2020 establece que en caso de que no se abonaren en las formas y plazos allí previstos, se iniciarán las acciones destinadas a su cobro, pero en ningún momento se supedita la extinción de la acción penal al previo pago de ellos.

Por todo lo expuesto, los agravios relativos a la improcedencia de la extinción de la acción penal sin previa acreditación del pago de las costas y los gastos causídicos, debe ser rechazado.

En consecuencia, corresponde confirmar la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso el SOBRESEIMIENTO por extinción de la acción penal por amnistía de Edsel Daniel Destefanis, María José Martínez Pizzichini, Paola Andrea Arévalo, María Cecilia Dolores Ribera Ardiles, Federico Carlos Dellamaggiore y Germán Daniel Destefanis, en relación al delito de evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas -hechos nominados 75 y 76 del requerimiento de instrucción- (conf. art. 279 -1, 2 inc. "d" y 15 inc. "d"- de la ley 27.430; art. 336 inc. 1 del CPPN y art. 10 de la ley 27.541).

b.2. Suspensiones de la acción penal tributaria en aplicación de la Ley N° 27.541, modificada por Ley 27.562.

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

En primer término, el Ministerio Público Fiscal apeló el punto resolutivo 12) mediante el cual se dispuso la suspensión de la acción penal en relación a los imputados Sergio Gabriel Sosa, Cristian Debarre y Mario Ernesto Casco en relación al delito de evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas con respecto a la contribuyente Corphone S.A. (CUIT 30-71126633-6) (conf. art. 279- 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "d" de la ley 27.430, y art. 10 de la Ley 27.541).

En concreto, se atribuye a los arriba nombrados haber evadido, en favor de la contribuyente y mediante la utilización de facturación apócrifa, la suma total de pesos treinta y un millones trescientos treinta y un mil novecientos treinta y cuatro con ochenta centavos (\$31.331.934,80.-), correspondiente a: Impuesto al Valor Agregado -períodos fiscales 2016 a 2020-, Impuesto a las Ganancias -período fiscal 2016- e Impuestos a las Salidas No Documentadas -período fiscal 2016-, conforme los hechos nominados 73, 74, 89, 93, 94, 117 y 118 del requerimiento de instrucción.

Al momento de resolver y para decidir en favor de la suspensión de la acción penal tributaria, el señor Juez Federal N° 1 de Córdoba valoró la existencia del informe de AFIP-DGI glosado fs. 6093, en el cual se detallaban los planes de pago suscriptos por la empresa ante el ente recaudador -continentes de la totalidad de la deuda impositiva indicada por el Ministerio Público Fiscal-, y del que surgía que dichos planes se encontraban vigentes y en cumplimiento de las cuotas allí previstas.

Sin embargo, atento a que los fallos deben atender a las circunstancias existentes al momento de ser dictados,

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

aunque sean sobrevinientes a la interposición del recurso de que se trate (Fallos: 310:819; 324:3948; 325:2275; 328:3142; entre muchos otros), considero que a partir de la prueba informativa elevada a esta Alzada en virtud de la medida para mejor proveer solicitada por el suscripto, corresponde revocar la resolución en este punto y disponer la continuidad del proceso, según su estado.

En efecto, con fecha 23.09.2022 solicité que se requiera a la Administración Federal de Ingresos Públicos informe completo, con la documental del caso, sobre la vigencia o caducidad de los planes de pagos suscriptos por la contribuyente Corphone S.A. en los términos de la Ley 27.541 y sus modificatorias, por la deuda que constituye el objeto de las imputaciones en estos autos, a saber: Impuesto al Valor Agregado , Períodos fiscales 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020; Impuesto a la Ganancias, Período fiscal 2016 e Impuesto a las Salidas no Documentadas, período Fiscal 2016.

Tal requerimiento encontró basamento en la contradicción advertida entre la presentación efectuada por la defensa técnica del imputado Cristián Debarre a fs. 585/592, mediante la cual afirmó que la contribuyente Corphone S.A. viene dando cumplimiento a los planes de pago suscriptos y, por contrapartida, la querellante AFIP-DGI que en su contestación manifestó que: *"en las bases de datos de esta AFIP consta que la firma CORPHONE SA recientemente ha trasladado su domicilio fiscal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ha dejado de pagar las cuotas de todos los planes cuya suscripción motivó la suspensión de la acción penal seguida en autos contra el Sr. Debarre por los delitos de evasión cometidos en el seno de CORPHONE SA"* (fs. 599/605)

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

Ahora bien, conforme surge del informe y la planilla anexa presentada por AFIP-DGI a fs. 617/624 en contestación al requerimiento de esta Alzada, el estado actual de los planes de pagos suscriptos por Corphone S.A. es: **1.** Hecho nonagésimo tercero (93) IVA 2016: anulado. **2.** Hecho septuagésimo tercero (73) IVA 2017: anulado. **3.** Hecho nonagésimo cuarto (94): anulado. **4.** Hecho septuagésimo cuarto (74) IVA 2019: anulado. **5.** Hecho octogésimo noveno (89) IVA 2020: caduco. **6.** Hecho centésimo decimoséptimo (117) Impuesto a las Ganancias 2016: anulado. **7.** Hecho centésimo décimo octavo (118) Salidas No Documentadas 2016: anulado.

En mérito de lo expuesto, teniendo especialmente en consideración la previsión del último párrafo del artículo 10 de la Ley 27.541, la cual -en lo pertinente- prevé: *"La caducidad del plan de facilidades de pago implicará la reanudación de la acción penal tributaria (...) También importará el comienzo o la reanudación, según el caso, del cómputo de la prescripción penal tributaria..."*, corresponde revocar la resolución apelada en su punto dispositivo 12) y disponer, en consecuencia, la reanudación de la acción penal y del cómputo de la prescripción de los hechos nominados 73, 74, 89, 93, 94, 117 y 118 del requerimiento de instrucción presuntamente configurativos del delito de evasión tributaria agravada.

En otro punto, el Ministerio Público Fiscal apeló la resolución en cuanto dispuso la suspensión de la acciones penales tributarias en favor de Mauricio Andrés Pinto, Leandro Paolo Srur y Martín Alejandro Sarmiento en relación al delito de evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas con respecto a la contribuyente COREBI S.A.

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

(CUIT 30-70975945-7) (conf. art. 279 - 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "d" de la ley 27.430 y art. 10 de la ley 27.541).

Cabe señalar que se atribuye a los nombrados haber evadido en favor de la contribuyente la suma de pesos cuatro millones setenta y siete mil quinientos treinta y nueve con cuarenta y dos centavos (\$4.077.539,42.), en concepto de IVA períodos fiscales 2018 y 2019 - hechos 77 y 78 del requerimiento de instrucción de fs. 3059/3102-.

El titular de la acción penal, entre sus argumentos, reitera que no se encuentran cumplidos los requerimientos previstos en la Ley 27.541 pues no se ha integrado a los conceptos regularizados la cancelación de las costas y gastos causídicos con relación a la contribuyente. Al respecto, conforme los argumentos expuestos en el punto b.1.) de la presente a los que me remito en honor a la brevedad, corresponde rechazar la apelación intentada y confirmar la resolución en este punto.

Sin embargo, corresponde referir que los cuestionamiento genéricos respecto del origen y trazabilidad de los fondos con los cuales se efectuaron y aceptaron los pagos (parciales o totales) en el marco de la ley de regularización impositiva en cuestión, no resulta de análisis por este Tribunal en la presente apelación, no obstante, en caso de encontrar mérito suficiente deberá el Ministerio Público Fiscal promover las acciones de tipo penal que estime pertinentes y ajustadas a derecho.

Lo aquí expuesto resulta plenamente aplicable a los agravios enderezados a conmovir la decisión adoptada en los puntos resolutivos 16, 17, 18, 19 -en este caso se cuestiona la ausencia de pedido de parte para resolver en favor de la suspensión de la acción penal respecto de

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

Leuterio Carlos Bonetto, inadvirtiéndolo que los efectos de dicha ley operan de pleno derecho- y 21. Por ello, corresponde rechazar la apelación deducida por el Ministerio Público Fiscal al respecto y confirmar las suspensiones de la acción penal dispuestas en los puntos dispositivos antes mencionados.

Por último, resulta del caso recordar al Juzgado Instructor que deberá actualizar periódicamente mediante los requerimientos del caso, la información oficial respecto del estado de cumplimiento o incumplimiento de los planes de pago suscriptos en virtud de la ley bajo examen. En este sentido, es dable mencionar también que las pretensiones y documental presentada ante esta Alzada que daría cuenta del cumplimiento total de las obligaciones contraídas en virtud de los planes de pagos suscriptos y, en definitiva, la consecución de los efectos legales que prevé la ley de amnistía, deberá ser valorados y analizados por el Inferior a fin de determinar si corresponde o no el sobreseimiento en los términos previstos en el art. 10 de la Ley 27.541 y su modificatoria (conf. criterio de Sala en autos: "FAUSTINI, Hernán Gustavo s/infrac. Ley 24.769" Expte. FCB 10772/2019/CA1).

b.3. Situación procesal de Silvina María Valeria Rincón respecto de los delitos de evasión tributaria agravada:

Corresponde ingresar al análisis de la situación procesal de la imputada Rincón, habida cuenta del recurso de apelación deducido por el Ministerio Público Fiscal en contra del sobreseimiento dispuesto en su favor en orden al delito de evasión fiscal agravada -hechos nominados 73, 74, 89, 93, 94, 117 y 118 de los requerimientos de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

instrucción-, en virtud del cual solicita su revocación y el dictado de auto de falta de mérito.

Para promover su revisión, el apelante entendió que al haberse detectado documentos que sindicaban a Rincón como socia de Corphone S.A., sin perjuicio de los elementos valorados hasta el momento por el sentenciante, no se ha alcanzado certeza negativa sobre su participación en el delito atribuido.

Al respecto, sostuvo que para despejar cualquier margen de duda, resulta necesario requerir la lista de llamadas y mensajes entrantes y salientes del teléfono personal de Rincón, con mención de titulares y ubicación de antenas, en el periodo que va desde la creación de Corphone S.A. hasta la fecha de los procedimientos que motivaron la apertura de esta causa.

Del mismo modo, consideró probatoriamente necesario contar con las actuaciones notariales originales A005938940 y A005938931 para que la Dirección de Grafocrítica de la Policía Judicial de la Provincia de Córdoba pueda realizar un informe detallado del cotejo de documentos y de las firmas allí insertas.

Luego de analizar las posiciones y razones esgrimidas por las partes, a la luz de las constancias de autos, estimo que la presente investigación -respecto de la presunta responsabilidad penal de la imputada Rincón en los hechos nominados 73, 74, 89, 93, 94, 117 y 118- no se encuentra agotada y, por ello, el sobreseimiento dispuesto resulta improcedente y prematuro, debiendo ser revocado (art. 336, inc. 4º, a *contrario sensu*, del CPPN).

En primer término, debo decir que no escapa al suscripto las circunstancias del contexto socio-ambiental de la imputada Silvina Rincón mencionadas por el Juzgador

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

al resolver su situación procesal. Tampoco resultan inertes las manifestaciones de la imputada formuladas en audiencia indagatoria, en la cual afirmó su total ajenidad sobre el dominio de la empresa Corphone S.A. y con relación a los hechos imputados, más allá de su posición formal como presidente de la sociedad anónima en cuestión.

Ciertamente, el señor Juez Federal N° 1 de Córdoba consideró que *“atento las condiciones de vida y económicas de la imputada (i.e. que no percibe un sueldo significativo, que recibe asistencia estatal, que reside en una vivienda humilde, que no es propietaria bienes registrables de alto valor, entre otros) y la ausencia de documentación relacionada a la causa y a la empresa Corphone S.A. en su domicilio que la incrimine, se infiere que la Sra. Rincón no era en los hechos la presidente de la empresa Corphone S.A. y lo que es más, es una víctima más de las actividades ilícitas practicadas por la asociación ilícita y las empresas que aprovecharon el crédito fiscal fraudulentamente obtenidos”* (Sic).

Si bien se ha dicho que lo decisivo para la posición de garantía es el ejercicio material de funciones propias de una determinada esfera de competencia y no su ostentación formal (*“Derecho Penal Económico”*, dirigida por Enrique Bacigalupo, 1ª ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2004, págs. 129 y 130; el destacado me pertenece).

Sin embargo, la asunción voluntaria de la calidad requerida a modo pantalla u *“hombre de paja”* encierra un accionar facilitador de la perpetuación del delito, con el agravado de dotar de mayor efectividad al designio del autor y mayor dificultad para su individualización, constituyendo en principio un auxilio o aporte al hecho del autor especialmente grave que se encuentra dentro del





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

ámbito de responsabilidad penal como cómplice primario (conf. art. 45 del CP).

Ahora bien, no puede olvidarse que, por la naturaleza que reviste, el dictado de sobreseimiento requiere certeza sobre el acaecimiento o no de un determinado hecho o suceso histórico, para que el juzgador pueda, con la debida convicción, emitir un juicio asertivo, una afirmación y no una mera suposición o conjetura (Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, causa Nro. 14.272 - VEYGA, Daniel Santiago s/recurso de casación, entre otras).

Es decir, procede cuando al juzgador no alberga dudas acerca de la extinción de la pretensión penal o de que el hecho no se cometió o de que no encuadra en una figura legal o de que el delito no fue cometido por el imputado o de su falta de responsabilidad.

Tal necesidad se funda en que el sobreseimiento dispuesto, en caso de adquirir firmeza, entraña la extinción definitiva e irrevocable del proceso en relación al imputado en cuyo favor se dicta (art. 335 del CPPN).

Ello conlleva exigir del órgano jurisdiccional que lo disponga un estado de certeza de tal magnitud que, al decir de Clariá Olmedo, no deje duda alguna *"... acerca de la extinción del ejercicio de los poderes de acción y jurisdicción, o de la inexistencia de responsabilidad penal del imputado con respecto al cual se dicte..."* ("Tratado de Derecho Procesal Penal", Ed. EDIAR, Bs. As., 1964 T. V, p. 328).

Sin embargo, se advierte con gran justeza que *"puede ocurrir que una vez agotadas las investigaciones, el tribunal (...) no obtenga certeza para dictar el sobreseimiento, ni tampoco pueda obtener o mantener el*

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

mérito necesario para provocar la elevación de la causa a juicio. El mérito para la elevación estará ausente cuando la falta de mérito decretada a favor del imputado, o su estado de duda, se mantiene hasta el final...” (conf. Clariá Olmedo, citado por Navarro-Daray en “Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Ed. Hammurabi, 4ª edición actualizada y ampliada, T. II., Buenos Aires, año 2010, pág. 616).

Ahora bien, no obstante la carencia de precepto procesal que contemple -como causal de sobreseimiento- lo que en doctrina se conoce como *“duda insuperable”*, lo cierto es que el estado jurídico de inocencia, reconocido y tutelado constitucionalmente, reclama -en estos casos- la solución desincriminatoria, en aplicación del principio *favor rei*. Empero, vale aclarar, procede tan solo cuando no fuere razonable, objetivamente, proveer la incorporación de nuevas pruebas con virtualidad para modificar dicho estado intelectual, y su mantenimiento ponga en jaque la garantía de juzgamiento en plazo razonable a efectos de que se resuelva la situación procesal del imputado en forma definitiva (conf. arts. 18, CN; 8.1 y 8.2., CADH; y 3.c, 14.1 y 14.2, PIDCP, en función del art. 75, inc. 22, CN).

Al respecto, la Cámara Nacional de Casación Penal tiene dicho que *“el sobreseimiento definitivo procede cuando al tribunal no le queda duda... (pero que) cuando el fallo contiene una situación de incertidumbre y no da razón bastante del agotamiento de la encuesta o de la ineptitud manifiesta de medios de convicción que las partes estiman útiles y conducentes, exhibe una fundamentación solo aparente y por ende arbitraria”* (CNCP,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

Sala I, LL, 2000-E-341; Navarro-Daray, ob. cit., pág. 617; el destacado me pertenece).

Formulada esta breve reseña, considero que a esta altura de la instrucción, de la valoración del plexo probatorio reunido y los criterios jurídicos expuestos, aún restan diligencias probatorias por adoptar que pudieran echar luz sobre la actitud observada por la imputado Silvina Rincón en los hechos endilgados y la responsabilidad penal que pudiera caberle. En consecuencia, el sobreseimiento dispuesto por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, fundada en la causal de que el delito no fue cometido por la imputada, resulta prematuro y debe ser revocado (art. 336, inc. 4, CPPN).

Respecto de la investigación, puede señalarse que las medidas sugeridas por el señor Fiscal Federal de Instrucción lucen razonables y conducentes a la reconstrucción de los hechos presuntamente ilícitos.

En efecto, considero que quedan pendientes de incorporación y valoración probanzas de utilidad y pertinencia tendientes a develar la existencia o no de aportes penalmente relevantes de la imputada Rincón en los delitos tributarios en que habría incurrido la empresa Corphone S.A. Asimismo y hasta tanto eso suceda, habida cuenta de que el mérito reunido tampoco permite disponer el procesamiento de la encartada Rincón, corresponde declarar su falta de mérito respecto de los hechos imputados, de conformidad a lo prescripto por el art. 309 del CPPN.

c) Lavado de activos de origen ilícito

c.1. Marco jurídico

La conducta de blanquear activos, como modalidad específica de encubrimiento, fue derogada por el

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

legislador al eliminar el tipo penal previsto en el art. 278 del CP, B.O. conf. Ley 25.246; mientras que, en paralelo, se incorporó al plexo punitivo un nuevo delito que prevé una conducta en su aspecto nodular idéntica a esta, cual es la definida en el art. 303 del Código Penal.

A este respecto, una inteligencia correcta de las leyes que se sucedieron en el tiempo (leyes 25.246 y 26.683), permite advertir que la conducta prohibida es, en esencia, la misma. En otras palabras, se ha dicho que: *“el fenómeno criminal no ha variado substancialmente, sino que lo que se modificó es la valoración que hizo el legislador respecto de los intereses preponderantemente afectados por aquélla, y los cambios en la redacción del tipo penal obedecen a ese cambio de valoración, en tanto buscan poner el énfasis en los aspectos de la conducta prohibida que vulneran el orden socioeconómico, en vez de privilegiar lo atinente a la afectación de la administración de justicia... En ese orden de ideas, en el lavado de activos la cuestión de si se afecta la administración de justicia (reprimida en el antiguo art. 278) o el orden socioeconómico (sancionada en el art. 303) no surge de una diferencia en el modo en que se llevan adelante las conductas de lavado de activos (que pueda ser reflejada en un cambio en la descripción típica). Por el contrario, el accionar de los lavadores es, en cualquier caso, básicamente el mismo, y repercute en ambos bienes jurídicos... Dicho de otro modo, **la conducta que en su momento estuvo tipificada en el art. 278.1 del código de fondo nunca dejó de estarlo, sino que lo único que se modificó es la concepción del legislador respecto de que bien jurídico era afectado, de modo predominante, por ese accionar típico**”* (BLANCO, Hernán en “La reforma del tipo





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

penal de lavado de activos y la ley penal más benigna, en revista Pensamiento Penal, 04.07.2013; el resaltado me pertenece).

En esta línea, la Sala I de la CFCP sostuvo que la interpretación integral de la normativa en cuestión no permite sino concluir que *"anteriormente esta figura legal estaba regulada por el art. 278, pero a partir de la reforma introducida por la ley 26.683 este delito aparece ahora ubicado en el art. 303 del Cód. Penal, con lo cual no existió una derogación del primero fruto de esta última reforma"* (CNCP, Sala I, causa n° 1686, "Bustamante, del 26/5/16, Reg. N° 873/16; citado por ABOSO, Gustavo Eduardo, "Código Penal de la República Argentina, Comentado, Concordado con jurisprudencia, 4ª edición, p. 1492").

Por su parte, la doctrina ha señalado que esta reforma *"... apuntó a regular el tipo penal de encubrimiento en forma específica en el art. 277 del Cód. Penal, incluyendo la figura básica, sus agravantes y las excusas absolutorias... A partir de la nueva regulación, la figura de lavado de dinero, que con anterioridad era concebida como una especie de agravada de aquellas conductas tendientes a encubrir únicamente a los delitos relacionados con el narcotráfico, amplía su campo de aplicación a los supuestos en que la procedencia de los activos parta de otros delitos precedentes de especial gravedad..."* (Ibídem, pág. 506).

En efecto, el lavado de activos se trata de un delito pluriofensivo, en tanto menoscaba simultáneamente a la administración de justicia, al orden socioeconómico, a la transparencia del sistema financiero o la legitimidad de la actividad económica, e incluso a la salud pública, como

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

en los casos de narcotráfico (cfr. Llenera, Patricia, "Lavado de Dinero", Revista del Ministerio Público Fiscal, N° 0, pág. 39 y ss.).

También, al analizar la figura del art. 278 del CP, se sostuvo que la referencia al delito como elemento típico apunta al concepto de conducta penada por la ley y será necesario como presupuesto *"que se haya cometido un 'delito', entendido como tipo legal abstracto que, desde el punto de vista dogmático, exige que sea típico y antijurídico. Si concurre a su respecto una causa de justificación o si la conducta es atípica, no podrá sancionarse la conducta de lavado de dinero posterior. En cambio, si se trata de causas de inimputabilidad, de exculpación, de error de prohibición invencible, excusas absolutorias, límites funcionales a la aplicación de la ley penal o inexistencia de condiciones objetivas de punibilidad, el precepto es plenamente aplicable"* (D'ALBORA, Francisco J., "Lavado de dinero", Ed. Ad-Hoc, Bs. As., 2011, pág. 70 y sig.)

En tal sentido, la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal en autos "Orentrajch" expresó que *"la procedencia criminal de los bienes objeto de blanqueo no requiere sino la comprobación de una actividad delictiva previa de modo genérico que, según las circunstancias del caso, permita la exclusión de otros orígenes posibles, 'sin que sea necesaria ni la demostración plena de un acto delictivo específico ni de los concretos partícipes en el mismo..."*.

También la Sala IV de ese mismo tribunal de Casación, sostuvo que la configuración del delito de lavado exige que se haya acreditado el tipo objetivo del delito precedente *"pero no requiere el dictado de una sentencia*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

condenatoria firme respecto de dicho delito" (CNCP, Sala IV, en autos "Álvarez, Guillermo...", registro N° 1130/15.4 del 12.06.2015).

c.2. Lavado de activos provenientes de las evasiones fiscales alcanzadas por la amnistía fiscal y penal dispuesta en la Ley N° 27.541 y sus modificatorias.

Con motivo de las apelaciones deducidas por el Ministerio Público Fiscal y la querellante particular Unidad de Información Financiera, corresponde analizar si los efectos materiales (ahorro fiscal) de las evasiones tributarias amnistiadas pueden o no constituirse en activos ilícitos que, luego, den lugar a la configuración del delito de lavado de activos (art. 303, CP).

Por un lado, debe decirse que para que un hecho previo sea considerado ilícito precedente del delito de lavado de activos, basta con la configuración de un injusto penal, es decir, que dicha manifestación externa se presente típica y antijurídica penalmente, razón por la cual *"resulta indiferente que el autor del ilícito previo sea irresponsable o esté exento de pena"* (conf. Blanco Cordero, Isidoro, "El delito de blanqueo de capitales", 4ª edición, Ed. Thomson Reuters - Aranzadi, Pamplona, 2015).

Ahora bien, el Código Penal argentino, en el art. 61, establece textualmente que: *"La amnistía extinguirá la acción penal y **hará cesar la condena y todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a particulares**"*.

A los fines de valorar la relación existente entre el ilícito previo amnistiado y el lavado consecuente, estimo apropiado -en primer lugar- indagar en la naturaleza jurídica y los efectos que la Constitución Nacional y la



ley penal dictada en su consecuencia atribuye a la amnistía.

En este sentido, he venido sosteniendo al expedirme respecto de la interpretación de la sucesión de leyes de blanqueo, que *“el dictado de amnistías constituye facultad del Poder Legislativo de la Nación en virtud de lo establecido en el art. 75, inc. 20 de la Constitución Nacional”*.

El efecto de la amnistía consiste en borrar la criminalidad del hecho y suele dictarse por razones de orden público, de política criminal y de política económica. La amnistía, entonces, suprime la criminalidad del delito, aun cuando no deroga el delito como tal, ni el tipo penal previsto en la norma. Las normas de amnistía, se aplican a los procesos iniciados extinguiendo la acción o la pena que pudiera corresponder por ese delito. Asimismo, no requiere del consentimiento del beneficiario e incluso puede aplicarse en contra de la voluntad del imputado, por ser una norma de orden público (ver por todos, voto del suscripto en autos: *“INCIDENTE DE FALTA DE ACCIÓN DE SANTIAGO, OSCAR LUCAS; SANTIAGO, LUCAS; Y SANTIAGO, SEBASTIAN OSCAR EN AUTOS: SANTIAGO OSCAR LUCAS Y OTROS POR ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL”* (Expte. FCB 12000035/2012/5), resuelto el 3.11.2016).

La diferencia de la amnistía con la excusa absolutoria, es que esta última perdona la criminalidad del tipo penal solo al autor del hecho típico. Por otra parte, la amnistía debe tener un alcance general, no particular. No obstante, *“ese carácter no prohíbe que resulten excluidos ciertos sujetos, siempre que hayan sido definidos a partir de su inclusión en categorías determinadas, como los reincidentes, los autores de*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

crímenes comunes contrarios al derecho de gentes, etc. y no individualmente" (Soler, p. 539; Núñez, p. 160; Fierro, p. 101; D'aleccio, p. 951; citados por Gustavo E. ABOSO, "Código Penal de la República Argentina. Comentado, concordado con jurisprudencia", 4ª Edición, Ed. Bdef, año 2017, pág. 391).

A mayor abundamiento, reconocida doctrina ha expresado que la amnistía *"... deriva de la locución griega amnesis, que significa pérdida de memoria, olvido. La amnistía es un acto de soberanía interna del Estado por el que, fundado en graves razones de orden público cuya existencia y oportunidad solo al Poder Legislativo le compete valorar, éste, por medio de una ley con efecto retroactivo, declara el olvido de infracciones de naturaleza penal... produciendo la extinción de todas sus consecuencias represivas, sin individualizar a los destinatarios del beneficio, quienes no pueden renunciarlo, y una vez reconocido por una resolución judicial pasada en autoridad de cosa juzgada, es irrevocable."* (LASCANO, Carlos J. (h). Director. Derecho Penal. Parte General. Ed. Advocatus. Córdoba. 2005. Pág. 603).

Así, se sostuvo que *"se trata de aquel instituto de naturaleza política en virtud del cual el Estado, en un acto de soberanía interna [...] fundado en graves razones de orden público cuya existencia y oportunidad sólo al Poder Legislativo le compete valorar, éste, por medio de una ley con efecto retroactivo, declara el olvido de infracciones de naturaleza penal (delitos comunes o políticos e infracciones contravencionales o disciplinarias), ocurridas con anterioridad, produciendo la extinción de todas sus consecuencias represivas, sin*

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

individualizar a los destinatarios del beneficio, quienes no pueden renunciarlo” (LASCANO, ob. cit.).

Asimismo, la amnistía tiene por objeto “*restablecer la calma y la concordia social*”, y actúa produciendo el olvido de la infracción con relación a todos sus efectos penales, subsistiendo solo los civiles de naturaleza reparativa.

En palabras de Soler, en virtud del art. 67, inc. 17, C.N., el Congreso tiene la facultad de conceder amnistías generales. La amnistía importa la suspensión de la ley penal, con respecto a hechos determinados; no es personal, sino objetiva. Está fundada en razones de interés común o de naturaleza política, y se refiere, generalmente, a los hechos de esa clase; aunque nada impide constitucionalmente la amnistía de hechos de otra naturaleza. Tiene por efecto hacer desaparecer el hecho como fuente de pena, aunque no suprime su ilicitud, pues deja subsistente la eventual consideración de ésta, como causa de indemnizaciones, C.P., 61. Pero en el terreno penal es tan terminante el efecto de la amnistía, que el hecho ni puede ser tomado en consideración después, a los fines de la reincidencia, C. P., 50, conclusión que no se altera por el hecho de que alguno de los amnistiados haya sufrido eventualmente la pena. Con la amnistía se extingue no solamente la acción penal, sino la potestad represiva misma, con respecto a un hecho determinado; de manera que aun impuesta la condena a algún sujeto, ésta debe cesar con todos sus efectos, salvo las indemnizaciones (SOLER, Sebastián, “DERECHO PENAL ARGENTINO, T. II., Ed. TEA, Buenos Aires, 1989, pág. 538 a 539).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

En opinión de D'Alesio *"se advierte que el dictado de estas leyes de amnistía se inspira en el principio supremo de la necesidad de evitar mediante un mal menor (el olvido de los delitos cometidos) uno mayor: la concreta frustración de las aspiraciones que llevaron a prever tal comisión y amenazarla con pena"* (D'ALESSIO, Andrés José, *"Código Penal de la Nación. Comentado y anotado"*, 2ª ed., Tomo I, Parte General).

El Máximo Tribunal ha señalado que la amnistía *"es un acto de gobierno y de soberanía que forma parte del sistema constitucional... en razón de constituir el ejercicio de una potestad por la cual el Estado renuncia circunstancialmente a la represión de determinados delitos, disponiendo la extinción de la acción penal y haciendo cesar la condena y sus efectos, con la excepción de las indemnizaciones debidas a los particulares. Se borra así el hecho delictuoso, se extinguen las penas aplicadas y sus beneficiarios se reputan legalmente inocentes, con la finalidad de afianzar la unidad y la pacificación nacional"* (Fallos: 306:911 y 309:5).

En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 287:306) tiene dicho que la amnistía implica una expresión de soberanía política, tendiente a la pacificación social, finalidad que descarta una interpretación restrictiva de sus preceptos y acata los imperativos políticos que la originaron (260:171; 264:152),... el logro de tan elevado fin podría verse impedido o dificultado si se limitase, indebidamente, al alcance de las normas sancionadas por el legislador. Por ello no deben convalidarse interpretaciones susceptibles de traer consigo el riesgo cierto de frustrar el objeto perseguido y retardar, con grave daño común, el definitivo

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

encauzamiento de la armónica convivencia colectiva (Fallos: 252: 232, Consid. 4).

En dicho precedente (Fallos: 287:306), el Máximo Tribunal citó lo expresado por el diputado Pedrini quien calificó la amnistía como un *"acto político no jurisdiccional"* (Diario de Sesiones, Diputados, año 1973, pág. 194). Lo expuesto en razón de constituir el ejercicio de una potestad por la cual el Estado renuncia circunstancialmente a la represión de determinados delitos, disponiendo la extinción de la acción penal y haciendo cesar la condena y sus efectos, con la excepción de las indemnizaciones debidas a los particulares.

Se trata de una medida política de carácter general, que significa el olvido de un hecho delictivo para restablecer la calma y la concordia social en algún punto específico, extinguiendo la acción y la pena, borrando la criminalidad del hecho perdonado (CS, 8/9/1937, JA, 59-740).

En conclusión, la amnistía *"borra la criminalidad del hecho"* (Fallos 178:377). En el mismo sentido, *"tiene por objeto borrar los delitos cometidos por las personas que se benefician de ella"* (Fallos 211:1670). Por último, en fecha más reciente, manifestó que *"la amnistía borra el carácter ilícito del hecho..."* (Fallos 310:1162).

Expuesto cuanto antecede, considero del caso mencionar doctrina vernácula reciente sobre la materia, con la cual por cierto coincido, en tanto sostuvo que *"debemos preguntarnos si el lavado puede permanecer inmune a cualquier circunstancia que afecte al delito precedente o, por el contrario, ante determinadas circunstancias ocasionaría una suerte de contagio entre uno y otro. Coincidimos con aquella doctrina que entiende que el*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

lavado, si bien califica como delito autónomo, no por ello resulta dependiente del delito anterior. (...) Es decir, independientemente de que las amnistías fiscales (leyes 26476; 26860; 27260; 27613 restablecida por ley 27679) no perdonen el delito de lavado, este queda “contagiado” por el olvido de la amnistía respecto del delito de evasión. Podrá haber persecución por lavado de dinero, pero obviamente no podrá tener como sustento la evasión pues ha sido ‘olvidada’” (Goyeneche, Eugenio - Ludueña, Gabriel E., “El delito de lavado frente a las leyes de amnistía fiscal”, Doctrina Penal Tributaria y Económica, edición 66, Ed. Errepar, diciembre de 2022, cita digital: EOLDC106732A; el destacado me pertenece).

En adición a lo expuesto, si bien con referencia al encubrimiento pero análogo al lavado de activos en cuanto a su estructura típica, se ha apuntado que: *“Un criterio que prevalece en doctrina entiende que **excluyen el encubrimiento las causas objetivas que hacen desaparecer el delito o extinguen la pena**, en tanto que las subjetivas o individuales no obstan para que el hecho pueda ser encubierto. Se han considerado, así como excluyentes del delito a las causas legales de justificación, a la amnistía y al indulto. En cambio, no se reconoce ese efecto a las causas de inculpabilidad y a las excusas absolutorias (Soler, Derecho Penal argentino, t. V, § 149.IV; Oderigo, Código Penal, nota 1403; Millán, Las reformas, p. 405; Buompadre, Código Penal y normas complementarias - Análisis doctrinal y jurisprudencial, cit., t. 11, ps. 149/150; Donna, Derecho Penal, Parte especial, ed. 2002, t. III, ps. 473/475)” (FONTÁN BALESTRA, Carlos, “Tratado de Derecho Penal”, Tomo IV, 2013).*

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

Por su parte, sobre el argumento del MPF de que el lavado encuentra origen no solo en los delitos tributarios sino también en las defraudaciones por administración fraudulenta, sin abrir juicio sobre dichas imputaciones pues, como dije, corresponde su análisis, investigación y resolución a la Justicia provincial, lo cierto es que el rédito económico material señalado por el acusador -objeto del presunto lavado posterior- tendría su origen en el ahorro fiscal y son justamente dichos activos los cuales, mediante la amnistía fiscal y penal establecida por ley, resultan ahora descontaminados de ilicitud.

En definitiva, habiéndose amnistiado los delitos de evasión tributaria del cual provendrían los fondos ilícitos, el objeto de lavado -dinero de ahorro fiscal- resulta ahora jurídicamente aceptable o si se quiere "descontaminado", motivo por el cual los sobreseimientos decididos respecto del delito de lavado de activos de origen ilícito deben ser confirmados pues han sido dictados conforme a derecho.

En virtud de dichas consideraciones, y sin perjuicio de los reparos morales que pudieran formularse respecto de la proliferación de leyes de amnistías fiscales, luce evidente que al desaparecer el carácter delictivo -en el ilícito amnistiado- no puede ser luego considerado "ilícito precedente" del delito de lavado de activos sin contravenir los principios de legalidad y mínima suficiencia que inspiran nuestro Estado de derecho.

Por lo expuesto, corresponde confirmar los sobreseimientos dispuestos en el punto resolutivo 24 mediante el cual se dispuso el sobreseimiento de Mario Morselli (hecho nominado 104) y Augusto Boero (hecho nominado 105), respecto de quienes el Ministerio Público





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

Fiscal les atribuyó la comisión del delito de lavado de los activos provenientes de la evasión tributaria agravada de la contribuyente Mitre S.A. (hecho 87 del requerimiento de instrucción de fs. 3059/3102). Ello así, toda vez que dicho ilícito antecedente resultó amnistiado. En consecuencia, desde la amnistía dispuesta, el presunto lavado carece de objetivo ilícito, por lo cual resulta penalmente atípico (conf. art. 336, inc. 3, CPPN).

De otro costado, respecto de aquellos imputados sobre los cuales se decidió la suspensión de la acción penal tributaria en los términos de la Ley 27.562, cuyas ganancias conformarían los activos provenientes del ilícito precedente, considero que corresponde revocar la falta de mérito dispuesta en orden al cargo de lavado de activos (punto resolutivo 23).

En efecto, si bien la ley de amnistía precitada no proyecta sus efectos sobre el delito de lavado de activos de origen ilícito, desde la íntima conexión y vinculación que se presenta en el caso de autos -toda vez que el delito suspendido conforma o constituye el objeto del lavado-, considero prudente, razonable y justo revocar las faltas de mérito dictadas en el punto resolutivo 23 y disponer la suspensión de la acción penal y del cómputo de la prescripción de los delitos de lavado de activos de origen ilícito (art. 303, CP).

A tal fin, tengo presente la interpretación propiciada al respecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación la cual, siguiendo al dictamen del Procurador General, expresó que: “... No creo que en casos como el presente, en el que el contribuyente se ha acogido a un régimen de facilidades de pago dispuesto por el Poder Ejecutivo, la solución consista, sencillamente, en no

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

hacer lugar a la solicitud de extinción de la acción penal y ordenar la prosecución de la causa. Ello lo entiendo así, pues considero que si la ley le ofrece al contribuyente la posibilidad de poner fin a la acción y evitar la imposición de la pena abonando la totalidad de la deuda, y a la vez, admite la posibilidad de que ello tenga lugar en el marco de un régimen de facilidades de pago, **no parece lógico que el proceso penal pueda proseguir hasta el dictado de una sentencia definitiva, eventualmente condenatoria, mientras el contribuyente se halla cumpliendo las cuotas del plan de pago previamente acordado.** Por el contrario, en mi opinión, la previsión, por parte del legislador, de un plazo para el cumplimiento de las obligaciones que es condición para la extinción de la acción importa, **implícitamente, una suspensión 'ministerio legis' del trámite del proceso y de la prescripción de la acción** (Fallos: 325:1731 y causa R.962 - L.XXXVI, "Rivera Gorbál, Jorge y otros s/artículos 864, 866, 871, 876, 1112, 876, 882 y 638 del CAd." - 13/9/2002) hasta tanto el contribuyente cumpla satisfactoriamente con la totalidad de los pagos estipulados en el régimen de regularización, en cuyo caso deberá desistirse de la pretensión punitiva, o se produzca la caducidad del plan de facilidades de pago por incumplimiento (conf. art. 12 y ss., D. 1384/2001), en cuyo caso deberá reiniciarse el ejercicio de la acción penal pública. Por lo expuesto, opino que corresponde declarar procedente la queja y, con el alcance antes indicado, hacer lugar al recurso y dejar sin efecto el pronunciamiento apelado para que se dicte otro con arreglo al criterio aquí expuesto.." (Fallos, 325:1731).

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

Por ello, corresponde revocar la resolución apelada en cuanto dispuso la falta de mérito de Martín Alejandro Sarmiento, César Eduardo Cappella, Fernando Sciarra Villalba, Leandro Paolo Srur, Mauricio Andrés Pinto, Patricio Rolando González, Leuterio Carlos Bonetto, y disponer la suspensión de la acción penal y del cómputo de la prescripción de los delitos de lavado de activos de origen ilícito -hechos nominados 100, 106, 107, 110, 111, 112 y 113, respectivamente (conf. art. 303, inc. 1, del C.P.)

c.3. Situación procesal de Jorge Daniel Cuevas y Sebastián Toranzo por el delito de lavado de activos -hecho nominado 99 y 119, respectivamente-.

En este punto, comparto la valoración que de los elementos de convicción efectuó el Juzgado de primera instancia para resolver la situación procesal de los aquí imputados, determinando conforme al mérito reunido, en el caso del imputado Jorge Daniel Cuevas la inexistencia de hecho delictivo con motivo de la procedencia lícita de los activos con los cuales adquirió los bienes subrogados y, en el caso del imputado Sebastián Toranzo, la insuficiencia de convicción para determinar, aun indiciariamente, la procedencia ilícita de los activos que se juzgan objeto del lavado atribuido. Cabe resaltar que el razonamiento probatorio y el silogismo sentencial se presenta válido y suficiente para arribar a las soluciones adoptadas (conf. art. 455, a *contrario sensu*, del CPPN).

En su mérito, corresponde confirmar la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso el sobreseimiento de Jorge Daniel Cuevas respecto del delito de lavado de activos de origen ilícito -hecho nominado 99-

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

(conf. art. 303 inc. 1 del CP y art. 336, inc. 3, del CPPN).

Asimismo, debe confirmarse la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso la falta de mérito de Sebastián Toranzo respecto del delito de lavado de activos de origen ilícito -hecho nominado 119- (conf. art. 303 inc. 1 del CP y art. 309 del CPPN).

IX.- Excarcelación de Diego Alberto Vieyra Ferreyra:

Entrando al análisis del recurso de apelación deducido por el Ministerio Público Fiscal respecto del mantenimiento de la libertad o bien la excarcelación dispuesta en favor de Diego Alberto Vieyra Ferreyra (puntos resolutivos 1 y 2), corresponde analizar si lo resuelto al respecto por el Juez Federal de primera instancia resulta o no ajustado a derecho.

En primer lugar, estimo pertinente dejar sentado -de manera preliminar- los criterios jurídicos expresados por el suscripto en torno a la libertad de las personas durante la sustanciación del proceso penal.

a) Marco normativo

En atención a la cuestión traída a estudio en el presente, estimo conveniente traer otra vez a colación la postura e interpretación asumidas por el suscripto en torno al encarcelamiento preventivo desde el fallo "BOTTERI, Roberto R." (L° 268, F° 109), del 05.07.2007, en adelante (puede consultarse, en tal sentido "GAUNA, Agustín" -L° 270 F° 85-; "PIETROBÓN, Abel" -L° 272 F° 8-).

De manera preliminar, se estima de interés abordar la cuestión con un análisis de las normas que en el Código Procesal Penal de la Nación contemplan la "eximición de prisión", advirtiendo entonces que el principio rector en





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

la materia es el de la libertad del imputado en el proceso, admitiendo restricciones en los casos expresamente contemplados, tal como puede leerse en el dispositivo del art. 280 del Código de Rito.

Sobre esa base, bajo el título "Exención de prisión. Procedencia", el artículo 316 del Código de Forma establece que "Toda persona que se considere imputada de un delito, en causa penal determinada, cualquiera sea el estado en que ésta se encuentre y hasta el momento de dictarse la prisión preventiva, podrá, por sí o por terceros, solicitar al juez que entienda en aquélla su exención de prisión. El juez calificará el o los hechos de que se trate, y cuando pudiere corresponderle al imputado un máximo no superior a los ocho (8) años de pena privativa de la libertad, podrá eximir de prisión al imputado. No obstante ello, también podrá hacerlo si estimare prima facie que procederá condena de ejecución condicional, salvo que se le impute alguno de los delitos previstos por los artículos 139, 139 bis, y 146 del Código Penal...".-

Por su parte, el artículo 319 del mismo cuerpo normativo se ocupa de precisar las "Restricciones" a las cuales se deben someter los casos de eximiciones de prisión o excarcelaciones respectivamente, disponiendo -en concreto- que "Podrá negarse la exención de prisión o excarcelación, respetándose el principio de inocencia y el art. 2° de este Código, cuando la objetiva y provisional valoración de las características del hecho, la posibilidad de la declaración de reincidencia, las condiciones personales del imputado o si éste hubiere gozado de excarcelaciones anteriores, hicieren presumir,

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

fundadamente, que el mismo intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones”.-

El cuadro normativo se completa, pues, con la disposición legal del artículo 26 del Código Penal que, en el marco del Título III y bajo la designación “Condenación condicional”, prescribe que “En los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de tres años, será facultad de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión deberá ser fundada, bajo sanción de nulidad, en la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad...”.

Hay que mencionar que, a su vez, el Informe Anual N° 1995 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, plantea al principio de inocencia como presunción que juega a favor del acusado de un delito, según la cual éste es considerado inocente mientras no se haya establecido su responsabilidad penal en sentencia firme. De este modo, para establecer la responsabilidad penal del imputado, el Estado debe probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable (Capítulo III – Perú, 10.970).

Sin duda que la máxima en virtud de la cual el justiciable no es considerado culpable hasta que una sentencia judicial firme así lo indique, tras la sustanciación de un proceso regular, equivale a decir -ni más ni menos- que durante el desarrollo del proceso judicial el acusado debe ser tratado como un inocente (cfse. POVIÑA, Fernando, La garantía de la libertad del





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

imputado durante el proceso penal y la prisión preventiva, Rev. La Ley, Suplemento Penal 2007, p. 10).

Ahora bien, semejante tratamiento del imputado a lo largo del proceso no significa que no se apliquen sobre él medidas de coerción de ninguna naturaleza, sino -antes bien- que la imposición de éstas se ve seriamente restringida a raíz del mentado principio de inocencia. En efecto, la afirmación de que el imputado no pueda ser sometido a una pena y, por ende, no pueda ser tratado como culpable hasta que una sentencia firme así lo declare, constituye el principio para expresar los límites de las medidas de coerción procesal contra el acusado (cfse. MAIER, Julio B., Derecho procesal penal, Ed. Ediar, Bs.As., 1960, p. 512).

Si bien las medidas de coerción procesal suponen la utilización del poder estatal para privar a los individuos de derechos garantizados por el orden jurídico, en vista del análisis que se efectúa resulta necesario diferenciarlas de las medidas de coerción material.

Ambas clases de medidas coercitivas tienen en común las características que informan a toda coerción del Estado, esto es, el uso de la fuerza pública y -paralelamente- la privación de ciertos derechos jurídicamente reconocidos y amparados. La diferencia entre uno y otro tipo de medidas estriba en los fines que persiguen el Derecho penal y el Derecho procesal penal. Así, por un lado, mediante la imposición de una pena a un individuo el derecho material procura, según la tesis que se adopte, un fin retributivo o de prevención (especial o general, negativo o positivo), vale decir, la aplicación de la pena tiene lugar como reacción del Estado frente a una determinada conducta de un individuo que, por

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

afectación de bienes jurídicos, ha sido catalogada como delito por el Derecho penal. Por el otro, las medidas de coerción procesal no pueden aparecer vinculadas a los propósitos de la coerción de carácter material, pues ello sería directamente anticipar una pena al imputado durante el procedimiento de persecución penal (véase CAFFERATA NORES, José, La excarcelación, Ed. Lerner, Cba. 1977, p. 24), lo cual echaría por tierra el referido principio de inocencia, al imponerse en los hechos una pena a una persona sin la constitucionalmente requerida sentencia condenatoria firme.

Ciertamente que, por su parte, el fin del Derecho procesal penal se traduce en la correcta averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal (véase, en tal sentido, VÉLEZ MARICONDE, Alfredo, Derecho Procesal Penal, T.II, Ed. Lerner, Cba., 1969, p. 475 y ss.). Queda claro, por tanto, que la meta del procedimiento penal está dada por la decisión acerca de la punibilidad del imputado: 1) materialmente correcta; 2) obtenida de conformidad con el ordenamiento jurídico procesal; 3) que reestablezca la paz jurídica (cfse. ROXIN, Claus, Derecho Procesal Penal, Ed. Del Puerto, Bs. As., 2000, p. 2, trad. de Gabriela E. CÓRDOBA y Daniel R. PASTOR, revisada por Julio B. MAIER).

En función de lo expresado, es dable aseverar que la coerción procesal no tiene como propósito satisfacer una reacción del derecho frente a la infracción de una norma de deber, sino el "resguardo de los fines que persigue el mismo procedimiento, averiguar la verdad y actuar la ley sustantiva, o en la prevención inmediata sobre el hecho concreto que constituye el objeto del procedimiento (véase, MAIER, Julio B., La Ordenanza procesal penal alemana, Vol. II, Ed. Depalma, Bs.As., 1982, p. 101). En





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

otros términos, en el Derecho procesal penal, más allá de los fines preventivos inmediatos, el fundamento de una medida de coerción reside en el “peligro de fuga del imputado” o, bien, en el “peligro de que se obstaculice la averiguación de la verdad” (ibídem, pp. 515/4).

Sobre esa base se entiende que una interpretación sistemática de los artículos 316, segunda parte, y 317, primer inciso, del C.P.P.N. indica que, como regla, la libertad procesal (no-prisión preventiva) tiene relación inmediata con la penalidad del delito imputado y es aceptable si: a) La pena máxima del delito no fuera superior a los ocho años de pena privativa de la libertad; o, bien, b) aunque la pena máxima fuera mayor a ese límite, cuando el juez estime “prima facie” que procederá una condena de ejecución condicional (SANDRO, Jorge A., Condiciones de la prisión procesal, Rev. La Ley, 2005-C, p. 638).

A ello se suma que el artículo 319 del Código de Forma establece las restricciones o limitaciones de la disposición general; agregando así que, incluso dentro de la franja o envolvente de los delitos excarcelables por razón de la penalidad, es posible denegar la exención de prisión o excarcelación si hubiere datos objetivos y motivos fundados para presumir el peligro de fuga o de entorpecimiento de las investigaciones por parte del inculpado (ibídem).

De acuerdo a lo apuntado, la regla de excarcelación principal (arts. 316, 317, inc. 1º, del CPPN) es de interpretación flexible y, para respetar la garantía constitucional del estado de inocencia, debe ser complementada por el test mínimo de las tres indicaciones de fuga o entorpecimiento judicial. Se entiende, además,

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

que la regla de la excarcelación restrictiva (art. 319 del C.P.P.N.) exige, en cambio, un test completo de riesgo procesal (cfse. autor y obra citados) (resaltado propio).

En tal sentido, corresponde al Estado la comprobación o verificación de tres aspectos diversos, a saber; 1) el peso de las pruebas de cargo conocidas por el imputado, 2) su personalidad y situación particular y 3) la actitud procesal respecto a la investigación de la verdad.

Se entiende además, que a diferencia de la regla principal antes enunciada (arts. 316, 317, inc. 1°, CPPN) la presente pauta (art. 319 del CPPN), que agudiza la privación de la libertad aún dentro del conjunto de ilícitos que admiten la excarcelación, requiere un examen completo de riesgo procesal, esto es, de afectación de los fines del proceso. Por tanto, la interpretación de las indicaciones señaladas es, en esta hipótesis, particularmente restrictiva (Sandro, ob.cit.).

BECCARIA -de innegable influencia en la ciencia del Derecho penal-, en su obra De los delitos y de las penas, indicaba que en la concepción liberal de la potestad estatal de represión, la captura o encarcelamiento previo a la sentencia "...no podía quedar librada al arbitrio de los jueces, sino que era la ley quien en definitiva debía fijar la procedencia..." añadiendo que las cárceles cumplían la función de "simple custodia de un ciudadano hasta que se lo juzgue culpable" y que su rigor "no puede ser más que el necesario para impedir la fuga, o para que no se oculten las pruebas del delito" debiendo durar "el menor tiempo posible" (cfse. BECCARIA, Cesare, op. cit., Ed. Temis, Colombia, 1994, p. 11 y ss., trad. de Sentís Melendo y Ayedra Redín, con notas de Calamandrei).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

Ya más recientemente y de manera concordante, se ha afirmado que "la pérdida de la libertad como consecuencia de la prisión preventiva sólo es posible cuando resulta esperable una pena de prisión" (HASSEMER, Winfried, Crítica al derecho penal de hoy, Ed. Ad-Hoc, Bs.As., 1995, p. 121, Trad. Patricia Ziffer). Es importante aludir, por último, al precepto de la condenación condicional del art. 26 del C.P., del que se colige que toda condena que supere los tres años fijados por la norma antes dicha necesariamente debe ser de cumplimiento efectivo.

Así las cosas y entrando a analizar cómo funcionan los casos previstos tanto en el art. 316 del CPPN cuanto en el art. 319 del citado código, debe subrayarse que los presupuestos de procedencia contemplados en el artículo primeramente citado (316) no constituyen per se una presunción iure et de iure sino que, por el contrario, deben ser interpretados, por parte de los juzgadores, como una presunción iuris tantum; mientras que la otra disposición (art. 319) configura una verdadera hipótesis de excepción para los casos en los que, objetivamente, resulte procedente la excarcelación o exención de prisión. De tal modo, las disposiciones emanadas de los arts. 316 y 317 del C.P.P.N. sólo contienen supuestos de verificación previa a la aplicabilidad de lo normado por el art. 319 del mismo cuerpo normativo.

Ahora bien, en lo que concierne al tema de la gravedad de la imputación como justificativo de la denegación de la eximición de prisión o, en su caso, de la excarcelación, se estima que, por sí solo, no constituye elemento suficiente para denegar los beneficios enunciados, ya que el juzgador debe examinar el caso en concreto y decidir, en particular, si concurre alguna

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

causal de eventual entorpecimiento del proceso penal o peligro real de fuga por parte del imputado. Según ha señalado la Jurisprudencia más significativa en la materia, lo contrario, esto es, la denegación del beneficio argumentando, únicamente, que la gravedad del hecho enrostrado no autoriza objetivamente la concesión del mismo, equivaldría a incurrir en afirmaciones de contenido meramente dogmático (entre otros, C.N.C.P., Sala III, Registro 488.05.3, "Fernández Alegría, Jorge s/ recurso de casación", 16.06.05, Causa n° 5831).

Si la pena máxima resultante de la calificación legal del hecho asignada por el juez fuera superior a los ocho años de pena privativa de la libertad no corresponde, en principio, la concesión de la exención de prisión y en los casos en que el mínimo legal también supera el máximo de pena que puede ser dejada en suspenso, tampoco corresponde acceder al beneficio de la exención de prisión o excarcelación, salvo que se demuestre, en el caso puntual, que por la modalidad de la conducta llevada a cabo y/o por las circunstancias especiales del caso no se presentaran las causales ya enunciadas de entorpecimiento de la investigación o fuga del encartado.

A la par de lo anterior, en el artículo 319 del CPPN se contemplan las pautas que permiten denegar la concesión de la excarcelación o la exención de prisión cuando las singulares circunstancias del caso hicieran presumir que el inculpado podría intentar eludir la acción de la justicia o entorpecer el curso de las investigaciones.

Asimismo, cabe tener presente en esta oportunidad lo resuelto por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, con





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

fecha 13.11.2019, mediante Resolución 2/2019 (B.O. del 19.11.2019).

En la mentada resolución se dispuso -en lo que aquí interesa- la implementación para todo el territorio nacional de los artículos 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal, a efectos de evitar situaciones de desigualdad ante la ley entre los justiciables de las zonas en las que se aplica ese Código y los de aquellas zonas en las que aún no se implementó de forma integral.

Asimismo, conviene aclarar que la nueva normativa que entra en vigencia convive con lo establecido en los arts. 316, 317 y 319 del CPPN y que su aplicación es complementaria, tal como lo señala la aludida resolución de la Cámara Bicameral al postular que "...resulta indispensable implementar aquellos institutos procesales y/o artículos previstos en el Código Procesal Penal Federal que no resulten incompatibles con el sistema procesal establecido en la Ley N° 23.984...".

El art. 221 establece las distintas pautas dentro de las cuales debe analizarse el riesgo de fuga del encartado a los fines de disponer una medida cautelar de encierro, entre las que enumera "a. Arraigo, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de familia y de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto; b. Las circunstancias y naturaleza del hecho, la pena que se espera como resultado del procedimiento, la imposibilidad de condenación, condicional, la constatación de detenciones previas, y la posibilidad de declaración de reincidencia por delitos dolosos; c. El comportamiento del imputado durante el procedimiento en cuestión, otro anterior o que se encuentre en trámite, en particular, si incurrió en

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

rebeldía o si ocultó o proporcionó falsa información sobre su identidad o domicilio, en la medida en que cualquiera de estas circunstancias permita presumir que no se someterá a la persecución penal”.

Por último, el art. 222 del nuevo Código establece los indicios que deben ser tenidos en cuenta por el Juez para presumir peligro de entorpecimiento de la investigación por parte del imputado, siendo ellos cuando exista sospecha de que el encartado “a. Destruirá, modificará, ocultará o suprimirá o falsificará elementos de prueba; b. Intentará asegurar el provecho del delito o la continuidad de su ejecución; c. Hostigará o amenazará a la víctima o a testigos; d. Influirá para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; e. Inducirá o determinará a otros a realizar tales comportamientos, aunque no los realizaren”.

Al respecto, el nuevo art. 210 del Código Procesal Penal Federal recientemente implementado establece: “Medidas de coerción. El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL o el querellante podrán solicitar al juez, en cualquier estado del proceso y con el fin de asegurar la comparecencia del imputado o evitar el entorpecimiento de la investigación, la imposición, individual o combinada, de: a. La promesa del imputado de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación; b. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que se le fijen; c. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe; d. La prohibición de salir sin autorización previa del ámbito territorial que se determine; e. La retención de documentos de viaje; f. La prohibición de

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

concurrir a determinadas reuniones, de visitar ciertos lugares, de comunicarse o acercarse a determinadas personas, siempre que no se afecte el derecho de defensa; g. El abandono inmediato del domicilio, si se tratara de hechos de violencia doméstica y la víctima conviviera con el imputado; h. La prestación por sí o por un tercero de una caución real o personal adecuada, que podrá ser voluntariamente suplida por la contratación de un seguro de caución, a satisfacción del juez; i. La vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física; j. El arresto en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que el juez disponga; k. La prisión preventiva, en caso de que las medidas anteriores no fueren suficientes para asegurar los fines indicados...".

De esta manera, la nueva normativa del artículo mencionado procede a enumerar las distintas medidas de coerción alternativas a la prisión preventiva, estableciendo su aplicación para los casos en que éstas no fueren suficientes.

De tal forma, el nuevo art. 210 ha venido a plasmar en el texto legal el criterio que la prisión preventiva deberá ser aplicado en última instancia, cuando las restantes medidas pasibles de ser impuestas sean ineficaces para asegurar la comparecencia del imputado o evitar el entorpecimiento de la investigación, criterio que ya venía siendo sostenido por el Suscripto y la jurisprudencia que rige la materia.

b) Efectuadas las consideraciones precedentes respecto de ambos regímenes procesales, en lo que interesa al caso particular, corresponde determinar si corresponde

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

o no otorgar el beneficio de excarcelación solicitado en favor de Diego Alberto Vieyra Ferreyra.

El examen del caso en particular debe comenzar con la consideración sobre la imputación delictiva que pesa sobre Diego Alberto Vieyra Ferreyra. Conforme surge de los requerimientos de instrucción, pesa sobre el nombrado la imputación de la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita fiscal agravada por el rol de organizador (art. 15, inc. c), 2ª parte del Régimen Penal Tributario conf. Ley 27.430), alteración dolosa de registros fiscales y alteración dolosa de registros fiscales agravada por el concurso de dos o más personas (arts. 11 inc. a) 15 inc. b) del Régimen Penal Tributario conf. Ley 27.430) y lavado de activos de origen ilícito (art. 303, inc. 1, del CP); todo en carácter de autor y concurso real (conf. art. 45 del Código Penal).

De esta forma, atento la escala penal conminada en abstracto para los ilícitos que se le atribuyen al encartado resulta improcedente el beneficio de la excarcelación solicitado de conformidad a los parámetros establecidos por artículos 316 y 317 del CPPN.

Asimismo, cabe tener presente que, en caso de recaer condena en los presentes, tampoco procederá la condena de cumplimiento condicional, conforme lo establecido en el art. 26 del Código Penal.

No obstante, considero que la *presunción iuris tantum* en abstracto que surge de las prescripciones de los arts. 316 y 317 del CPPN sobre la existencia y magnitud de riesgo procesal, en el presente caso se encuentra desvirtuada por las siguientes circunstancias.

Si bien al analizar la procedencia o no del beneficio respecto de otros imputados de autos señalé que: “no es





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

ajeno al presente análisis el modus operandi de los imputados en la consecución de los fines que se habrían propuesto y en dicho objetivo, el hábil manejo comercial y profesional que se habría desarrollado, como un serio indicio de eventual incidencia o influencia en un comportamiento disvalioso en procura de la impunidad y la forma y metodología en la que se habrían verificado los hechos”, lo cierto es que, en la actualidad, se encuentran resueltas la mayoría de las situaciones procesales mediante el dictado del auto de mérito en revisión, ostensiblemente avanzada la investigación con la recolección y producción en gran medida de la prueba ofrecida y el imputado, en particular, ha demostrado la sujeción a las reglas de conducta impuestas durante el proceso, lo cual permite pronosticar fundadamente y en esta ocasión que se mantendrá a derecho y comparecerá frente a las distintas convocatorias que le efectúen los tribunales.

Cabe poner de resalto, además, que conforme surge del sistema de gestión judicial Lex-100, el Juzgado ha logrado asegurar para el proceso los montos de embargos establecidos y, de este modo, garantizar la eventual reparación del daño, los costos y costas y las sanciones pecuniarias que pudieran recaer. Por ello, el riesgo de desapoderamiento de bienes que señala el apelante ha disminuido notablemente obligando a su ponderación en esta oportunidad conforme al deber de los magistrados de resolver conforme a las circunstancias actuales.

En orden a sus condiciones personales, el imputado Diego Alberto Vieyra Ferreyra, de 40 años de edad, posee domicilio fijo en calle Vera Cruz N° 1908 de esta ciudad de Córdoba, en la que reside junto a su pareja Carolina

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

Ángeles Farrate, quien es la madre de su hija, y su hija de cinco años de edad y que carece de antecedentes penales computables (conf. declaración indagatoria a fs. (fs. 3443, 4610 y 4872/4873)).

Asimismo, el arraigo personal de Diego Alberto Vieyra Ferreyra permite suponer la inexistencia de riesgo procesal y presumir que el mantenimiento de su estado de libertad no pondría en peligro el éxito de la investigación seguida en su contra.

Por otra parte, surge de las constancias del sistema informático Lex-100 que el imputado ha comparecido a las citaciones y requerimientos que el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba le formulara, habiéndose ajustado a derecho; lo cual permite válidamente conjeturar la inexistencia de riesgo de fuga.

De conformidad con los parámetros antes expresados y dadas las particularidades del caso bajo examen, no advierto circunstancia alguna que torne aconsejable el dictado de la prisión preventiva, la cual se presenta, en este caso, como innecesaria a los fines de resguardar los fines del proceso seguido en su contra.

Por los fundamentos expuestos estimo que corresponde confirmar la excarcelación dispuesta en favor de Diego Alberto Vieyra Ferreyra (DNI 29.964.171), sin perjuicio de que, si se advierte algún tipo de maniobras encaminadas a entorpecer el correcto desenvolvimiento del proceso, la libertad que por medio de la presente se concede, sea revocada.

Al respecto, bien es sabido que las decisiones sobre libertad provisoria durante el desarrollo de un proceso penal son revisables y revocables, en razón de nuevas o





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

sobrevinientes circunstancias que puedan representar riesgo procesal.

Por lo expuesto, entiendo que confirmar la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso conceder la excarcelación a Diego Alberto Vieyra Ferreyra, manteniendo las medidas de coerción adoptadas por el señor Juez Federal interviniente (arts. 316, 317, 319 del CPPN y arts. 210, 221 y 222 del CPPF).

X. - Embargos:

A los fines del análisis, abordaré en primer lugar el estudio del pronunciamiento en cuestión en cuanto dispuso el embargo sobre los bienes de los imputados, medida que entiendo fue impuesta sin la debida consideración que establecen los arts. 518 en función del art. 123 del CPPN.

En este punto, los apelantes objetan la reducción que efectuó el señor Juez de Instrucción sobre el monto de los embargos, en los puntos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, y 11° de la resolución. Allí, al disponer el procesamiento de los coimputados Natalia Soledad Vieyra Ferreyra, Ruth Noemí Díaz, Eduardo Enrique Mansilla, María Belén Gómez, Damián Gabriel Olivieri Brizuela, Martín José Dus, Jorge Daniel Cuevas y Sebastián Toranzo en orden al hecho de asociación ilícita fiscal, consideró que: *"a los fines de garantizar el pago de costas que pudieran corresponderles, ante la eventualidad que recaiga en contra del encartado una sentencia condenatoria, y a los fines de fijar un monto razonable, se considera justo y adecuado trabar embargo sobre los bienes de ..., hasta cubrir la suma de pesos quinientos mil (\$ 500.000), o en su defecto inhibirlo de su libre disposición por igual monto (art. 518 del C.P.P.N.)."*

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

Con respecto a la cuestión controvertida, debo decir que se advierte en el en la resolución apelada que no han brindado los fundamentos que avalen la decisión, en particular las razones que abonarían la fijación de dichos montos, idénticos para todos los imputados.

Sobre este punto, los doctrinarios Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray, en interpretación que comparto, indican que *“el monto del embargo debe fundarse al ser impuesto, esto es, debe contener la resolución que establece la explicación de cómo se lo ha determinado, en función de las pautas que fija el art. 123. Puede ser modificado, aumentándolo o disminuyéndolo, conforme a las variaciones que pueda sufrir el proceso”*.

Advierto respecto al monto del embargo, tal como reclaman los apelantes, que el Juez ha omitido dar cuenta de los fundamentos por los cuales fija dicha suma. Según puede leerse, establece los montos de embargos de todos los imputados sin atender ni discriminar, en cada caso, la imputación delictiva en juego, el supuesto perjuicio económico ocasionado, el grado de compromiso personal en las maniobras que habrían realizado.

No debe olvidarse que el monto debe considerarse potencialmente distinto para cada procesado, según el grado de compromiso derivado de su conducta (CNPE, Sala A, JA, 1995-III-256...”), con olvido de la regla de solidaridad.

Por lo expuesto, considero que no se han brindado fundamentos que permitan homologar el monto de embargo fijado por el Juez de primera instancia con relación a las circunstancias particulares de cada imputado.

Por ello, corresponde **declarar la nulidad parcial** de la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba -puntos resolutiveivos 3 a 9 y 11-, en cuanto dispuso **trabar embargo** sobre los bienes de los coimputados Natalia Soledad Vieyra Ferreyra, Ruth Noemí Díaz, Eduardo Enrique Mansilla, María Belén Gómez, Damián Gabriel Olivieri Brizuela, Martín José Dus, Jorge Daniel Cuevas y Sebastián Toranzo, hasta cubrir la suma de pesos quinientos mil (\$ 500.000) o en su defecto inhibirlos de su libre disposición por igual monto, conforme los fundamentos dados en la presente (conf. art. 123 y 518 del CPPN).

XI.- Por último, corresponde rechazar el agravio del Ministerio Público Fiscal en virtud del cual solicita el dictado de procesamiento de los imputados Pizzi, Zopetto, Barbieri y Tapiero respecto del hecho nominado primero "asociación ilícita fiscal", pues considero que el magistrado instructor, con base en el mérito reunido, ha esgrimido fundamentos suficientes para establecer la coexistencia de las dos asociaciones ilícitas y sus vinculaciones, habiéndose resuelto oportunamente la situación procesal de los imputados nombrados en los autos: "PIZZI, Mauricio Andrés y otros por Infracción Ley 24.769" (Expte. FCB 8191/2020).

XII.- Por otro lado, asiste razón al Ministerio Público Fiscal en cuanto reclama la nulidad de la resolución mediante la cual se dispuso la concesión del beneficio de excarcelación al imputado Mauricio Andrés Pizzi *"la que no se hará efectiva atento sigue vigente la prisión domiciliaria dictada en la causa Pizzi"* (Sic, fs. 159), sin brindar fundamentos en concreto y supeditando sus efectos a la resolución de esta Cámara de los recursos de apelación interpuestos en los autos: **"LEGAJO DE APELACIÓN de TAPIERO, Rodolfo Luis y otros en autos:**

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

TAPIERO, Rodolfo Luis y otros por Infracción Ley 24.769” (Expte. FCB 8191/2020/14/CA6)”, conocida también como causa “PIZZI”.

En efecto, tal decisión resulta inmotivada y abiertamente contradictoria -sostenimiento de la excarcelación y prisión domiciliaria a la vez y en la misma causa-, debiendo el magistrado resolver sobre la aplicación o no de medida de coerción alguna sobre el imputado en esta causa, **única y acumulada**, sin que deba analizarse su situación de sujeción al proceso por separado por el hecho de que entre sus objetos procesales se encuentre la investigación de dos asociaciones delictivas que se encontrarían vinculadas entre sí (conf. art. 123, CPPN).

Finalmente, como es sabido, los magistrados no se encuentran obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las constancias de la causa, sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones (Fallos, 311:571) y para la correcta solución del litigio (311:836).

Tampoco están obligados a tratar o a dar respuesta a todas las cuestiones planteadas por las partes, sino tan sólo las relevantes para la adecuada solución del asunto sometido a su decisión y, más aun, cuando la cuestión a decidir se encuentra restringida al examen concreto de los requisitos que debe cumplir -bajo pena de nulidad- el auto de procesamiento y el deber de fundamentación suficiente de las sentencias, como en el caso de autos.

Todo sin imposición de costas (conf. arts. 530 y 531 del CPPN). Así voto.-

La señora Jueza de Cámara Dra. Liliana Navarro, dijo:





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

Llegados los autos a estudio de la Suscripta, corresponde expedirme acerca de los recursos de apelación interpuestos en contra de la resolución dictada por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba con fecha 9 de diciembre de 2021.

I) En primer lugar, y con respecto al punto en el cual el Juez del primer voto sugiere declarar parcialmente inadmisibile el recurso de apelación interpuesto por la parte querellante Unidad de Información Financiera, en cuanto a aquellas decisiones que exceden su interés en este pleito (en particular, respecto de los delitos tributarios y la declaración de incompetencia de la justicia federal por los delitos de defraudación por administración fraudulenta), debo señalar que disiento con la solución propiciada por el señor Juez del primer voto. Doy razones:

La Ley 17.516 -Régimen de Representación Judicial del Estado-, prevé expresamente en su art. 4 que *"Sin perjuicio de la intervención que en el proceso penal corresponda a los fiscales en ejercicio de la administración pública, el Estado podrá asumir la función de querellante cuando se cometan delitos contra la seguridad de la Nación, los poderes públicos y el orden constitucional, la administración pública y el patrimonio o rentas fiscales."*

A su turno, la Ley 25.246 -modificada por Ley 26.683- creó la Unidad de Información Financiera, con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación -art. 5to. de la ley en trato, modificado por el art. 92 de la Ley 27.260-, estableciendo en su artículo 6to., que este organismo será el encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos -actual artículo 303 del CP-.

En la normativa citada, se enuncian una serie de tipos penales de los que "preferentemente" podrían provenir los activos financieros introducidos al circuito económico con el objeto de ocultar su origen ilícito.

Ahora bien, el Decreto Reglamentario Nro. 2226/2008, autoriza al titular de la UIF a *"intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigue la comisión de los delitos tipificados por la Ley N° 25.246 y modificatorias, en aquellos casos que así lo ameriten"*.

Dicho ello, cabe tener presente el criterio sentado recientemente -14.2.2023- por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en autos *"Pereyra Córdoba Campos, Jorge Héctor Pedro y otros s/ recurso de casación"* FCB 77139/2018/31/CFC1, en cuanto se sostuvo, por unanimidad, que la Unidad de Información Financiera posee legitimación subjetiva procesal para intervenir en el proceso como querellante particular en casos donde el delito investigado resulta o puede resultar el precedente del ilícito de lavado de activos.

En concreto, el Dr. Gustavo Hornos -en los autos de referencia- refirió que *"la hipótesis imputativa esgrimida por el titular de la UIF en el sentido que las conductas investigadas en la...causa podrían constituir un antecedente en los términos de la Ley 25.246, del delito de lavado de activos, se presenta...como demostrativa de un interés particular y legítimo..."* que permite reconocerle la legitimación procesal que pretende en el ejercicio de su rol de parte querellante en esta causa (CFCP, Sala IV, *"Pereyra Córdoba Campos, Jorge Héctor Pedro y otros s/recurso de casación"*; FCB

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

77139/2018/31/CFC1, Registro 52/2023 del 14.2.2023 Fdo.: Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky).

Así las cosas, dado que en la presente pesquisa se investiga el delito de lavado de activos, aprecio que la UIF tiene un interés cierto y directo, encontrándose habilitada para intervenir y recurrir la resolución en cuestión (arts. 82 y 432 del CPPN).

Al respecto, debe tenerse en cuenta lo esgrimido por la UIF en su calidad de querellante particular en cuanto sostiene en su informe presentado en los términos del art. 454 que su agravio se asienta en la función primordial otorgada por la ley 25.246 a la Unidad de Información Financiera de perseguir tanto los ilícitos precedentes como el Lavado de Activos, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en la persecución de dichos ilícitos.

En tal sentido, dicha parte trae a colación el requerimiento de instrucción de fecha 30.12.2020 en cuanto allí se consignó: *"... se puede afirmar que gran parte de las ganancias y lucro obtenidos de tales acciones fue objeto de operaciones de blanqueo, que habrían consistido en la compra/venta de in-muebles, vehículos automotores, títulos y otros activos, varios de ellos por valores distintos a los del mercado y adquiridos con dinero de origen ilícito."*

De esta manera, la conexión existente entre los delitos mencionados justifica la pretensión del organismo estatal para querellar en esta causa, pues su capacitación técnica específica redundará en un aporte encaminado a contribuir al desarrollo de la investigación propia del delito previsto en el artículo 303 del CP.

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

En razón de lo expuesto, soy del criterio que el recurso de apelación interpuesto por la parte querellante Unidad de Información Financiera es plenamente admisible.

II) Seguidamente, acerca de la propuesta del Juez preopinante de confirmar la resolución apelada en cuanto declaró la incompetencia material de la justicia federal para entender en la investigación y juzgamiento de los delitos de defraudación por administración fraudulenta - hechos nominados 95 y 96 del requerimiento de instrucción de fs. 4418/4420- y defraudación por administración fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública -hechos nominados 90 y 91 del requerimiento de instrucción de fs. 3059/3102-, debo señalar que disiento con la solución propiciada por el señor Juez preopinante.

Al respecto, considero que la estrecha vinculación existente entre los hechos que se ventilan en la presente causa genera la imposibilidad de escindir la investigación de los mismos, sin que ello pueda traducirse en un obstáculo para el éxito de la instrucción.

No puede soslayarse que en el año 2019 se denunció la existencia de una usina de facturas apócrifas y que luego de una importante investigación llevada adelante por AFIP y distintas fuerzas de seguridad, se promovió acción penal contra un grupo de personas que en principio conformaron una asociación ilícita que habrían generado miles de facturas falsas y una vez emitidas, habrían sido presentadas a fin de evitar el pago de diferentes tributos.

En ese contexto, se habrían evadido millones de pesos por parte de personas físicas y jurídicas, facilitando así maniobras de administración fraudulenta por parte de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

diferentes empresas y organismos públicos (tal como se describe en los hechos cuya investigación se pretende remitir a la justicia provincial).

Cabe subrayar, que Diego Vieyra Ferreyra -sindicado como jefe de la asociación ilícita investigada en autos- también fue imputado como partícipe necesario de la administración fraudulenta en cuestión.

Asimismo, debe valorarse que los delitos cuya competencia se pretende reconocer a la Justicia Ordinaria, no se podrían haber cometido sin el proceder delictivo de la asociación ilícita en cuestión en cuanto habría consumado la facturación apócrifa objeto del presente proceso penal.

En tal sentido advierto que, al encontrarse en manos de la justicia federal la dilucidación de los hechos que constituyeron la matriz inicial de las posteriores maniobras delictivas desplegadas por los encartados, ésta se encuentra en mejor posición y disposición para realizar todas las pesquisas que sean necesarias a los fines del esclarecimiento de los hechos investigados en autos.

Considero que la estrecha vinculación existente entre los delitos investigados representa un extremo determinante que aconseja que la investigación esté a cargo de un único tribunal a fin de garantizar la buena marcha de la administración de justicia (ver C.S.J.N., 29/11/2005, "CAVERI, Bernardo", jueces Petracchi, Highton, Maqueda, Zaffaroni y Argibay).

Lo contrario llevaría a una atomización de la causa, abriendo la puerta a una dilación innecesaria para el esclarecimiento de los presuntos hechos y la posibilidad de obtener un pronunciamiento en un tiempo oportuno,

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

vulnerando de ese modo principios de economía procesal que aconsejan la tramitación conjunta de la investigación.

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta los hechos investigados, razones de economía procesal, celeridad y debido proceso entiendo que resulta competente la justicia federal para entender en la investigación y juzgamiento de los delitos de defraudación por administración fraudulenta -hechos nominados 95 y 96 del requerimiento de instrucción de fs. 4418/4420- y defraudación por administración fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública -hechos nominados 90 y 91 del requerimiento de instrucción de fs. 3059/3102-, por las razones dadas (art. 37 del CPPN).

III) Seguidamente, con respecto a la situación procesal de los encartados Jorge Daniel Cuevas y Sebastián Toranzo por el delito de lavado de activos -hechos nominados 99 y 119, respectivamente-, debo señalar que disiento con la solución propiciada por el señor Juez del primer voto.

Mediante la resolución apelada, el Juez Federal N° 1 de Córdoba dispuso el sobreseimiento de Jorge Daniel Cuevas y la falta de mérito de Sebastián Toranzo respecto del delito de lavado de activos de origen ilícito (conf. art. 303 inc. 1 del CP).

Al respecto, advierto que los elementos de prueba reunidos hasta ahora resultan insuficientes para realizar un juicio de mérito respecto de la responsabilidad de los imputados de mención, siendo menester profundizar la investigación de la causa al efecto.

Tengo particularmente en cuenta que el procesamiento dictado en contra de los nombrados en orden al delito de asociación ilícita fiscal (art. 15 inc. "c" de la Ley





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

27.430), en carácter de autor (art. 45 del C.P.), se encuentra firme en el caso del imputado Toranzo y a partir del dictado de la presente resolución, lo mismo tendrá efecto respecto del imputado Cuevas a partir del desestimiento tácito del recurso de apelación interpuesto en su favor.

En ese orden, advierto que para descartar la imputación de lavado de activos efectuada por el Ministerio Público Fiscal, anclada en bienes y activos que habrían ingresado al patrimonio de los encartados durante el período, restan indagar en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por la instrucción.

Respecto de Cuevas, cabe apuntar que la imputación de lavado de activos reposa sobre la adquisición -con fecha 3.5.2019- de un automóvil marca BMW X4, año 2017, dominio AA892YK, por un valor que rondaría los \$2.500.000, sobre la adquisición -con fecha 5.5.2020- de un automóvil marca Mercedes Benz, año 2019, dominio AD124TH, por un valor que rondaría los \$3.983.000 y en la tenencia en su poder de un cheque por \$10.000, \$194.590 y USD 9.897, secuestrados en el marco del allanamiento de su domicilio.

A propósito del argumento de que el mencionado vehículo Mercedes Benz es de propiedad del hijo del imputado Cuevas y de su esposa, advierto que aún no se encuentra establecido y acreditado que estos tengan una remuneración o ganancias suficientes para su adquisición.

A su turno, con relación a Toranzo cabe referir que la imputación de lavado de activos reposa sobre la adquisición -con fecha 27.8.2018- de un automóvil marca Volkswagen Amarok, año 2018, dominio AD068VQ, por un valor que rondaría los \$1.275.000 y en la supuesta adquisición en el año 2019 de un total de USD 76.800.

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

Tampoco puede soslayarse que la capacidad económica descripta por el Juez instructor es una condición necesaria para desechar una imputación por lavado de activos pero a la luz de las constancias de la causa, la misma no se presenta como suficiente.

En el resolutorio apelado se presume una justificación en base al patrimonio de cada uno de los imputados sin fundar de manera circunstanciada dicha relación a fin de descartar que dichos activos sean producto de un rédito económico indebido proveniente de la asociación ilícita fiscal que integraban.

Es una práctica muy usual la de “mezclar” bienes procedentes de actividades delictivas con otros de carácter legítimo y de ese modo encubrir el carácter de éstos primeros. En orden a ello, considero que dicha hipótesis aún no ha sido dilucidada por la Instrucción.

En tal sentido, considero que si bien los activos en cuestión aparentemente se habrían integrado a los patrimonios de los encartados desde fuentes legales, considero que ello aún no se encuentra corroborado suficientemente como para resolver su situación procesal, sin examinar con mayor profundidad su origen a partir de medidas de prueba concretas que echen luz en tal sentido.

Estimo que la decisión adoptada en orden a los imputados Cuevas y Toranzo fue prematura, basada en una valoración de elementos de juicio meramente parcial, y que en autos restan pruebas por producir que permitan trazar una relación circunstanciada entre los activos apuntados en el requerimiento de instrucción y la capacidad económica de los encartados.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

Por lo tanto, deberá el Juez de instrucción adoptar las medidas que estime conducentes a fin de agotar la investigación.

Por consiguiente, y en atención a las razones dadas, considero que debe revocarse la resolución apelada dictada por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso el sobreseimiento de Jorge Daniel Cuevas y la falta de mérito de Sebastián Toranzo respecto del delito de lavado de activos de origen ilícito (conf. art. 303 inc. 1 del CP), debiéndose profundizar la investigación de conformidad a lo expresado en la presente resolución.

IV) Con respecto a la solución propiciada por el Juez del primer voto de declarar la nulidad parcial de la resolución apelada en cuanto dispuso trabar embargo sobre los bienes de los coimputados Natalia Soledad Vieyra Ferreyra, Ruth Noemí Díaz, Eduardo Enrique Mansilla, María Belén Gómez, Damián Gabriel Olivieri Brizuela, Martín José Dus, Jorge Daniel Cuevas y Sebastián Toranzo, debo decir que disiento con la misma.

En tal sentido, tengo especialmente en cuenta que esta medida cautelar tiene por finalidad garantizar de modo suficiente el pago de las costas del proceso, asegurando también las eventuales responsabilidades que puedan derivar del mismo.

Entiendo así que el monto fijado es razonable y está justificado en el presente caso (conforme art. 518 del C.P.P.N.).

V) Por último, debo decir que también disiento con el Juez del primer voto en cuanto considera que corresponde rechazar el agravio del Ministerio Público Fiscal en cuanto solicita el dictado de procesamiento de los imputados Pizzi, Zopetto, Barbieri y Tapiero respecto del

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

hecho nominado primero calificado como "Asociación ilícita fiscal".

En el voto precedente, se explicita que el Juez instructor ha esgrimido fundamentos suficientes para establecer la coexistencia de dos asociaciones ilícitas y sus vinculaciones, habiéndose resuelto oportunamente la situación procesal de los imputados nombrados en los autos: "PIZZI, Mauricio Andrés y otros por infracción Ley 24.769" (Expte. FCB 8191/2020).

De una atenta lectura de la resolución impugnada dictada con fecha 9.12.2021, en primer término advierto en que se realizó una disquisición de las dos asociaciones ilícitas fiscales que se encuentran emparentadas entre sí y seguidamente se dispuso diferir el tratamiento de la situación procesal de los imputados de mención hasta tanto esta Alzada se pronunciara respecto del procesamiento dictado con fecha 7.10.2020 por el Juez Federal de San Francisco, a los fines de no vulnerar el derecho de defensa y el principio de "non bis in ídem" y de seguridad jurídica, ya que se podría dar en la realidad que existan dos decisiones judiciales que versen sobre las mismas personas, por los mismos hechos, con la posibilidad también que sean contradictorias.

Al efecto, estimo preciso señalar que con fecha 7.12.2021 la Sala B de esta Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba se pronunció respecto de la situación procesal de los imputados en el marco del legajo "LEGAJO DE APELACIÓN de TAPIERO, Rodolfo Luis y otros en autos: TAPIERO, Rodolfo Luis y otros por Infracción Ley 24.769" (Expte. FCB 8191/2020/14/CA6).

De ese modo, el Juez Federal N° 1 de Córdoba contaba con la información necesaria para resolver la situación

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

procesal de los encartados Pizzi, Zopetto, Barbieri y Tapiero, a partir de los fundamentos y conclusiones alcanzadas en dicho resolutorio.

Por otro lado, cabe apuntar que con fecha 22.6.2022 el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba decretó la acumulación de los autos "PIZZI, Mauricio Andrés y otros por infracción Ley 24.769" (Expte. FCB 8191/2020) con los autos "DENUNCIADO: PLANELLS, Mariano y Otro s/ A DETERMINAR DENUNCIANTE: POMBA, Daniela Alejandra y Otro" Expte. FCB 8894/2021, a partir de una declaración de incompetencia por conexidad dispuesta por el Juzgado Federal de San Francisco.

De ese modo, la Instrucción de las causas mencionadas en las que se ventila la responsabilidad penal de los imputados Pizzi, Zopetto, Barbieri y Tapiero, quedo a cargo del Juez Federal N° 1 de Córdoba.

En mérito de todo lo expuesto, y atendiendo a las circunstancias actuales de la causa, estimo que corresponde ordenar al Juez instructor que se pronuncie con la mayor celeridad posible respecto de la situación procesal de los encartados, a fin de evitar mayores dilaciones que puedan comprometer el derecho de defensa de los imputados.

VI) Por lo demás, debo señalar que comparto las conclusiones y soluciones propiciadas por el señor Juez preopinante, y en consecuencia, me expido en igual sentido. Así voto.-

El señor Juez de Cámara Dr. Abel G. Sánchez Torres, dijo:

Puestos nuevamente estos autos a despacho con motivo de la recirculación del expediente, habiéndose pronunciado la señora Jueza de Cámara Dra. Liliana Navarro en disidencia parcial respecto del voto del suscripto que

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

lidera esta encuesta, corresponde entonces efectuar las siguientes consideraciones:

I.- En punto a la admisibilidad del recurso de apelación deducido por la parte querellante Unidad de Información Financiera (UIF) en cuanto a aquellas decisiones que excederían su interés legítimo en este proceso, en particular respecto de los delitos tributarios y los delitos de defraudación por administración fraudulenta, cabe ratificar la posición asumida por el suscripto en el convencimiento del resguardo al principio de legalidad y la garantía de “paridad de armas” como expresión de debido proceso y derecho de defensa en juicio (conf. art. 18 de la CN).

La intervención de la UIF como querellante en los procesos penales encuentra fundamento en la decisión política del Estado Argentino, mediante la sanción previa de una ley del Congreso de la Nación que, en determinados casos, así lo autoriza. Es decir, los términos de su intervención en tal carácter se encuentran definidos en la ley y su reglamentación, siendo deber inexorable de los magistrados evaluar razonable y prudencialmente su alcance y extensión en cada caso, de modo compatible con la garantía del debido proceso y defensa en juicio.

Dicha valoración exige mayor cautela cuando -como en este caso- frente a los delitos tributarios sobre los que la UIF pretende se le acuerde legitimación procesal, podrían coexistir como acusadores particulares, junto al Ministerio Público Fiscal, dos organismos estatales nacionales de envergadura, a saber: AFIP-DGI y UIF, uno de los cuales se encuentra especializado en esta singular materia penal y con facultad legal para asumir la función de querellante (art. 23 del Régimen Penal Tributaria conf.

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

ley 27.430). Por cierto, ello sucedería de adoptarse una interpretación amplísima de las atribuciones legales del segundo.

En este sentido, la invocación del art. 6 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias que efectúa la colega para sostener la legitimación procesal de la UIF en el cuestionamiento de delitos tributarios y defraudaciones por administración fraudulenta aparece, contrariamente, como la justificación normativa de su imposibilidad de intervención por fuera de su ámbito de competencia legal circumscripta al delito de lavado de activos de origen ilícito y financiación del terrorismo.

Adviértase, al respecto, que la normativa citada establece que la Unidad de Información Financiera será el encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos. Por cierto, esta es su génesis y fundamento constitutivo: prevenir e impedir el delito de lavado, para lo cual analiza, procesa y transmite la información pertinente a tal fin.

Asimismo, el Decreto Reglamentario N° 2226/2008 prevé que la UIF podrá *"intervenir como parte querellante en los procesos en que se investigue la comisión de delitos tipificados por la Ley N° 25.246 y modificatorias..."*. Es decir, la autorización legal comprende los delitos tipificados en dicha ley, a saber: lavado de activos de origen ilícito y financiación de actividades terroristas.

Por otra parte, en el voto que antecede se citan las previsiones del art. 82 del CPPN y se señala que la UIF tendría un interés cierto y directo, por ello se encontraría habilitada a recurrir la resolución en toda su extensión. De acuerdo a la cita normativa y las razones

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

dadas por la señora Jueza de Cámara, presumo que se considera a la Unidad de Información Financiera como "ofendida penalmente" por todos estos delitos (tributarios y contra la propiedad), cuando en rigor lo que habilita su intervención en el proceso no es su carácter de ofendido penalmente, sino ni más ni menos que la existencia de una **ley especial** que así lo dispone. Dicha ley, en términos estrictos, establece cuáles son las facultades que tiene la UIF para intervenir en el proceso penal, coadyuvando con transmisión de información o bien como parte acusadora, por lo cual resulta inadecuado que la judicatura le otorgue mayores aptitudes que las establecidas por el legislador nacional.

Por otra parte, no debe soslayarse que admitir las pretensiones impugnativas de la UIF con base en el argumento de que el delito por el cual se le ha atribuido legitimación procesal (lavado de activos, art. 303 del Código Penal) contempla las "*ilicitudes precedentes*", llevaría al extremo de validar su legitimación activa en todo proceso casi sin restricciones, toda vez que cualquier delito con contenido patrimonial previsto en la legislación penal argentina podría constituirse, por caso, en delito precedente al lavado de activos. Ello implicaría, en la práctica, desnaturalizar la finalidad legal del organismo estatal (prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo) al admitirlo como acusador en procesos por delitos comunes, concomitante y conjuntamente con la actuación del Ministerio Público Fiscal.

En definitiva, la custodia de la vigencia de la Constitución Nacional y las normas dictadas en su consecuencia me conduce a preguntar: ¿qué importancia se

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

le asigna a los límites impuestos por la ley a la intervención de organismos estatales en los procesos penales? Y, por contrapartida, ¿qué relevancia tiene la tan proclamada autonomía del delito de lavado de activos respecto de los ilícitos precedentes?

En este punto, cabe resaltar que los jueces, desde la alta función de administrar justicia, nos encontramos compelidos a evaluar los efectos concretos de las decisiones que adoptamos. De este modo, si validamos la admisión genérica de la UIF para intervenir como querellante en los procesos penales seguidos con relación a **cualquier ilícito precedente del lavado**, cabe preguntarnos: ¿qué sucede con los delitos precedentes cuyo juzgamiento pertenece a las jurisdicciones locales? ¿la Unidad de Información Financiera podría constituirse en querellante tanto en el proceso penal federal por lavado de activos, como también en los procesos penales provinciales por delitos exorbitantes al fuero federal?

Además, en estos casos, el imputado por un "ilícito precedente" federal y por lavado de activos ¿deberá resistir la doble o, en el caso de los delitos tributarios, triple acusación penal? mientras que el imputado por un ilícito precedente de competencia provincial y lavado de activos de orden federal ¿tan solo uno? En este marco, ¿podría predicarse la igualdad ante los tribunales?. En cualquiera de los casos, el ingreso de la UIF a un proceso penal federal por lavado de activos de origen delictivo le otorgaría una suerte de carta abierta de persecución y acusación hacia todo lo que pudiera presentarse como conexo por vincularse con los ilícitos precedentes.

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

En otro punto, respecto del argumento esbozado por la Dra. Navarro acerca de que la participación de la UIF como querellante en este proceso contribuirá a la mejor investigación de todos los delitos, considero que tal mención no atiende ni repara en los poderes jurídicos, calificaciones técnicas e infraestructura material y humana con que cuenta tanto el Ministerio Público Fiscal de la Nación como la Administración Federal de Ingresos Públicos con consabidas aptitudes para lograr el éxito de las investigaciones por delitos tributarios.

Por último, cabe señalar que el pronunciamiento de la Sala IV de la CFCP de fecha 14.02.2023 reseñado por la Dra. Navarro, sin perjuicio de que no responde a los argumentos concretos aquí dados, fue dictado en el marco de otras actuaciones y no se trata de un fallo plenario, por lo cual no se presenta como una decisión vinculante para este proceso, ni de carácter obligatorio general. Por todo lo expuesto, mantengo la posición adoptada en este punto, la cual integro con lo aquí expuesto.

II.- En segundo lugar, con relación a la incompetencia material de la justicia federal para entender en la investigación y juzgamiento de los delitos de defraudación por administración fraudulenta -hechos 95 y 96- y defraudación por administración fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública -hechos 90 y 91- cabe reiterar, no como mera declamación sino como efectiva garantía del Estado Federal y resguardo del sistema político previsto en nuestra Constitución Nacional, que la competencia del fuero federal debe interpretarse en todos los casos de manera restrictiva.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

En efecto, las reglas que regulan la competencia dentro de este fuero de excepción requieren de la existencia de determinados presupuestos de admisibilidad, cuyas pautas se encuentran específicamente regidas por la Constitución Nacional (art. 116), la Ley 48, el Decreto-Ley 1285/58 y el CPPN (art. 33) que determinan concretamente las bases sobre las cuales aquella se distribuye.

Corresponde recordar que la justicia federal ejerce la función jurisdiccional en todos aquellos casos en que está en juego directo un interés federal, debiendo tenerse presente que, tratándose la misma de una justicia de "excepción" y "limitada", el interés federal invocado por las partes debe encontrar apoyatura en circunstancias decisivas, como son: la materia en cuestión (normas federales), las personas intervinientes o el territorio donde se producen los hechos.

El respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales exige que se reserve a los jueces locales el conocimiento y decisión de las causas que, en lo sustancial, versan sobre aspectos propios de su derecho público, sin perjuicio de que las cuestiones federales que también puedan comprender este tipo de procesos sean susceptibles de una adecuada tutela por vía del recurso extraordinario (Fallos: 312:282; 312:1297; 314:94).

Lo reitero, la jurisdicción federal se activa sólo en supuestos de excepción, ya sea porque las partes que intervienen en el pleito poseen características específicas o porque la materia sometida a decisión es de orden federal.

Calificada doctrina ha dicho que: "...la competencia federal se relaciona directamente con el sistema federal e

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

institucional del país, y se deriva de la división jurisdiccional que emana de la Constitución Nacional. Es de orden público y constitucional, taxativo, inalterable, limitado y de excepción. Procede siempre que haya un interés nacional en juego, y se impone en todos aquellos procesos que requieran de la interpretación y aplicación del derecho federal conforme lo exige el art. 116 de la Constitución Nacional y el art. 2º inc. 1º de la Ley 48" (Palacio de Caeiro, Silvia B., "Competencia Federal Civil-Penal", Capítulo II, La Competencia Federal, págs. 46/48 y 183, Ed. La Ley, 1999).

Por su carácter excepcional, privativa y limitada en relación a la justicia ordinaria, la intervención de la competencia federal resulta procedente sólo en aquellos casos en que nuestra Carta Magna y las leyes lo hayan dispuesto de esta manera. Esto así, lo reitero, en virtud de la delegación competencial que las provincias han efectuado de manera expresa, manteniendo para sí las atribuciones no delegadas (art. 121 C.N.) y conservan todo el poder no delegado al gobierno federal en el marco del respeto a las autonomías provinciales establecido en el art. 5º de la Carta Magna.

En este orden, los hechos delictivos que no comprometen o afectan el interés federal, cuya competencia de excepción no está prevista legalmente, ni se encuentran comprendidos en las previsiones de los arts. 116 y 117 de la CN o en los supuestos que contempla el artículo 33 del CPPN, resultan de competencia de los estados provinciales que gozan de plena autonomía.

Por el contrario, sólo en caso de posible afectación, directa o indirecta, a la seguridad nacional o a alguna de sus instituciones, correspondería determinar la

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

competencia de la justicia federal, lo cual en autos no se ha visto acreditada ni invocado.

Expuesto cuanto precede, debo decir que considero impertinente en este caso la alegación de que la investigación disociada implicaría un posible "obstáculo para el éxito de la instrucción" con motivo de la vinculación entre los hechos. Ello, en tanto la hipótesis acusatoria señala que los responsables de entes jurídicos públicos del Estado provincial y de sociedades comerciales se habrían servido o utilizado facturas comerciales apócrifas creadas por la asociación criminal aquí investigada, a fin de defraudar a sus respectivas administraciones.

Al respecto, corresponde señalar, en resguardo de las autonomías provinciales, que no resulta adecuada la invocación de razones genéricas de conveniencia de investigaciones conjuntas, ni que la justicia federal se encontraría "en mejor posición y disposición para realizar todas las pesquisas que sean necesarias" (Sic) y menos aún de algún supuesto de competencia por conexión, entre **hechos delictivos independientes con competencia material de dos órdenes estatales distintos.**

Debo decir también que la existencia de una presunta organización que habría confeccionado facturas apócrifas, luego utilizadas por distintos usuarios con fines defraudatorios que por cierto no involucran las arcas, el Tesoro o el patrimonio del Estado Nacional, se presentan como supuestos delictivos ajenos a este fuero federal por los cuales no procede investigación conjunta, y no observo obstáculos o impedimentos a su radicación en las sedes judiciales que correspondan. No obstante, en caso de considerárselo de utilidad y conveniencia, nada obsta a la

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

concertación de acuerdos de cooperación entre los Ministerios Públicos Fiscales de los órdenes nacional y provincial, lo cual permitiría, en su caso, avanzar en cada una de las investigaciones sin vulnerar las jurisdicciones propias de cada orden estatal.

III.- En cuanto a la situación procesal de los imputados Jorge Daniel Cuevas y Sebastián Toranzo por el delito de lavado de activos -hechos nominados 99 y 119, respectivamente-, en los cuales propicie la confirmación de la resolución dictada por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba en tanto dispuso el sobreseimiento del primero y la falta de mérito del segundo, con motivo de la disidencia postulada por la señora Jueza de Cámara preopinante, corresponde explicitar las razones que llevaron a la adopción de este temperamento, sin perjuicio de la remisión a los argumentos brindados por el magistrado de la primera instancia (conf. art. 455 del CPPN).

En primer término, debo decir que, en lo conceptual, comparto la mención acerca de que es una práctica usual “mezclar” bienes procedentes de actividades delictivas con otros de carácter legítimo y, de ese modo, encubrir el carácter de éstos primeros. Si bien la hipótesis de diagnóstico general es válida, en el caso concreto no se propone una solución a esta particular problemática interpretativa y principalmente probatoria que contemple los principios que informan el proceso penal, tales como los principios de inocencia y culpabilidad.

Se debe decidir si los bienes de los imputados que contienen fondos de origen lícito y otros presuntamente ilícitos, resulta totalmente contaminada o sólo de forma proporcional a la parte que lo está, posteriormente





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

aplicado al blanqueo de capitales. Al respecto, caben tres posibilidades: considerarlos idóneos para el blanqueo por estar originados parcialmente en actividades delictivas; considerarlos bienes legítimos por ser parcialmente de origen legal o, como tercera alternativa, entender que son bienes de origen ilegal sólo en la parte que tenga esa procedencia.

Desde esa perspectiva y como primera aproximación, se ha afirmado que *"... la procedencia criminal de los bienes que son objeto de blanqueo no requiere sino la comprobación de una actividad delictiva previa de modo genérico que, según las circunstancias del caso, permita la exclusión de otros orígenes posibles, sin que sea necesaria ni la demostración plena de un acto delictivo específico ni de los concretos partícipes en el mismo..."* (CFCP, Sala I, causa 6754 "Orentrajch, Pedro y otro s/recurso de casación", Reg. 8622; el destacado me pertenece).

En efecto, para acreditar la configuración del delito de lavado de activos, el Estado debe poder individualizar los bienes que provienen de un ilícito penal. Si bien en muchos casos puede resultar de compleja prueba, la necesidad de diferenciar los activos de fuente ilícita de aquellos de procedencia lícita, tanto en los casos de transformación, conversión o mezcla, se encuentra expresada implícitamente tanto en la Convención de Viena -art. 5º, referente al decomiso- como en la Convención de Palermo -art. 12, que regula el decomiso e incautación- (en este sentido: Caro Coria, "Sobre el tipo básico de lavado de activos", en "Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa" (ADPE), N° 2ª/2012, p. 24, citado en RIQUERT, Marcelo "Régimen Penal Tributario y Previsional",

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

Ed. Hammurabi, 2ª edición, Buenos Aires, año 2018, p. 422).

Al respecto, Blanco Cordero refiere que la conexión entre el bien y la actividad delictiva previa tiene que ser de tipo causal y, sobre ello, señala que *“las teorías desarrolladas por la ciencia jurídico-penal para afirmar la existencia de una relación a la causalidad entre un comportamiento y un resultado nos sirven para determinar qué bienes están conectados causalmente con una actividad delictiva previa. Siguiendo la teoría más comúnmente aceptada de la equivalencia de las condiciones, y recurriendo a la fórmula de la conditio sine qua non para su aplicación, podemos afirmar que **un bien procede de una actividad delictiva previa cuando, suprimiendo mentalmente tal actividad previa, el bien desaparecería en su concreta configuración.** Y esta concreta configuración incluye claramente todo lo relacionado con la existencia, composición material, valor o titularidad económica del bien. En sentido negativo, no existirá nexos causal si la actividad previa no constituye una condición de la situación patrimonial actual o la existencia del bien. Una actividad delictiva previa es causa de un bien cuando repercute directa o indirectamente en su existencia, composición material, valor, en su titularidad, posesión o custodia... Existe también conexión causal y, por lo tanto, contaminación, cuando suprimiendo mentalmente la actividad delictiva el bien no se encuentra en el patrimonio de un sujeto”* (BLANCO CORDERO, Isidoro “El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, ISSN 1695-0194, pág. 22; el destacado me pertenece).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

Como anticipé, se han ensayado distintas tesis respecto de la solución que cabe darle a los supuestos de mezcla o confusión de activos lícitos e ilícitos, no obstante lo cual considero adecuada a los principios penales emergentes de nuestra Constitución Nacional aquella por la cual se considera que, en caso de mezcla, las adquisiciones fueron realizadas con los fondos lícitos, a menos que los bienes sustitutos o subrogados exceden aquellos, lo cual implicaría -en dicho tramo- la posible configuración del delito en cuestión.

En este sentido, en la jurisprudencia se ha destacado que: *"... si bien cualquier actividad económica puede ser utilizada para blanquear capitales, algunos sectores son más idóneos que otros... dentro de todas las técnicas que existen, resulta común la intermediación de personas jurídicas para ocultar la titularidad real y el origen de los bienes utilizados, la compra venta de inmuebles, siendo éste un vehículo habitual de blanqueo, ya que son bienes relativamente líquidos y su valor no es fácil de estimar. También destaca que la mezcla de dinero lícito dificulta enormemente la prueba del delito y la identificación del capital sucio (Cfr. [Mateo Bermejo] Prevención y Castigo del Blanqueo, un análisis jurídico-económico, Ed. Marciel Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2015)"* (CFSM, en autos: "CORVO DOLCET", Expte. FSM 45/2017/14/CA6, rta. 27.11.2018; el destacado me pertenece).

Expuesto cuanto precede, corresponde adentrarme al análisis de la situación procesal de los imputados Cuevas y Toranzo.

a) Situación procesal de Jorge Daniel Cuevas:

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

En primer término, respecto de Cuevas cabe referir que si hubo ganancias ilícitas generadas por la asociación ilícita en cuestión, no se probó su utilización o empleo para la adquisición de los dos vehículos sindicados en la imputación seguida en contra de Jorge Cuevas. En este sentido, su perfil patrimonial ante AFIP-DGI, los informes de dominio de los automóviles respecto de las fechas de adquisición y enajenación, y sus propias manifestaciones defensivas en declaración indagatoria, se presentan contestes y congruentes y permiten arribar al juicio de certeza seguido en estos autos (fs. 4882).

Al respecto, conforme señala el propio Instructor, del perfil patrimonial de AFIP surge que el imputado Jorge Daniel Cuevas sinceró -conforme la Ley N° 27.260- USD 296.200 (dólares estadounidenses doscientos noventa y seis mil doscientos), en el período 2016. A su vez, se acreditó que adquirió el vehículo BMW X1 dominio IYQ093 en el año 2013 (es decir, previo a los hechos bajo investigación), el cual resultó vendido en el año 2019 en una fecha similar a la de la adquisición del otro vehículo sospechado de ser objeto de maniobras de lavado. A su vez, en su declaración de Ganancias de Personas Humanas presentadas en Junio del 2020 declaró más de un millón de pesos en distintos conceptos. Tampoco escapa al suscripto que la imputación no da cuenta, siquiera con una estimación aproximada, de qué montos de dinero ilícito habría gozado el imputado y que luego resultó mezclado con sus ingresos lícitos, en qué cuentas o bien algún elemento en particular que permite vislumbrar la trazabilidad del presunto dinero espurio.

Como se advierte, respecto de Cuevas el Juez agotó la investigación tendiente a determinar la existencia de las





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

maniobras imputadas, logrando acreditar la existencia en el patrimonio del encartado de capitales lícitos suficientes y su correlación económico-financiera con los bienes adquiridos lo cual, conforme la tesis expuesta y en virtud del principio de inocencia, deben reputarse originados en aquel dinero ilícito. Por otra parte, exigir la prueba de con qué dinero se adquirieron, por su carácter esencialmente fungible, implicaría la producción de prueba "diabólica", es decir, la prueba de la no utilización en este caso de dinero de procedencia lícita.

b) Situación procesal de Sebastián Toranzo:

Distinta solución merece la situación procesal del encartado Sebastián Toranzo respecto al hecho de lavado de activos cuya comisión se le atribuye -nominado 119-, en tanto el magistrado dio cuenta fundada de la presunta capacidad económica del nombrado para la adquisición de un automóvil Volkswagen Amarok (mod. 2018) y de la adquisición de divisas de moneda extranjera (dólares estadounidenses) por un monto de USD 76.800,00, que el Ministerio Público Fiscal sindicó como adquirido de fuente ilícita (conf. art. 303, inc. 1, del Código Penal).

En cuanto a dicha imputación, debo resaltar dos cuestiones de trascendencia probatoria. Por un lado, en cuanto a la tenencia de divisas, la circunstancia de que no obra en el expediente prueba que verifique la efectiva adquisición de las divisas en cuestión y, por otro lado, que si bien la capacidad económica no excluyente de la comisión del delito de lavado de activos, en el caso de autos obran probanzas que dan cuenta de la existencia de ingresos y bienes declarados de presunta fuente lícita, a cuya valoración del Instructor remito.

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

Ahora bien, si bien la condición económica de Sebastián Toranzo justificaría -en principio- la adquisición y tenencia de los bienes en cuestión, no se advierte reunido aún la certeza exigida para el dictado del sobreseimiento en su favor, debiendo confirmarse la falta de mérito oportunamente dictada (conf. art. 303 inc. 1 del CP y art. 309 del CPPN).

IV.- En punto a los embargos cuya declaración de nulidad propicio, cabe señalar que este magistrado no afirmó que sean irrazonables o injustificados, sino que lo que se reclama es que se den las razones de la estimación, la cual fue definida por idénticos montos sin reparar en las particulares circunstancias de cada imputado y su compromiso procesal. Es decir, la nulidad se sustenta en la ausencia de fundamentos que permitan conocer, tanto a las partes como a este Tribunal revisor, las razones de la determinación de tal monto y no otro para cada uno de los imputados de autos.

V.- Por último, respecto del agravio sostenido por el Ministerio Público Fiscal alusivo a la necesidad de resolver la situación procesal de los imputados Pizzi, Zopetto, Barbieri y Tapiero en el hecho nominado primero de “asociación ilícita fiscal” en la cual sostuve que “el magistrado instructor, con base en el mérito reunido, ha esgrimido fundamentos suficientes para establecer la coexistencia de las dos asociaciones ilícitas y sus vinculaciones, habiéndose resuelto oportunamente la situación procesal de los imputados nombrados en los autos: “PIZZI, Mauricio Andrés y otros por Infracción Ley 24.769” (Expte. FCB 8191/2020)”, resulta admisible la solución propuesta por la señora Jueza de Cámara, Dra. Liliana Navarro en orden a que el señor Juez Instructor se





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

pronuncie respecto de la situación procesal de los encartados de mención, empero considero que, previamente, deberá correrle vista al Ministerio Público Fiscal a fin de que se expida respecto de los hechos de asociación ilícita fiscal promovidos en ambos sumarios, sea mediante su ratificación, reformulación o ampliación, a fin de establecer con precisión los contornos y los implicados en los hechos, con base en las pruebas colectas en ambos sumarios y a partir de un análisis global de los sucesos bajo investigación.

La circunstancia de que se hayan acumulado las actuaciones en virtud de la existencia de conexidad subjetiva no significa necesariamente que todos los imputados hubieran participado de la misma asociación ilícita, ni que se vinculen en un plano de jerarquías verticales, con sujeción a un centro de decisiones común. De hecho, lo que postula provisionalmente el magistrado es que, hasta el momento, se vislumbra la existencia de dos bandas criminales autónomas, vinculadas entre sí, que habrían compartido recursos y procedimientos pero con independencia en sus acciones y designios.

En efecto, la acumulación de ambas causas, en razón de la evidente identidad de objetos y sujetos procesales, obliga a advertir el posible solapamiento de hechos y el riesgo a habilitar una doble persecución penal indebida y al dictado de sentencias contradictorias, con la posible afectación a la garantía constitucional de *ne bis in idem* (art. 18 de la CN y art. 1 del CPPN).

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de reconocerle rango constitucional, ha afirmado que tal principio no veda únicamente la aplicación de una nueva sanción por un hecho anteriormente

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

penado, sino también la exposición al riesgo de que ello ocurra, mediante un nuevo sometimiento a juicio de quien ya lo ha sufrido por el mismo hecho, agravio no redimible ni aún con el dictado de una ulterior sentencia absolutoria (conf. T.61.XXIII. Taussing, Jorge F s/ arts. 109 y 110 del CP", rta. 30/4/91; y P. 25. XXVII, "Pelugo, Diego Pedro s/ denuncia por desacato", rta. 6/2/96; el destacado me pertenece).

Asimismo, la garantía en cuestión integra el contenido de distintos Tratados Internacionales de Derechos Humanos, encontrando previsión expresa en el art. 17, inciso 7, del Pacto Internacional de Derechos Humanos (PIDCP); artículo 8, inciso 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y en el artículo 4, del protocolo 7, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CPDHLF), entre otros.

Estimo que la valoración segmentada de los hechos investigados en diferentes causas, en sus distintos recortes punibles, dificulta la correcta administración de justicia y el debido resguardo de las garantías procesales acordadas a los distintos sujetos procesales, como también la correcta aplicación de la ley penal y sus severidades a quienes resulten penalmente responsables, en caso de que corresponda.

Por ende, considero que corresponde que el señor Juez Federal interviniente corra vista al Ministerio Público Fiscal a fin de que se pronuncie respecto del hecho nominado primero calificado provisoriamente como "asociación ilícita fiscal" precisando sus circunstancias y sujetos intervinientes, conforme a las consideraciones dadas en este punto, luego de lo cual deberá resolver la

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

situación procesal de lo imputados Pizzi, Zopetto, Barbieri y Tapiero con relación al hecho nominado primero de "asociación ilícita fiscal". Así voto.-

El señor Juez de Cámara Dr. Julián Falcucci, dijo:

Coincido en un todo con las consideraciones jurídicas hechas en los votos del Juez Abel G. Sánchez Torres y emito el mío en igual sentido.

Por lo expuesto;

SE RESUELVE:

Por unanimidad:

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación deducido por el Dr. Facundo Cortés Olmedo en representación Leuterio Carlos Bonetto, en contra de la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021, en cuanto dispuso la falta de mérito de su asistido en orden al delito de lavado de activos de origen delictivo que le fuera imputado (conf. art. 311 y 432 del CPPN).

II.- TENER POR DESISTIDO TÁCITAMENTE los recursos de apelación interpuestos con fecha 15.12.2021 por el señor abogado co-defensor Dr. Claudio Martín Juárez Centeno, en representación de los imputados Diego Alberto Vieyra Ferreyra y Jorge Daniel Cuevas (fs. 6421/6423 y 6424/6428, respectivamente), en contra de la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el señor Juez Federal N° 1 de Córdoba (conf. arts. 454 del CPPN y Acuerdo 276/2008 de este Tribunal). Con costas (conf. art. 443 del CPPN).

III.- TENER POR DESISTIDO PARCIAL Y FUNDADAMENTE el recurso de apelación interpuesto por el señor Fiscal Federal N° 1 de Córdoba con fecha 14 de diciembre de 2021, en contra del punto resolutivo 20) de la resolución dictada 9 de diciembre de 2021 por el señor Juez Federal

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

Nº 1 de Córdoba, conforme lo expuesto en los Considerandos (arts. 443 y 453 del CPPN).

Por mayoría:

IV.- DECLARAR PARCIALMENTE INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la parte querellante Unidad de Información Financiera, en cuanto a aquellas decisiones que exceden su interés en este pleito, conforme lo expuesto en los Considerandos (conf. arts. 432, 435 y 444 del CPPN y arts. 303 del Código Penal, en función de la Ley 25.246, modificada por la ley 26.683).

Por unanimidad:

V.- RECHAZAR el planteo de nulidad por vicios en la fundamentación de la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba (conf. art. 123, en función de los requisitos establecidos en los arts. 306 y 308 del CPPN).

Por mayoría:

VI.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, en cuanto declaró la **incompetencia material** de la justicia federal para entender en la investigación y juzgamiento de los delitos de **defraudación por administración fraudulenta** -hechos nominados 95 y 96 del requerimiento de instrucción de fs. 4418/4420- y **defraudación por administración fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública** -hechos nominados 90 y 91 del requerimiento de instrucción de fs. 3059/3102-, debiendo el Juez Federal actuante remitir los antecedentes pertinentes de la causa a la Justicia Ordinaria, para la continuación del trámite que por ley corresponda (conf. art. 172, 173 inc. 7 y 174 inc. 5, del CP y art. 33, primer párrafo inc. "e" y "c" y art. 35 del CPPN).

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

Por unanimidad:

VII.- REVOCAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto declaró la **incompetencia material** de la justicia federal para entender en la investigación y juzgamiento de los delitos de lavado de activos de origen ilícito -hechos 97, 101, 102, 103 y 109- debiendo continuar la causa según su estado (conf. art. 303, inc. 1 e) inc. 3, del CP y art. 33, primer párrafo, inc. e) y c) y art. 35 del CPPN).

VIII.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso el **PROCESAMIENTO** de **Martín José Dus (DNI 33.030.025)** en orden al delito de asociación ilícita fiscal -hecho nominado primero- en carácter de autor (art. 15 inc. c) del Régimen Penal Tributario conf. Ley 27.430, art. 45 del CP y art. 306 del CPPN).

IX.- REVOCAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso el **SOBRESEIMIENTO** de **Cristián Debarre (DNI 21.397.187)** en orden al delito de asociación ilícita fiscal -hecho nominado primero-, y disponer su **PROCESAMIENTO** en carácter de partícipe necesario, debiendo el señor Juez Federal interviniente pronunciarse sobre la procedencia o no de la prisión preventiva y demás medidas cautelares (art. 15 inc. c) del Régimen Penal Tributario conf. Ley 27.430, art. 45 del CP y art. 306 del CPPN).

X.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso el **SOBRESEIMIENTO** por extinción de la acción penal por amnistía de **Edsel Daniel Destefanis, María José Martínez Pizzichini, Paola Andrea Arévalo, María Cecilia Dolores Ribera Ardiles, Federico Carlos**

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

Dellamaggiore y Germán Daniel Destefanis, en relación al delito de evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas -hechos nominados 75 y 76 del requerimiento de instrucción- (conf. art. 279 -1, 2 inc. "d" y 15 inc. "d"- de la ley 27.430; art. 336 inc. 1 del CPPN y art. 10 de la ley 27.541).

XI.- REVOCAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso la **SUSPENSIÓN** de la acción penal con relación a **Sergio Gabriel Sosa, Cristian Debarre y Mario Ernesto Casco** y **DISPONER** la **REANUDACIÓN** de la acción penal y del cómputo de la prescripción de los hechos nominados 73, 74, 89, 93, 94, 117 y 118 del requerimiento de instrucción, presuntamente configurativos del delito de evasión tributaria agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas (conf. art. 279 - 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "d" de la ley 27.430, y art. 10 de la ley 27.541).

XII.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso la **SUSPENSIÓN** de la acción penal con relación a **Andrés Pinto, Leandro Paolo Srur y Martín Alejandro Sarmiento** en orden a los hechos nominados 77 y 78 del requerimiento de instrucción, presuntamente configurativos del delito de evasión tributaria agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas (conf. art. 279 - 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "d" de la ley 27.430, y art. 10 de la ley 27.541).

XIII.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso la **SUSPENSIÓN** de la acción penal con

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

relación a **Jonathan Nahuel Suarez Cavalieri** en orden al hecho nominado 80 del requerimiento de instrucción, presuntamente configurativo del delito de evasión tributaria agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas (conf. art. 279 - 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "d" de la ley 27.430, y art. 10 de la ley 27.541).

XIV.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso la **SUSPENSIÓN** de la acción penal con relación a **César Eduardo Cappella, Óscar Luque y Fernando Sciarra Villalba** en orden a los hechos nominados 81 y 82 del requerimiento de instrucción, presuntamente configurativos del delito de evasión tributaria agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas (conf. art. 279 - 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "d" de la ley 27.430, y art. 10 de la ley 27.541).

XV.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso la **SUSPENSIÓN** de la acción penal con relación a **Patricio Rolando González** en orden al hecho nominado 85 del requerimiento de instrucción, presuntamente configurativo del delito de evasión tributaria agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas (conf. art. 279 - 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "d" de la ley 27.430, y art. 10 de la ley 27.541).

XVI.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso la **SUSPENSIÓN** de la acción penal con relación a **Leuterio Carlos Bonetto** en orden al hecho nominado 86 del requerimiento de instrucción,

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

presuntamente configurativo del delito de evasión tributaria agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas (conf. art. 279 - 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "d" de la ley 27.430, y art. 10 de la ley 27.541).

XVII.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso la **SUSPENSIÓN** de la acción penal con relación a **Walter Ariel Ghione y Andrés Pollano** en orden al hecho nominado 90 del requerimiento de instrucción, presuntamente configurativo del delito de evasión tributaria agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el concurso de dos o más personas (conf. art. 279 - 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "d" de la ley 27.430, y art. 10 de la ley 27.541).

XVIII.- REVOCAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso el **SOBRESEIMIENTO** de **Silvina María Valeria Rincón (DNI 33.586.956)** en orden al delito de evasión tributaria agravada -hechos nominados 73, 74, 89, 93, 94, 117 y 118 -, y disponer en su favor la **FALTA DE MÉRITO**, debiendo proseguir la investigación a su respecto (conf. arts. 1, 2 inc. "d" y 15 inc. "d" del Régimen Penal Tributario conf. Ley 27.430 y art. 309 del CPPN).

XIX.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso el **SOBRESEIMIENTO** de **Mario Morselli y Augusto Boero** en orden al delito de lavado de activos de origen ilícito -hecho nominado 104 y 105, respectivamente- (conf. art. 303 inc. 1 del CP y art. 336, inc. 3, del CPPN).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

XX.- REVOCAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso la **FALTA DE MÉRITO** de **Martín Alejandro Sarmiento, César Eduardo Cappella, Fernando Sciarra Villalba, Leandro Paolo Srur, Mauricio Andrés Pinto, Patricio Rolando González y Leuterio Carlos Bonetto** y **DISPONER** la suspensión de la acción penal y del cómputo de la prescripción de los delitos de lavado de activos de origen ilícito -hechos nominados 100, 106, 107, 110, 111, 112 y 113, respectivamente (conf. art. 303, inc. 1, del C.P.)

Por mayoría:

XXI.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso el **SOBRESEIMIENTO** de **Jorge Daniel Cuevas** respecto del delito de lavado de activos de origen ilícito -hecho nominado 99- (conf. art. 303 inc. 1 del CP y art. 336, inc. 3, del CPPN).

XXII.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso la **FALTA DE MÉRITO** de **Sebastián Toranzo** respecto del delito de lavado de activos de origen ilícito -hecho nominado 119- (conf. art. 303 inc. 1 del CP y art. 309 del CPPN).

Por unanimidad:

XXIII.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso conceder la **EXCARCELACIÓN** a **Diego Alberto Vieyra Ferreyra**, manteniendo las medidas de coerción adoptadas por el señor Juez Federal interviniente (arts. 316, 317, 319 del CPPN y arts. 210, 221 y 222 del CPPF).

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188

Por mayoría:

XXIV.- DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba -puntos resolutivos 3 a 9 y 11-, en cuanto dispuso **TRABAR EMBARGO** sobre los bienes de los imputados **Natalia Soledad Vieyra Ferreyra, Ruth Noemí Díaz, Eduardo Enrique Mansilla, María Belén Gómez, Damián Gabriel Olivieri Brizuela, Martín José Dus, Jorge Daniel Cuevas y Sebastián Toranzo**, hasta cubrir la suma de pesos quinientos mil (\$ 500.000) o en su defecto inhibirlos de su libre disposición por igual monto, conforme los fundamentos dados en la presente, debiendo efectuarse una nueva resolución sobre el punto debidamente fundada (conf. art. 123 y 518 del CPPN).

Por unanimidad:

XXV.- DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la resolución dictada con fecha 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso **CONCEDER LA EXCARCELACIÓN** del imputado **Mauricio Andrés Pizzi** (DNI 26.083.711), debiendo el magistrado resolver sobre la aplicación o no de medida de coerción alguna en esta causa, conforme los fundamentos dados en la presente (conf. art. 123 del CPPN).

XXVI.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y en consecuencia **DISPONER -POR MAYORÍA-** que el Juez Federal interviniente corra **vista al Ministerio Público Fiscal**, a fin de que se expida respecto de los hechos presuntamente configurativos del delito de "asociación ilícita fiscal" promovidos en ambos sumarios acumulados, sea mediante su ratificación, reformulación o ampliación, a efectos de establecer con precisión sus contornos e implicados en los





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B
FCB 1392/2020/87/CA30

hechos, con base en las pruebas colectas en ambos sumarios y a partir de un análisis global de los sucesos bajo investigación, luego de lo cual **el magistrado deberá resolver la situación procesal** de los imputados **Mauricio Andrés Pizzi, Lucas Fernando Zopetto, Pablo Darío Barbieri y Rodolfo Luis Tapiero** con relación al hecho nominado primero calificado como **“asociación ilícita fiscal”**, con la mayor celeridad posible.

Por unanimidad:

XXVII.- Sin costas (arts. 530 y 531 del CPPN).

XXVIII.- Regístrese y hágase saber. Cumplimentado, publíquese y bajen.

ABEL G. SÁNCHEZ TORRES
Juez de Cámara

LILIANA NAVARRO
Jueza de Cámara
-en disidencia parcial-

JULIÁN FALCUCCI
Juez de Cámara

MARIO OLMEDO
Secretario de Cámara

Fecha de firma: 14/08/2023

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#36351724#379063266#20230814120851188